


CREA AHORRO COLECTIVO (5%)

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11372-13

REFERENCIA	Crea el Nuevo Ahorro Colectivo, aumenta la cobertura del Sistema de Pensiones y Fortalece el Pilar Solidario
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	De Hacienda y Del Trabajo y Previsión Social
INGRESO	14 de agosto de 2017
ARTICULADO	Cinco artículos permanentes y veinte transitorios; de los artículos permanentes, el primero crea el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo; el segundo aprueba la ley que regula al Consejo de Ahorro Colectivo; el tercero modifica el decreto ley 3.500, de 1980 sobre sistema de pensiones; el cuarto modifica la ley 19.728 sobre Seguro de Desempleo, y el quinto modifica la ley 20.255 (de marzo de 2008) sobre Reforma Previsional

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Con la creación del Nuevo Ahorro Colectivo, el gobierno descartó incorporar todo el futuro aumento en la cotización en las cuentas individuales de los trabajadores. Con esto, además de desaprovechar la oportunidad de maximizar el incremento en sus pensiones y minimizar el efecto negativo sobre el empleo, se instalaría un componente de reparto altamente regresivo, que podría traer serios perjuicios para los futuros montos de pensiones 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Dos son las materias centrales y de mayor relevancia: A) la cotización adicional de 5% que da lugar al Ahorro Previsional Colectivo, y B) la organización del Consejo de Ahorro Colectivo, cuya creación es materia de un proyecto de ley paralelo que modifica la Carta Fundamental. Adicionalmente (C) se formulan otras modificaciones de menor entidad o de armonización con las dos iniciativas anteriores.

A.- El 5% adicional será administrado por el Consejo de Ahorro Colectivo; de dicho 5%, tres puntos porcentuales (un 3%), en régimen, se depositarán en una cuenta de ahorro personal; los dos puntos restantes (2%) irán al Fondo de Ahorro Colectivo.

Con cargo al Fondo se financiarán las siguientes prestaciones, en el orden de prelación que a continuación se indica:

1. Aporte intergeneracional, que asciende a un 20% sobre la pensión pagada por la AFP. Este aporte consiste en la transferencia de recursos desde los cotizantes a los pensionados de ese momento. Este aporte corresponderá a los que se hubieren pensionado antes o después de esta ley, con más de 65 años de edad (tanto hombres como mujeres) que perciban pensiones de vejez, de vejez anticipada o de invalidez

definitiva (no cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, SIS), pagadas solo por el actual sistema de capitalización individual (AFP).

Una vez que comiencen a pensionarse los titulares de cuentas de ahorro personal administradas por el Consejo de Ahorro Colectivo, lo que perciban de su cuenta será imputado al 20% de mejora de pensión prevista como aporte intergeneracional. Así, por ejemplo, una pensión de \$300.000 recibiría un aporte de \$60.000; pero si el afiliado obtiene \$50.000 de su cuenta personal, entonces solo recibirá \$10.000 como aporte intergeneracional con cargo al Fondo.

2. Bono Compensatorio para las mujeres, pensionadas solamente en una AFP a partir de la aplicación de este nuevo sistema, que gocen de pensión de vejez, de vejez anticipada o de invalidez definitiva (no cubierta por el SIS). Este aporte permitirá a las mujeres pensionadas a partir de los 65 años, percibir una pensión equivalente al 100% de la que corresponde a un hombre con igual ahorro previsional, con un tope de pensión autofinanciada de hasta \$300.000. Pero las mujeres pensionadas después de los 60 y antes de los 65 años, verán reducida proporcionalmente su pensión, hasta cero aporte si se pensionaron antes de los 60 años.
3. Aporte solidario Intrageneracional, que opera con el remanente del Fondo de Ahorro Colectivo una vez que se hayan pagado los aportes intergeneracional y el bono compensatorio para las mujeres. Este remanente (en caso de existir) se divide por el total de meses cotizados por los afiliados, y cada cotizante termina recibiendo un aporte según el número de meses que aportó. El monto es igual para igual número de meses cotizados, sin importar cuánto cotizó.

B.- El Consejo de Ahorro Colectivo es un nuevo ente estatal que recaudará y administrará toda la mayor cotización de los trabajadores; se crea como “organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”. Deberá velar “por el interés de las y los actuales y futuros afiliados del sistema y la maximización de la rentabilidad neta de largo plazo de los fondos, sujeta a niveles adecuados de riesgo”.

El Consejo financiará en régimen el total de sus gastos mensuales a través de un descuento sobre el saldo del o los Fondos de Ahorro Personal del Sistema. No obstante, durante los primeros seis años de funcionamiento dicha comisión no podrá superar un 0,5% del saldo señalado. Además, recibirá un aporte fiscal inicial equivalente a cerca de US\$ 150 millones.

C.- Otras modificaciones:

1. Aumento gradual en cinco años del actual tope imponible (75,7 UF) hasta llegar al del seguro de cesantía (113,5 UF);
2. Fijación en 76 UF del monto sobre el cual las AFP podrán cobrar comisión (el adicional a dicho límite iría completo a las cuentas de capitalización individual);

3. Incorporación de los independientes a la obligación a cotizar, permitiéndoles optar (en un periodo de 6 años) por cotizar por un porcentaje inferior de su renta (el cual sube gradualmente hasta llegar a 100%);
4. Disminución del monto mínimo de pensión necesaria para acceder a una renta vitalicia, desde la pensión básica solidaria (\$104.646) a 3 UF (\$79.730);
5. Seguro para pensionados por retiro programado que estén en el pilar solidario (manteniéndoles su pensión inicial constante) y también para los pensionados por RP que, perteneciendo al 60% más pobre, tienen una pensión autofinanciada superior a la pensión máxima con aporte solidario (\$309.231), a quienes se les asegura una pensión mínima equivalente a la PBS;
6. Eliminación del factor de ajuste de los retiros programados;
7. Aumento de beneficios del seguro de cesantía respecto a las lagunas previsionales, haciéndose extensivo el aporte a la cuenta individual obligatoria para pensiones para trabajadores desempleados que usen la Cuenta Individual por Cesantía (CIC) del Seguro de Cesantía (no sólo los que usen Fondo Solidario). Este beneficio se cargaría al Fondo Solidario, y estaría exento de pago de comisiones a las AFP ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

CARÁCTER REGRESIVO

El primer aspecto destacable es su carácter regresivo tanto en lo que respecta a la forma en que se financia, como en relación al diseño de los beneficios que el Nuevo Ahorro Colectivo entrega.

Respecto de los beneficios que entrega cabe señalar:

1. Es regresivo que los pensionados de mayores ingresos, específicamente, todo pensionado con una pensión igual o superior a \$ 600.000, reciban un aporte de \$ 120.000, monto mayor al que el Estado entrega a los pensionados más pobres (PBS = \$ 104.646).
2. Los pensionados del Pilar Solidario, que son los más pobres, recibirán un aumento inferior a 20%, ya que el beneficio no es sobre la pensión total recibida (que contempla el aporte estatal), sino solo sobre la pensión autofinanciada.

Por ejemplo, un pensionado que califica al Pilar Solidario y que tiene una pensión autofinanciada de \$ 100.000, recibe hoy un Aporte Previsional Solidario (APS) de \$ 70.805. Por ende, su pensión mensual es de \$ 170.805.

De acuerdo a las reglas establecidas en el proyecto de ley del gobierno, el aporte intergeneracional para este pensionado sería de \$ 20.000 (20% de \$ 100.000), por lo que su pensión final sería de \$ 190.805, lo

que equivale a un aumento de 12% (y no de 20%) respecto a su pensión final que hubiera recibido sin proyecto de ley.

3. Los que más tienen son los que más reciben en términos absolutos: \$ 60.000 para el que tiene una pensión de \$ 300.000 frente a los \$120.000 para los que tienen una pensión de \$ 600.000.

Respecto a su forma de financiamiento, el Nuevo Ahorro Colectivo, en vez de utilizar las rentas generales de la Nación, grava a los cerca de 5,2 millones de cotizantes para financiar sus beneficios, que en su mayoría son trabajadores dependientes con un sueldo líquido promedio cercano a los \$600 mil. De hecho, más de la mitad de estos trabajadores recibe menos de \$430 mil al mes.

No parece justo que sea este grupo el que, en vez de aprovechar el aumento en la cotización para un necesario incremento de su ahorro previsional para mejorar sus pensiones, deba traspasar parte de sus ingresos al Nuevo Ahorro Colectivo, y con ello destinar de su patrimonio recursos para mejorar las pensiones de los actuales jubilados (incluso los de pensiones altas) y también (a través del componente intrageneracional) de los futuros jubilados con mayor número de cotizaciones, sin importar si ellos son más pobres que los beneficiarios.

EFFECTO SOBRE EL EMPLEO

El Informe de Productividad que se acompañó a este proyecto al Congreso señala que es posible esperar un efecto negativo del aumento en la cotización de 5% en el empleo formal, y que “oscila entre 2.200 y 394.000 empleos menos, con efectos intermedios de 60.000 a 124.000 empleos”. Este efecto correspondería a la cota superior del impacto total de corto plazo, porque no consideraría la potencial valoración que el trabajador tenga de la mayor cotización ni las eventuales reducciones en salarios líquidos y horas trabajadas.

El mismo informe también entrega una estimación del impacto en el empleo formal en el largo plazo, para lo cual se basa en el estudio realizado por el Banco Central ¹, que para el aumento en la cotización de 5% estima una reducción de 0,5% en el empleo formal, bajo el supuesto que los trabajadores valoran 50% de la mayor cotización como beneficios futuros. Esto equivaldría a cerca de 26.000 puestos de trabajo. Además, bajo el mismo supuesto de valoración de los beneficios futuros, se estima una reducción en el largo plazo de los salarios líquidos de 3,3% en términos reales.

De ambos resultados se desprende que la valoración que realicen los trabajadores del beneficio futuro de aumentar hoy la cotización en 5% es clave para dimensionar el impacto negativo que esta medida tendría en el empleo formal (a menor valoración, mayor impacto negativo). No se puede olvidar que la propuesta del gobierno rompe

la relación directa que hoy existe entre mayor ahorro y beneficios que el trabajador percibe en el futuro, puesto que parte importante de la mayor cotización (en un principio toda y en régimen hasta 40%) pasa a financiar las pensiones de otros que son los actuales y futuros jubilados. Este cambio acentúa la probabilidad que el trabajador no valore el incremento en la cotización y que los efectos negativos sobre el empleo formal puedan acercarse a los límites máximos establecidos en el Informe de Productividad entregado por el propio gobierno.

Por el contrario, si la mayor cotización se destinara íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores (manteniéndose así la relación “mayor ahorro, mayor pensión”) y se administrara con la máxima eficiencia y competencia (un administrador monopólico no ayuda a este propósito), es más probable que se valore su beneficio futuro, y que, por ende, el efecto negativo sobre el empleo formal se atenúe, incluso llegando a cero si la valoración por parte del trabajador fuese completa.

Un efecto negativo en el empleo para una reforma como ésta resulta doblemente relevante, porque no se trata solo de los perjuicios para el país y para los hogares de perder puestos de trabajo, sino porque es justamente el empleo formal una de las claves más importantes para mejorar la densidad de cotizaciones y así aumentar las pensiones, que es el problema que se busca resolver.

Por esta razón, y dada la amplia varianza del impacto negativo en el empleo formal presentado en el Informe antedicho, que incluso da cuenta de un riesgo potencial de perjudicar a cerca de 400.000 trabajadores, resulta imperativo que la discusión de los cambios propuestos por el

¹ Banco Central de Chile (Enero 2017) “Evaluación de impactos macroeconómicos de largo plazo de modificaciones al sistema de pensiones”.

gobierno se realice con la necesaria seriedad y profundidad para evaluar con precisión estos efectos, lo cual no se condice con la urgencia con que se intenta despachar esta iniciativa.

RIESGOS Y PERSPECTIVAS

Existen dos aspectos adicionales que comentar. El primero es que aunque el articulado del proyecto de ley limita en el tiempo el aporte intergeneracional, nada asegura que el componente de reparto vaya a desaparecer en el tiempo, ya que es muy posible que en el futuro existan presiones políticas para que se sigan entregando beneficios a pensionados con cotizaciones de los trabajadores, por ejemplo, de la generación que habrá contribuido de manera importante con recursos para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, pero que no recibirá beneficio alguno por ello en el futuro.

Por otra parte, siendo el aporte de 3% a las cuentas personales el único componente de la mayor cotización que permite con certeza mejorar parcialmente las pensiones de los trabajadores en el futuro, atenuando los efectos negativos en el empleo (aun estando administrado monopólicamente por el nuevo Consejo), no parece justo que de ahí se extraigan los recursos para financiar todos los gastos del nuevo aparataje estatal que esta reforma crea. El ya limitado efecto en mayores pensiones con esto podría menguarse aún más.

En resumen, el proyecto demuestra que el gobierno descartó incorporar el aumento en la cotización en las cuentas individuales de los trabajadores. Con esto, además de desaprovecharse la oportunidad de maximizar el incremento en sus pensiones y minimizar el efecto negativo sobre el empleo, se instalaría un componente solidario altamente regresivo, que podría traer serios perjuicios a las determinantes de una mayor pensión en el futuro.

Como alternativa, ya que se trata de introducir solidaridad, se puede proponer que se destine, por ejemplo, un aumento de cotización de 4%, pero íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores. Para mejorar, por su parte las pensiones en curso, se utilizarían como fuente de financiamiento las arcas fiscales, lo cual resulta más justo para alcanzar el objetivo último de mejorar las pensiones ■■■



TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

SOBRE EL SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO

ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, que establece Nuevo Sistema de Pensiones, de 1980:

1. Modifícase su artículo 1°, en el siguiente sentido:
 - a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “la presente ley” por la frase “los Títulos I al XVII de la presente ley”.
 - b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:

“A su vez, créase un sistema de ahorro y transferencias solidarias con fines previsionales, denominado Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, que se regirá por las normas del Título XVIII de la presente ley y será administrado por una entidad pública, llamada Consejo de Ahorro Colectivo.”².
2. Trasládase el actual artículo 2° a continuación del Título II que antecede al artículo 3° y que pasará a denominarse “De los Afiliados, Beneficiarios y Causantes”³.
3. Modifícase el inciso primero del artículo 92 F, en el siguiente sentido:
 - a) Intercálase en el encabezado, a continuación del guarismo “92”, la frase “y aquellas señaladas en el artículo 184 del Título XVIII”.

² El artículo 1° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 1°.- Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por los Títulos I al XVII de la presente ley.

La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones.

A su vez, créase un sistema de ahorro y transferencias solidarias con fines previsionales, denominado Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, que se regirá por las normas del Título XVIII de la presente ley y será administrado por una entidad pública, llamada Consejo de Ahorro Colectivo.

³ Denominación actual: TITULO II De los Beneficiarios y Causantes.

- b) Agrégase en el numeral ii), a continuación del guarismo “92”, la expresión “y el inciso segundo del artículo 187”.
- c) Reemplázase el numeral iv), por el siguiente:

“iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado del saldo que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que establezca la Superintendencia de Pensiones, mediante norma de carácter general, o el Consejo de Ahorro Colectivo a través de las normas que dicte al efecto, según corresponda.”⁴.

4. Modifícase el artículo 92 G, en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase la frase “en tercer lugar, las destinadas al financiamiento de la cotización obligatoria” por “en tercer lugar, las destinadas al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo; en cuarto lugar, las destinadas al financiamiento de la cotización obligatoria”.
- b) Sustitúyense las expresiones “cuarto lugar”, “refiere el orden inmediatamente anterior” y “quinto lugar” por “quinto lugar”, “refieren los dos órdenes inmediatamente anteriores” y “sexto lugar”, respectivamente⁵.
- c) Agrégase el siguiente Título XVIII, nuevo, pasando el actual Título XVIII a ser Título XIX⁶:

4 El artículo 92 F quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo 92 y aquellas señaladas en el artículo 184 del Título XVIII, se pagarán de acuerdo al siguiente orden:

- i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere realizado el trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador dependiente;
- ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso cuarto del artículo 92 y el inciso segundo del artículo 187;
- iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, y

(REEMPLAZADO) —iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado del saldo que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general:

Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería General de la República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

La Tesorería General de la República deberá enterar, con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo Nacional de Salud.

5 El artículo 92 G quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el numeral iii) del inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones que le faltaren por pagar, se pagarán en primer lugar las destinadas al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59; en segundo lugar, las cotizaciones del Seguro Social de la ley N° 16.744; en tercer lugar, las destinadas al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo; en cuarto lugar, las destinadas al financiamiento de la cotización obligatoria para pensión establecida en el inciso primero del artículo 17 y a la comisión señalada en el artículo 28; en quinto lugar, los saldos insolutos pendientes de las cotizaciones a que se refieren los dos órdenes inmediatamente anteriores, que no hubieren podido cubrirse en los años precedentes, reajustados de conformidad con lo dispuesto en el inciso décimo del artículo 19; y, en sexto lugar, las cotizaciones de salud señaladas en el inciso primero del artículo 92.

6 Los textos disponibles del decreto ley 3.500, de 1980, que fueron consultados, no contienen un TÍTULO XVIII, que pasaría a ser XIX según el proyecto. Por lo tanto, se asume que el nuevo Título que se introduce es el XVII y el actual XVII pasaría a ser XVIII.

"TÍTULO XVIII

SOBRE EL SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO

Párrafo 1°

ASPECTOS GENERALES

Artículo 182.- El Sistema de Ahorro Previsional Colectivo complementará las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia del sistema de capitalización individual, regulado en los Títulos I al XVII de esta ley. El Sistema de Ahorro Previsional Colectivo estará estructurado en base a cuatro componentes: ahorro en cuentas personales, aporte solidario intergeneracional, bono compensatorio para las mujeres y aporte solidario intrageneracional, de acuerdo a lo previsto en el presente Título.

El Sistema de Ahorro Previsional Colectivo será financiado con la cotización establecida en el Párrafo 2° de este Título [Cotización al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo], la que se destinará a uno o más Fondos de Ahorro Personal y a un Fondo de Ahorro Colectivo, definidos en el Párrafo 3° de este Título [Fondos del Sistema de Ahorro Previsional Colectivo].

Artículo 183.- Estarán afiliados al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo los trabajadores afiliados al sistema de pensiones derivado de la capitalización individual, según se establece en los artículos 27 y 89⁸ de esta ley.

Las Administradoras deberán entregar al Consejo de Ahorro Colectivo la información personal de los afiliados, necesaria para la apertura y operación de las cuentas de ahorro personal a que se refiere el artículo 188.

Párrafo 2°

DE LA COTIZACIÓN AL SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO

Artículo 184.- La obligación de cotizar al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo se genera automáticamente respecto de los afiliados que mantengan una relación laboral en calidad de dependientes y para toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador, ejerza personalmente una actividad mediante la cual obtenga rentas brutas gravadas por el artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta⁹.

7 Trabajadores dependientes.

8 Trabajadores independientes.

9 ARTÍCULO 42°.- Se aplicará, calculará y cobrará un impuesto en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 [tasa entre 4 y 35% con un mínimo exento de 13,5 UTM], sobre las siguientes rentas:

2°.- Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el número anterior, incluyéndose los obtenidos por los auxiliares de la administración de justicia por los derechos que conforme a la ley obtienen del público, los obtenidos

La cotización al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo será de cargo del empleador, en el caso de los afiliados dependientes, y del propio afiliado, en el caso de los independientes.

Artículo 185.- La cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo corresponderá a un cinco por ciento de la remuneración o renta imponible del afiliado y será recaudada por el Consejo de Ahorro Colectivo.

Serán aplicables a la cotización establecida en el presente artículo, las definiciones de remuneración, renta y tope imponible, señaladas en los artículos 14¹⁰, 15¹¹ y 16¹² de esta ley.

Para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la cotización establecida en este artículo tendrá el carácter de beneficio previsional para el trabajador y para efectos del gasto quedará comprendida en el número 6¹³ del inciso cuarto del artículo 31 de la citada ley.

por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales.

Para los efectos del inciso anterior se entenderá por «ocupación lucrativa» la actividad ejercida en forma independiente por personas naturales y en la cual predomine el trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica por sobre el empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de capital.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales, podrán optar por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría, sujetándose a sus disposiciones para todos los efectos de esta ley. El ejercicio de la opción deberá practicarse dentro de los tres primeros meses del año comercial respectivo, presentando una declaración al Servicio de Impuestos Internos en dicho plazo, acogiéndose al citado régimen tributario, el cual regirá a contar de ese mismo año. Para los efectos de la determinación en el primer ejercicio de los pagos provisionales mensuales a que se refiere la letra a) del artículo 84°, se aplicará por el ejercicio completo, el porcentaje que resulte de la relación entre los ingresos brutos percibidos o devengados en el año comercial anterior y el impuesto de primera categoría que hubiere correspondido declarar, sin considerar el reajuste del artículo 72°, pudiéndose dar de abono a estos pagos provisionales las retenciones o pagos provisionales efectuados en dicho ejercicio por los mismos ingresos en virtud de lo dispuesto en el artículo 74°, número 2° y 84°, letra b), aplicándose al efecto la misma modalidad de imputación que señala el inciso primero del artículo 88°. Los contribuyentes que optaren por declarar de acuerdo con las normas de la primera categoría, no podrán volver al sistema de tributación de la segunda categoría.

En ningún caso quedarán comprendidas en este número las rentas de sociedades de profesionales que exploten establecimientos tales como clínicas, maternidades, laboratorios u otros análogos, ni de las que desarrollen algunas de las actividades clasificadas en el artículo 20.

10 Artículo 14.- Se entiende por remuneración la definida en el artículo 41 del Código del Trabajo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso tercero del artículo 20 de esta ley. La parte de remuneraciones no pagada en dinero será avaluada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, conforme a normas uniformes.

11 Artículo 15° Renta es la cantidad de dinero que declara un afiliado independiente como base de cálculo de su cotización, de acuerdo a las normas que se establecen en el Título IX.

12 Artículo 16.- La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible de sesenta unidades de fomento reajustadas considerando la variación del índice de remuneraciones reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.

El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día de cada año y será determinado mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones.

Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en unidades de fomento y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.

Si un trabajador percibe simultáneamente remuneraciones de dos o más empleadores o, todas las remuneraciones se sumarán para los efectos señalados en el inciso anterior, debiendo la Superintendencia determinar la forma en que se efectúen y enteren las cotizaciones que señala la ley. En todo caso, aquella parte de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.

Los trabajadores del sector público afiliados al Sistema podrán optar, en forma definitiva mientras permanezcan en el mismo empleo, porque tengan el carácter de imponibles las asignaciones que no tienen dicha calidad, con excepción de aquellas que el Código del Trabajo declara que no constituyen remuneraciones. La mayor imponibilidad se considerará sólo para los efectos de esta ley.

Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se determine en función del procedimiento indicado en este artículo.

13 Artículo 31.- [...]

En caso de incapacidad laboral del trabajador, la cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo continuará siendo de cargo del empleador o del afiliado independiente, según corresponda. Tratándose de afiliados dependientes, esta cotización deberá efectuarse sobre la base de la última remuneración imponible correspondiente al mes anterior a aquél en el que se haya iniciado la licencia o en su defecto la estipulada en el respectivo contrato de trabajo.

Artículo 186.- Cesará la obligación de cotizar para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo al momento de pensionarse el afiliado por vejez o invalidez definitiva, o al cumplimiento de los 65 años de edad, lo que sea primero.

Los empleadores y los afiliados independientes no podrán continuar cotizando en el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, a partir de la fecha en que cese la obligación a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 187.- Para los afiliados dependientes, la cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo deberá ser declarada y pagada por el empleador, en el Consejo de Ahorro Colectivo, en los plazos y forma a que se refiere el artículo 1914 de esta ley.

Tratándose de los afiliados independientes, la cotización antes referida se pagará en la forma y oportunidad que establecen los artículos 92 F¹⁵ y 92 G¹⁶.

Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto se relacionen con el giro del negocio:

6°.- Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y contractuales, y asimismo, toda cantidad por concepto de gastos de representación [...]

14 Artículo 19° Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX o la entidad pagadora de subsidios, según corresponda, en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y oportunidad que establece el artículo 92 F.

[...].

15 Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo 92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden: con las cotizaciones obligatorias que hubiere realizado el trabajador independiente, en el caso que además fuere trabajador dependiente;

- ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso cuarto del artículo 92;
- iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en conformidad a lo establecido en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, y
- iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado del saldo que pudiere resultar, el cual deberá efectuarse en el plazo que establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general.

Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso precedente, el Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Tesorería General de la República, en el mismo plazo que establece el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la individualización de los afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

La Tesorería General de la República deberá enterar, con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo Nacional de Salud.

16 Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el numeral iii) del inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones que le faltaren por pagar, se pagarán en primer lugar las destinadas al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59; en segundo lugar, las cotizaciones del Seguro Social de la ley N° 16.744; en tercer lugar, las destinadas al financiamiento de la cotización obligatoria para pensión establecida en el inciso primero del artículo 17 y a la comisión señalada en

La cotización que efectúen estos afiliados se registrará también por lo dispuesto en el inciso cuarto¹⁷ del artículo 92, referido a la posibilidad de efectuar mensualmente pagos provisionales de la cotización señalada en el presente Título.

El Servicio de Impuestos Internos deberá verificar anualmente el monto efectivo que debió pagar el afiliado independiente, por concepto de las cotizaciones señaladas en el presente Título, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 D¹⁸. Asimismo, deberá informar a la Tesorería General de la República y al Consejo de Ahorro Colectivo las cotizaciones que debió pagar el afiliado en su calidad de trabajador independiente, según se dispone en el inciso segundo del artículo 92 F¹⁹.

Para efectos del inciso anterior, el Consejo de Ahorro Colectivo deberá haber informado previamente al Servicio de Impuestos Internos las cotizaciones al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo efectuadas por los afiliados, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 92 A²⁰.

La Tesorería General de la República deberá transferir la cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo al Consejo de Ahorro Colectivo en los términos previstos en el inciso tercero del artículo 92 F.

el artículo 28; en cuarto lugar, los saldos insolutos pendientes de las cotizaciones a que se refiere el orden inmediatamente anterior, que no hubieren podido cubrirse en los años precedentes, reajustados de conformidad con lo dispuesto en el inciso décimo del artículo 19; y, en quinto lugar, las cotizaciones de salud señaladas en el inciso primero del artículo 92.

17 Los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de pensiones que estén obligados a pagar por el mismo año en que se efectuaron dichos pagos. En este caso, el trabajador podrá pagar la cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el Fondo Nacional de Salud.

18 Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos verificará anualmente el monto efectivo que debió pagar el afiliado independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados, considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este reglamento.

19 Véase más arriba nota al artículo 187.

20 Artículo 92.- Los trabajadores independientes que en el año respectivo perciban ingresos de los señalados en el inciso primero del artículo 90, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en los incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo 92 F. Los afiliados independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud, que será recaudado por la Administradora y enterado en el Fondo Nacional de Salud.

No obstante lo anterior, los afiliados a que se refiere este Párrafo, podrán optar por el sistema de salud que se establece en los incisos tercero y siguientes del artículo 84.

Cuando el afiliado opte de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior y decida pagar una cotización superior al siete por ciento, deberá así establecerlo al momento de contratar con la institución de salud respectiva. En todo caso, el cotizante gozará de la exención establecida en el artículo 18, hasta un monto máximo equivalente al siete por ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor de la unidad de fomento al último día del mes anterior a aquél en que se pague la cotización.

Párrafo 3°

DE LOS FONDOS DEL SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO

Artículo 188.- La parte de la cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, que represente el tres por ciento de las remuneraciones o rentas imponibles de los afiliados, se abonará mensualmente en una cuenta de propiedad de cada afiliado, la que se denominará “cuenta de ahorro personal” y será administrada por el Consejo de Ahorro Colectivo.

Aquella parte de la cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, que represente el dos por ciento restante de las remuneraciones o rentas imponibles de los afiliados, se abonará mensualmente al Fondo de Ahorro Colectivo, que deberá administrar el Consejo de Ahorro Colectivo.

Tratándose de los afiliados independientes, el abono a la cuenta de ahorro personal y al Fondo de Ahorro Colectivo se practicará con la periodicidad correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 187.

Artículo 189.- El o los Fondos de Ahorro Personal estarán constituidos por las cuentas de ahorro personal de propiedad de los afiliados al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo.

Los recursos del o de los Fondos de Ahorro Personal se destinarán al financiamiento de las pensiones de vejez, vejez anticipada, invalidez y sobrevivencia de los afiliados, de acuerdo a lo establecido en el Párrafo 7° de este Título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 191 de esta ley.

Artículo 190.- Los recursos disponibles en el Fondo de Ahorro Colectivo se destinarán al financiamiento de los beneficios que a continuación se indican, en el siguiente orden de prelación:

- i) Aporte solidario intergeneracional, a que se refiere el Párrafo 4° de este Título.
- ii) Bono compensatorio para las mujeres, a que se refiere el Párrafo 5° de este Título.
- iii) Aporte solidario intrageneracional, a que se refiere el Párrafo 6° de este Título.

Anualmente, el Consejo de Ahorro Colectivo deberá encargar la realización de un estudio actuarial que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Ahorro Colectivo para un horizonte de 20 años, incluyendo una proyección de los ingresos del Fondo y de los desembolsos estimados para el aporte solidario intergeneracional y el bono compensatorio para las mujeres.

En el evento que, para alguno de los años comprendidos en el estudio actuarial, la suma anual proyectada de dichos desembolsos supere el 100% de los ingresos anuales estimados para el mismo periodo, el monto de los beneficios a que se refiere el inciso anterior, calculado de conformidad a los párrafos 4° y 5° siguientes, deberá disminuirse proporcionalmente para cada beneficiario y en forma gradual a partir del tercer año anterior a aquel en que se proyecta la ocurrencia del evento, a efectos de que la condición anterior deje de verificarse.

Si habiéndose aplicado la disminución a que se refiere el inciso anterior y como resultado de un posterior estudio actuarial la suma anual proyectada de los desembolsos resulta inferior al 100% de los ingresos anuales estimados en los tres años siguientes a aquel en que se proyectó la ocurrencia del evento, el monto de los beneficios a que se refiere el inciso segundo, deberá incrementarse proporcionalmente para cada beneficiario, hasta alcanzar el citado límite de 100% o lo que corresponda de conformidad a los párrafos 4° y 5° siguientes, lo que sea menor.

Lo establecido en los incisos anteriores se sujetará a lo que disponga el reglamento a que se refiere el artículo 206²¹.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el Fondo de Ahorro Colectivo no fuere suficiente para financiar íntegramente el aporte solidario intergeneracional y el bono compensatorio para las mujeres, dichos beneficios deberán disminuirse proporcionalmente para cada beneficiario en el respectivo mes, de acuerdo a los recursos disponibles.

Artículo 191.- El Consejo de Ahorro Colectivo financiará los gastos propios de su funcionamiento, incluyendo una fracción destinada a la reposición del costo de capital, a través de un descuento sobre el saldo del o los Fondos de Ahorro Personal del Sistema, el que se materializará en transferencias mensuales desde éstos al patrimonio del Consejo de Ahorro Colectivo. El descuento a que se refiere este artículo corresponderá al total de los gastos mensuales y se realizará sobre el saldo que exista en el o los Fondos de Ahorro Personal, a prorrata de sus cuotas.

Artículo 192.- El o los Fondos de Ahorro Personal y el Fondo de Ahorro Colectivo constituirán patrimonios independientes entre sí y diversos del patrimonio del Consejo de Ahorro Colectivo. Éste deberá llevar contabilidad separada del patrimonio de cada uno de los Fondos.

El valor de cada uno de los Fondos de Ahorro Personal se expresará en cuotas. Todas las cuotas de un Fondo serán de igual monto y características.

Los Fondos del Sistema de Ahorro Previsional Colectivo serán inembargables y no podrá constituirse sobre ellos derechos reales ni personales de ningún tipo, medidas precautorias, prohibiciones, derechos de retención ni ninguna otra forma de gravamen o restricción que limite o pueda limitar su libre disponibilidad, y estarán destinados sólo a generar los beneficios a que se refiere el presente Título, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 191.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los recursos que componen los Fondos del Sistema de Ahorro Previsional Colectivo podrán entregarse en garantía en las Cámaras de Compensación, sólo con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de las operaciones con instrumentos derivados, y siempre que éstas cumplan las condiciones de seguridad para custodiar estos títulos, y otras condiciones que se establezcan para los Fondos de Pensiones, de conformidad al artículo 34²² de la presente ley. En este caso, dichos recursos podrán ser embargados sólo para hacer efectivas las garantías constituidas para caucionar las obligaciones antes mencionadas.

21 Véase más adelante este artículo, en el mismo proyecto de ley.

22 Artículo 34.- Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los recursos que componen los Fondos de Pensiones podrán entregarse en garantía en las Cámaras de Compensación, sólo con

A su vez, cesará también la inembargabilidad, para los efectos de dar cumplimiento forzado a las obligaciones emanadas de los contratos de carácter financiero a que se refieren las letras j) y m) del artículo 45²³ de la presente ley.

Los incrementos que experimenten los recursos del o los Fondos de Ahorro Personal no constituirán renta para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Párrafo 4°

DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

Artículo 193.- Los afiliados pensionados por vejez, vejez anticipada e invalidez definitiva no cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia serán beneficiarios, a partir de los 65 años, del aporte solidario intergeneracional regulado en el presente Párrafo.

El aporte solidario intergeneracional será mensual y su monto corresponderá al veinte por ciento del menor valor entre la pensión autofinanciada de referencia a que se refiere el artículo siguiente y seiscientos mil pesos.

Los afiliados que hayan financiado su pensión con recursos de su cuenta de ahorro personal mantendrán su derecho a recibir un aporte solidario intergeneracional igual a la diferencia positiva entre el monto resultante del cálculo establecido en el inciso anterior, y la pensión autofinanciada de referencia financiada con el saldo de la cuenta de ahorro personal y calculada de la misma forma.

el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de las operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) del artículo 45, y siempre que éstas cumplan las condiciones de seguridad para custodiar estos títulos, y otras condiciones que al efecto determine la Superintendencia mediante normas de carácter general. En este caso, dichos recursos podrán ser embargados sólo para hacer efectivas las garantías constituidas para caucionar las obligaciones antes mencionadas.

A su vez, cesará también la inembargabilidad, los contratos de carácter financiero a que se refieren las letras j) y m) del artículo 45.

En caso que la Administradora tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, los Fondos serán administrados y liquidados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.

23 Artículo 45.- Las inversiones que se efectúen con recursos de un Fondo de Pensiones tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones se considerará contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de las Administradoras.

Los recursos del Fondo de Pensiones, sin perjuicio de los depósitos en cuenta corriente a que se refiere el artículo 46, deberán ser invertidos en:

- j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que m) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.

El valor establecido en el inciso segundo se reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o la entidad que lo reemplace, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que dicha variación alcance o supere el diez por ciento.

Con todo, si transcurren doce meses desde el último reajuste sin que la variación del referido índice alcance el diez por ciento, el valor se reajustará en el porcentaje de variación que aquél hubiere experimentado en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla el periodo señalado, según el caso.

Respecto de afiliados pensionados en la modalidad de retiro programado por vejez o invalidez no cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no sean beneficiarios del aporte previsional solidario establecido en la ley N° 20.255, y una vez agotado el saldo de su cuenta de capitalización individual, el aporte solidario intergeneracional se pagará en la forma establecida en el reglamento a que se refiere el artículo 206²⁴.

El aporte solidario intergeneracional se extinguirá al fallecimiento del beneficiario.

Artículo 194.- La pensión autofinanciada de referencia se calculará conforme a lo establecido en la letra g) del artículo 2 de la ley N° 20.255²⁵.

Con todo, para los afiliados que se pensionen en virtud de lo dispuesto en el artículo 68²⁶ de la presente ley, la pensión autofinanciada de referencia se calculará considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez anticipada.

Artículo 195.- El Consejo de Ahorro Colectivo será el responsable de efectuar el cálculo del aporte solidario intergeneracional que corresponda a cada afiliado y de transferirlo mensualmente a las entidades que deban efectuar los pagos de las respectivas pensiones. Dichas entidades estarán obligadas a pagar este aporte conjuntamente con la pensión.

24 Véase más adelante este artículo, del mismo proyecto de ley.

25 La ley 20.255 estableció la reforma previsional en el año 2008.

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:

g) Pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 74 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.

26 Pensión anticipada, antes de cumplir los 60 años si es mujer o 65 si es varón.

Párrafo 5°

DEL BONO COMPENSATORIO PARA LAS MUJERES

Artículo 196.- El bono compensatorio para las mujeres a que se refiere el presente Párrafo corresponderá a un monto en dinero que se otorgará mensualmente a las mujeres afiliadas al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, con el objeto de compensar su mayor expectativa de vida en relación con la de los hombres.

Artículo 197.- Las mujeres pensionadas por vejez o invalidez definitiva no cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, serán beneficiarias, a partir de los 65 años de edad, del bono compensatorio que se regula en el presente Párrafo.

El bono compensatorio se determinará en base a una proporción de la pensión autofinanciada de referencia de la mujer, calculada según lo establecido en la letra g)²⁷ del artículo 2 de la ley N° 20.255, la que para estos efectos tendrá un límite máximo de trescientos mil pesos, el que se reajustará en la forma establecida en los incisos cuarto y quinto del artículo 193. La citada proporción se calculará como la diferencia porcentual entre el capital necesario para financiar todas las pensiones de referencia que genere la afiliada para ella y sus beneficiarios, y el capital necesario que se calcule utilizando la tabla de mortalidad que corresponde a un hombre en las mismas condiciones. El cálculo del capital necesario se efectuará considerando la edad y el grupo familiar de la beneficiaria a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez y las tablas de mortalidad y tasa de interés a que se refiere el artículo 65²⁸.

El bono compensatorio corresponderá al cien por ciento del monto definido en el inciso anterior, si la beneficiaria se pensiona por vejez a partir de los 65 años de edad; al setenta y cinco por ciento de dicho monto, si la beneficiaria se pensiona por vejez entre los 64 y antes de los 65 años de edad; al cincuenta por ciento, si la beneficiaria se pensiona por vejez entre los 63 y antes de los 64 años de edad; al veinticinco por ciento, si la beneficiaria se pensiona por vejez entre los 62 y antes de los 63 años de edad; al quince por ciento, si la beneficiaria se pensiona por vejez entre los 61 y antes de los 62 años de edad, y al cinco por ciento para las mujeres que se pensionen por vejez entre los 60 y antes de los 61 años de edad. No tendrán derecho al bono las mujeres que se pensionen antes de la edad legal.

Aquellas mujeres que se pensionen por vejez en virtud de las disposiciones del artículo 68 bis²⁹ se considerarán, para estos efectos, pensionadas a la edad que resulte de sumar a la edad efectiva de pensión, la rebaja de la edad legal para pensionarse por vejez a que tenían derecho según lo establecido en el citado artículo.

27 Véase más arriba nota al artículo 194.

28 El artículo 65, por su extensión, se incluye como **ANEXO I**.

29 Artículo 68 bis.- Los afiliados que desempeñen o hubieren desempeñado labores calificadas como pesadas y no cumplan los requisitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, podrán obtener una rebaja de la edad legal para pensionarse por vejez, de dos años por cada cinco que hubieren efectuado la cotización del dos por ciento a que se refiere el artículo 17 bis, con un máximo de diez años y siempre que al acogerse a pensión tengan un total de veinte años de cotizaciones o servicios computables en cualquiera de los Sistemas Previsionales y de acuerdo a las normas del régimen que corresponda. Esta rebaja será de un año por cada cinco, con un máximo de cinco años, si la cotización a que se refiere el artículo 17 bis, hubiese sido rebajada a un uno por ciento. Las fracciones de períodos de cinco años en que se hubieren efectuado las referidas cotizaciones darán derecho a rebajar la edad en forma proporcional al tiempo en que se hubieren realizado las respectivas cotizaciones.

Tratándose de pensionadas por invalidez definitiva no cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, el bono compensatorio corresponderá al cien por ciento del monto definido en el inciso segundo del presente artículo.

Respecto de las mujeres pensionadas en la modalidad de retiro programado por vejez o invalidez no cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no sean beneficiarias del aporte previsional solidario establecido en la ley N° 20.255, y una vez agotado el saldo de su cuenta de capitalización individual, el bono compensatorio se pagará en la forma establecida en el reglamento a que se refiere el artículo 206.

El bono compensatorio para las mujeres se extinguirá al fallecimiento de la beneficiaria.

Artículo 198.- El Consejo de Ahorro Colectivo calculará el monto del bono compensatorio que corresponderá a cada beneficiaria, y lo transferirá mensualmente a las entidades que deban efectuar los pagos de las respectivas pensiones. Dichas entidades estarán obligadas a pagar este bono conjuntamente con la pensión.

Párrafo 6°

DE LA SOLIDARIDAD INTRAGENERACIONAL

Artículo 199.- El saldo del Fondo de Ahorro Colectivo, descontado el aporte solidario intergeneracional y el bono compensatorio para las mujeres, se transferirá anualmente a las cuentas de ahorro personal de los afiliados, en la forma de un aporte solidario intrageneracional.

El saldo a solidarizar cada año corresponderá a la suma de las cotizaciones pagadas correspondientes a las remuneraciones y rentas devengadas en el año calendario anterior, descontados los beneficios a que se refiere el inciso precedente.

Artículo 200.- Los afiliados tendrán derecho al aporte solidario intrageneracional, siempre que registren cotizaciones en el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, durante el año calendario anterior al cálculo, aun cuando hubiesen retirado el saldo de su cuenta de ahorro personal para efectos de pensión, en cuyo caso el respectivo aporte solidario intrageneracional se transferirá para su pago a suma alzada a las entidades que deban efectuar los pagos de las respectivas pensiones. Dichas entidades estarán obligadas a pagar este aporte conjuntamente con la pensión.

El aporte solidario intrageneracional será proporcional al número de cotizaciones registradas por cada afiliado en el año calendario anterior.

Para efectos del cálculo del aporte solidario intrageneracional, cada año se dividirá el total del saldo a solidarizar, por la suma de meses cotizados o declarados durante ese año en el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, correspondiente a todos los afiliados con derecho al beneficio. Cada beneficiario recibirá en su cuenta de ahorro personal, en el mes de agosto de cada año, el resultado de dicha división multiplicado por el número de meses en que registre cotizaciones pagadas o declaradas en el año calendario anterior al cálculo.

Para cada afiliado, los meses cotizados o declarados corresponderán al menor valor entre:

- i) La suma de los meses cotizados o declarados en calidad de trabajador dependiente, más el número de meses con pagos provisionales de las cotizaciones como trabajador independiente en caso que no haya cotizado como dependiente en el mismo mes, más la suma de los meses equivalentes cotizados en calidad de trabajador independiente.

La suma de meses equivalentes cotizados como trabajador independiente se calculará como el cociente entre la renta imponible anual por la que el afiliado efectuó cotizaciones, descontada aquella parte por la que se efectuaron pagos provisionales mensuales, y el ingreso promedio de los afiliados al Sistema de Ahorro Previsional Colectivo en el respectivo año calendario.

- ii) El número de cotizaciones por ingresos mínimos mensuales, determinado en función de las remuneraciones imponibles percibidas por el trabajador en calidad de dependiente y la renta imponible anual por la que efectuó cotizaciones en calidad de trabajador independiente.

En cualquier caso, los meses cotizados o declarados para cada afiliado no podrán ser superiores a doce.

Artículo 201.- El Consejo de Ahorro Colectivo calculará el monto del aporte solidario intrageneracional para cada beneficiario y lo transferirá a su cuenta de ahorro personal.

El Servicio de Impuestos Internos deberá informar anualmente al Consejo de Ahorro Colectivo la renta imponible anual que sirvió de base para el cálculo de las cotizaciones de los trabajadores independientes, en los mismos plazos en que se entregue la información a la Tesorería General de la República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 D³⁰. Para los efectos de este inciso, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35³¹ del Código Tributario.

30 Véase, más arriba, nota al artículo 187.

31 Art. 35. Inciso segundo:

El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales.

Párrafo 7°

DE LOS BENEFICIOS CON RECURSOS DE LAS CUENTAS DE AHORRO PERSONAL

Artículo 202.- Los montos acumulados en las cuentas de ahorro personal serán destinados a complementar las pensiones de vejez, vejez anticipada, invalidez y sobrevivencia, establecidas en esta ley.

Una vez que el afiliado o sus beneficiarios se pensionen, el saldo de su cuenta de ahorro personal deberá traspasarse a la Compañía de Seguros o a la Administradora de Fondos de Pensiones que efectuarán el pago de la pensión.

Tratándose de afiliados y beneficiarios que solicitan información al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión que se define en el artículo 61 bis³², dicho sistema deberá entregarles las ofertas de renta vitalicia y los montos de retiro programado calculados considerando la totalidad del saldo destinado a pensión, el que incluirá el saldo de la cuenta de ahorro personal y el saldo de la cuenta de capitalización individual destinado a pensión.

Artículo 203.- Los fondos traspasados desde las cuentas de ahorro personal para el financiamiento de las pensiones de invalidez y sobrevivencia no se considerarán para el cálculo del aporte adicional a que se refiere el artículo 53.

Tampoco podrán ser considerados para el cumplimiento de los requisitos para pensionarse anticipadamente, establecidos en el artículo 68, ni para retirar los excedentes de libre disposición a que se refiere esta ley.

Para efectos del cálculo de la pensión autofinanciada de referencia a que se refiere la letra g) y las pensiones de vejez e invalidez percibidas por el afiliado a que se refiere la letra k), ambas del artículo 2 de la Ley N° 20.255, no se considerará el saldo proveniente de las cuentas de ahorro personal.

Artículo 204.- Al fallecer el afiliado no pensionado el monto acumulado en su cuenta de ahorro personal será destinado a financiar las pensiones de sobrevivencia que correspondan. Para este efecto, dicho monto deberá traspasarse a la Compañía de Seguros o a la Administradora de Fondos de Pensiones que hayan seleccionado los beneficiarios en el sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, a que se refiere el artículo 61 bis, o a la Administradora que corresponda.

Cuando no existan beneficiarios de un afiliado fallecido, los recursos acumulados en su cuenta de ahorro personal incrementarán la masa de bienes del difunto.

32 El artículo 61 bis, por su extensión, se incluye como ANEXO II

Párrafo 8º

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 205.- En el caso que se proponga una modificación de los parámetros del Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda deberán solicitar, previamente, opinión fundada al Consejo Consultivo Previsional a que se refiere la ley N° 20.255³³ y al Consejo de Ahorro Colectivo. Éstos se pronunciarán respecto de la sustentabilidad del Fondo de Ahorro Colectivo y sobre los impactos en el mercado laboral y los incentivos al ahorro producidos por la modificación propuesta.

Los referidos ministros, además, deberán solicitar, previamente, opinión fundada al Banco Central, para que éste se pronuncie sobre los impactos macroeconómicos de corto y largo plazo de la modificación propuesta.

Los organismos requeridos, de conformidad con lo dispuesto en los incisos anteriores, deberán emitir su opinión fundada dentro del plazo de veinte días hábiles contado desde que reciban el requerimiento de los ministros a que se refiere el inciso primero, pudiendo solicitarles, por razones fundadas, un plazo mayor para efectos de emitir su opinión, prórroga que, en todo caso, no será mayor a veinte días hábiles.

Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda deberán enviar una respuesta formal a la opinión emitida por cada uno de los organismos señalados en los incisos primero y segundo.

Asimismo, los referidos ministros deberán encargar la realización de un estudio actuarial que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Ahorro Colectivo con los nuevos parámetros propuestos, para un periodo de cuarenta años.

El resultado del estudio referido en el inciso anterior, así como las opiniones fundadas a que alude el presente artículo y las respectivas respuestas emitidas por los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda deberán formar parte de los antecedentes a que se refiere el artículo 14³⁴ de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

33 Ley 20.255 Artículo 66.- Créase un Consejo Consultivo Previsional cuya función será asesorar a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en las materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias. En el cumplimiento de estas funciones deberá:

- a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario;
- b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones a los reglamentos que se emitan sobre esta materia;
- c) Asesorar acerca de los métodos, criterios y parámetros generales que incidan en el otorgamiento, revisión, suspensión y extinción de los beneficios, contenidos en los reglamentos a que se refiere el literal precedente,
- d) Evacuar un informe anual que será remitido a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y al Congreso Nacional, que contenga su opinión acerca del funcionamiento de la normativa a que se refieren los literales precedentes.

El Consejo será convocado por su Presidente a solicitud de cualquiera de los Ministros indicados en el inciso primero o de dos de sus integrantes. En todo caso, el Consejo podrá acordar la realización de sesiones periódicas y su frecuencia.

Los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda tendrán derecho a ser oídos por el Consejo cada vez que lo estimen conveniente, pudiendo concurrir a sus sesiones.

34 Artículo 14.- Los fundamentos de los proyectos deberán acompañarse en el mismo documento en que se presenten, conjuntamente con los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la estimación de su posible monto.

Artículo 206.- Uno o más reglamentos dictados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos por el Ministro de Hacienda, determinarán los procedimientos que se aplicarán para el cálculo y asignación del aporte solidario intergeneracional y del bono compensatorio para las mujeres; los procedimientos para el cálculo del aporte solidario intrageneracional y la imputación en las cuentas de ahorro personal de dicho beneficio, así como la fecha y forma en que será remitida al Consejo de Ahorro Colectivo la información a que se refiere el artículo 201; los procedimientos que se aplicarán para la transferencia de los saldos de las cuentas de ahorro personal, desde el Consejo de Ahorro Colectivo hacia las entidades señaladas en el inciso segundo del artículo 202, para el acceso a los beneficios a que se refiere el Párrafo 7° del presente Título³⁵. Asimismo, fijarán las demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, incluida su aplicación transitoria.”

ARTÍCULO SEGUNDO.- Apruébase la siguiente ley que regula al Consejo de Ahorro Colectivo:

“TÍTULO I

OBJETO Y FUNCIONES DEL CONSEJO

Artículo 1.- Objeto. El Consejo de Ahorro Colectivo, en adelante “Consejo”, es un organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por la presente ley y la demás normativa que se dicte al efecto.

Corresponderá al Consejo, en el ejercicio de sus potestades, administrar el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo a que se refiere el Título XVIII³⁶ del decreto ley N° 3.500, de 1980, en adelante “Sistema”, velando por el interés de las y los actuales y futuros afiliados del Sistema y la maximización de la rentabilidad neta de largo plazo de los Fondos del Sistema, sujeta a niveles adecuados de riesgo. Para ello observará los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, probidad y transparencia y publicidad.

El Consejo tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y podrá abrir o cerrar oficinas dentro o fuera del territorio nacional.

³⁵ Párrafo 7° De los Beneficios con Recursos de las Cuentas de Ahorro Personal.

³⁶ Véase el artículo primero de este proyecto de ley.

Artículo 2.- Normas aplicables. El Consejo, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, se regirá exclusivamente por las normas de esta ley y no le serán aplicables, para ningún efecto legal, las disposiciones generales o especiales dictadas o que se dicten para la Administración del Estado, excepto aquellas que la ley expresamente disponga.

Artículo 3.- Funciones y atribuciones. Corresponderán al Consejo las siguientes funciones y atribuciones:

1. Recaudar la cotización prevista en el párrafo 2° del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, abonando las cantidades que correspondan a cada uno de los Fondos del Sistema, según determine la ley.
2. Administrar las cuentas de ahorro personal de las y los afiliados a que se refiere el párrafo 3° del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980.
3. Administrar los recursos que componen el o los Fondos de Ahorro Personal a que se refiere el párrafo 3° del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, con el único objeto de maximizar la rentabilidad neta de largo plazo sujeta a niveles adecuados de riesgo, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Título IV de la presente ley. En caso de existir más de un Fondo de Ahorro Personal, éstos podrán considerar diferentes objetivos en términos de rentabilidad y riesgo según la edad de las o los afiliados cuyas cuentas de ahorro personal los integren.
4. Transferir el saldo de las cuentas de ahorro personal a las entidades pagadoras de pensión, con el fin de complementar pensiones de conformidad con el párrafo 7° del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980.
5. Administrar el Fondo de Ahorro Colectivo a que se refiere el párrafo 3° del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, con el fin de financiar, calcular y transferir los beneficios a que se refieren los párrafos 4°³⁷, 5°³⁸ y 6°³⁹ del citado Título, de conformidad con las reglas que en aquellos se establecen.
6. Invertir los recursos de los Fondos del Sistema, de conformidad con lo previsto en el Título IV de la presente ley.
7. Establecer políticas para la planificación, organización, dirección, coordinación y control de su funcionamiento, así como las políticas de administración, adquisición y enajenación de bienes.
8. Dictar las normas necesarias para su funcionamiento interno.
9. Dictar las normas necesarias para el funcionamiento del Sistema. Dicha normativa deberá ser objeto de una consulta pública, para lo cual, antes de su dictación, se dará a conocer en el sitio electrónico del Consejo, disponiéndose los mecanismos para que las y los interesados, incluyendo a las y los afiliados y pensionados, puedan formularle observaciones. Con todo, en caso que la normativa propuesta requiera aplicación inmediata o en el más breve plazo posible, atendida su naturaleza y urgencia, circunstancia que deberá ser justificada y de la cual se dejará constancia, podrá omitirse la consulta pública antes señalada.

Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el Consejo en la forma que para ese efecto establezca mediante su normativa interna de funcionamiento.

El Consejo, en el cumplimiento de la facultad consagrada en este numeral, velará por la coherencia regulatoria con otros órganos, según lo establecido en el párrafo 2° del Título III de la presente ley.

37 De la Solidaridad Intergeneracional

38 Del Bono Compensatorio para las Mujeres

39 De la Solidaridad Intrageneracional

10. Proponer a la Presidenta o Presidente de la República, a través de las o los Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, las modificaciones legales y reglamentarias necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema.

El Consejo, a través de la facultad consagrada en este numeral, promoverá un marco regulatorio que permita la gestión eficiente de los Fondos del Sistema y velará por el adecuado funcionamiento del Sistema en su conjunto. Adicionalmente, velará por la coherencia regulatoria.
11. Ejercer las acciones de cobranza previsional que correspondan, según lo dispuesto en el párrafo 2º⁴⁰ del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, para lo cual deberá integrarse al Sistema Único de Cobranza establecido en el artículo 19⁴¹ de dicho decreto ley.

Para efectos de permitir el funcionamiento del referido sistema, estará facultado para efectuar tratamiento de datos personales de sus afiliadas y afiliados y de las y los empleadores de éstos, en los términos del artículo 4º⁴² de la ley N°19.628. En cualquier caso, el Consejo será responsable por el tratamiento de los datos personales que le proporcionen con este propósito.
12. Adquirir, a cualquier título, bienes raíces o muebles, administrarlos y enajenarlos; realizar todos los actos, contratos, operaciones bancarias y comerciales; y celebrar contratos para la prestación de servicios y contratación de personal, todo lo anterior en cuanto se realice para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
13. Velar por el cuidado de su patrimonio mediante una eficiente e idónea administración de sus recursos y bienes.
14. Entregar información a las y los afiliados del Sistema y resolver consultas de los mismos en la forma que establezca esta ley y las normas dictadas al efecto. Adicionalmente, proporcionará información del Sistema a otros órganos que la requieran en virtud de las competencias legales.
15. Solicitar a los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
16. Suscribir convenios con organismos internacionales o extranjeros, sean éstos públicos o privados. Dichos convenios podrán versar sobre cooperación técnica, capacitación o cualquier otra materia que se estime conveniente para el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus fines.
17. Las demás funciones y atribuciones que le confiera la ley.

40 Véanse los artículos 184 y siguientes contenidos en el artículo primero del proyecto de ley.

41 El artículo 19, por su extensión, se agrega como **ANEXO III**

42 Artículo 4º.- El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito.

La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito.

No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.

Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos.

Artículo 4.- Patrimonio. El patrimonio del Consejo estará formado por:

1. Un aporte de capital inicial, proporcionado por el Fisco.
2. Los recursos que, de conformidad al artículo 5, ingresen por concepto de aportes con cargo al saldo del o los Fondos de Ahorro Personal, para su financiamiento.
3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales que se le transfieran o adquiriera a cualquier título.
4. Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios.
5. Los aportes que reciba a cualquier título por concepto de cooperación internacional.
6. Las donaciones que se le hagan, así como las herencias o legados que acepte. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación.

Artículo 5.- Mecanismo de financiamiento. El Consejo financiará los gastos propios de su funcionamiento, incluyendo una fracción destinada a la reposición del costo de capital, a través de un descuento sobre el saldo del o los Fondos de Ahorro Personal del Sistema, el que se materializará en transferencias mensuales desde éstos a su patrimonio. El descuento a que se refiere este artículo corresponderá al total de los gastos mensuales y se realizará sobre el saldo que exista en el o los Fondos de Ahorro Personal, a prorrata de sus cuotas.

Un reporte detallado de los gastos a que se refiere el inciso anterior se publicará en el sitio electrónico del Consejo.

Artículo 6.- Facultad de contratación de servicios. Los contratos que celebre el Consejo para el suministro de bienes y de los servicios que requiera para el desarrollo de sus funciones deberán regularse por medio de su normativa interna de funcionamiento, la que establecerá, a lo menos, el contenido mínimo de los contratos y los requerimientos de resguardo de la información a que tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato.

Los contratos se celebrarán bajo condiciones competitivas, transparentes, no discriminatorias y verificables de contratación. Con todo, procederá licitación privada o trato directo cuando las condiciones así lo requieran, previa decisión fundada que así lo disponga.

El Consejo siempre será responsable de las funciones que contrate, debiendo ejercer permanente control sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir los mismos estándares de calidad a él exigidos. Para ello, los contratos deberán contener disposiciones por medio de las cuales el contratante declare conocer la normativa que regula el Sistema y al Consejo. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que le permitan contar con toda la información de los contratantes para efectos de sus funciones de información, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 7.- Cuentas bancarias. El Consejo mantendrá cuentas corrientes bancarias destinadas exclusivamente a los recursos de cada uno de los Fondos del Sistema. En dichas cuentas deberán depositarse la totalidad de las cotizaciones

enteradas en el Sistema y el producto de las inversiones de dichos Fondos. Asimismo, mantendrá cuentas corrientes bancarias separadas para su patrimonio.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSEJO

Párrafo 1°

REGLAS GENERALES

Artículo 8.- De la organización. El Consejo contará con un Comité Directivo, una o un Presidente y una o un Vicepresidente.

Asimismo, contará con una o un Contralor Interno y una o un Gerente General del cual dependerán jerárquicamente una o un Gerente de Inversiones, una o un Gerente de Riesgos y una o un Fiscal. Todos ellos tendrán carácter de trabajadoras o trabajadores de exclusiva confianza del Consejo.

Artículo 9.- De la normativa interna de funcionamiento. Una normativa interna de funcionamiento determinará los aspectos básicos de la organización, personal y funcionamiento del Consejo, para el cumplimiento eficaz y eficiente de todas las obligaciones encomendadas por esta u otras leyes. Dicha normativa interna será establecida por el Comité Directivo, quien podrá modificarla cuando lo considere pertinente.

Párrafo 2°

DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO

Artículo 10.- Del Comité Directivo. La dirección superior del Consejo estará a cargo de un Comité Directivo al cual le corresponderá ejercer las atribuciones y funciones a él encomendadas, salvo que alguna sea radicada especialmente en la o el Presidente o Vicepresidente del Comité Directivo, o en cualquiera de las personas a que se refiere el inciso segundo del artículo 8.

El Comité Directivo podrá delegar algunas de sus facultades de administración en su Presidenta o Presidente, en otros consejeras o consejeros, en la o el Gerente General o en cualquiera de las personas a que se refiere el inciso segundo del artículo 8 y demás directivos o trabajadoras o trabajadores del Consejo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Comité Directivo no podrá delegar las funciones y atribuciones dispuestas en los números 7, 8, 9 y 10 del artículo 3.

Artículo 11.- Nombramiento de las o los consejeros. El Comité Directivo estará integrado por siete consejeras o consejeros, quienes serán nombrados por la Presidenta o Presidente de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda y suscrito por la o el Ministro del Trabajo y Previsión Social, previa ratificación del Senado, en sesión especialmente convocada al efecto.

La Presidenta o el Presidente de la República deberá proponer al Senado una terna o una cuaterna de candidatas o candidatos, según corresponda al número de consejeras o consejeros a renovar, antes de dos meses⁴³ de la expiración del plazo de duración de las o los consejeros salientes en el desempeño de sus funciones. El Senado deberá pronunciarse sobre la terna o la cuaterna como una unidad.

En caso que el Senado no se pronuncie sobre la terna o cuaterna antes del vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, las o los consejeros salientes podrán permanecer en el desempeño de sus funciones hasta el nombramiento de sus reemplazantes por un plazo máximo de tres meses adicionales. Vencido este último plazo, y no habiéndose pronunciado el Senado en los términos señalados precedentemente, se nombrará a las o los candidatos propuestos por la Presidenta o Presidente de la República, sin más trámite.

En el nombramiento de las o los consejeros se deberá velar por que la conformación del Comité Directivo equilibre los conocimientos y experiencia necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones y el ejercicio de las atribuciones del Consejo, en áreas tales como administración de cartera de inversiones, gestión de riesgos, regulación, sistema financiero, sistema de pensiones, macroeconomía u otras que se relacionen con aquellas.

Artículo 12.- Requisitos. Las o los consejeros deberán cumplir los siguientes requisitos copulativos:

- a) Contar con un reconocido prestigio profesional o académico en una o más de las siguientes áreas: administración de cartera de inversiones, gestión de riesgos, regulación, sistema financiero, sistema de pensiones, macroeconomía u otras que se relacionen con aquellas.

43 Código Civil, artículo 48:

Art. 48. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la República, de los tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo.

El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses.

El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo de un año de 365 ó 366 días, según los casos.

Si el mes en que ha de principiarse un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminarse el plazo, y si el plazo corre desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades chilenas; salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa.

- b) Estar en posesión de un grado académico o título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una universidad del Estado o reconocida por éste, o un grado académico o título profesional de nivel equivalente otorgado por una universidad extranjera reconocido o validado de acuerdo a la normativa vigente.
- c) Experiencia profesional de, a lo menos, ocho años continuos o discontinuos como director(a), gerente, administrador(a) o alto(a) ejecutivo(a) en empresas públicas o privadas; o como alto(a) directivo(a) público(a) de instituciones públicas o alto(a) directivo(a) de instituciones privadas vinculadas con el objeto del Consejo.

Artículo 13.- Duración. Las o los consejeros durarán seis años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos sólo por un nuevo período consecutivo. Se renovarán por parcialidades cada tres años, según el procedimiento establecido en el artículo 11.

Artículo 14.- Funcionamiento del Comité Directivo. El Comité Directivo deberá sesionar con la asistencia de, a lo menos, cuatro de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de las y los consejeros presentes, salvo que la ley exija un quórum diferente. La o el Presidente del Comité Directivo, o quien lo subrogue, tendrá voto dirimente en caso de empate.

El Comité Directivo deberá celebrar sesiones ordinarias, a lo menos, dos veces por mes, y sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente la o el Presidente por sí o a requerimiento escrito de tres consejeras o consejeros, en la forma y condiciones que determine su normativa interna de funcionamiento. La o el Presidente no podrá negarse a realizar la citación indicada, debiendo la respectiva sesión tener lugar dentro de los dos días hábiles siguientes al requerimiento señalado.

Las y los consejeros podrán participar de las sesiones del Comité Directivo a través de cualquier medio tecnológico que así lo permita cuando, por causa justificada, se encontraren imposibilitados de asistir presencialmente. La normativa interna de funcionamiento establecerá la modalidad y condiciones en que se ejercerá la participación no presencial regulada en este inciso. En cualquier caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad de la o del Vicepresidente, o de quien lo subrogue, haciéndose constar este hecho en el acta correspondiente.

La o el Gerente General podrá asistir a las sesiones del Comité Directivo con derecho a voz, salvo que éste acuerde no convocarlo.

De los acuerdos que adopte el Comité Directivo deberá dejarse constancia en el acta de la sesión respectiva.

Artículo 15.- De los Subcomités. El Comité Directivo podrá crear subcomités para el tratamiento de asuntos específicos. Éstos deberán estar constituidos por, al menos, tres consejeras o consejeros y ejercerán las funciones y atribuciones que se establezcan en la normativa interna de funcionamiento.

En cualquier caso, dicha normativa deberá contemplar un Subcomité de Inversiones y Solución de Conflictos de Intereses y un Subcomité de Auditoría y Riesgos.

Párrafo 3°

ESTATUTO DE LAS O LOS CONSEJEROS

Artículo 16.- Inhabilidades de las o los consejeros. No podrá ser designado consejera o consejero:

1. La persona que hubiere sido condenada por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, por delitos de prevaricación, cohecho y, en general, aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, delitos tributarios, delitos contemplados en la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, o delitos contra la fe pública, o por violencia intrafamiliar constitutiva de delito conforme a la ley N° 20.066.
 2. La persona que tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación personalmente o como administrador o representante legal, o que haya sido condenada por sentencia ejecutoriada por delitos concursales establecidos en el Código Penal⁴⁴.
 3. La persona que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas cuya venta no se encuentre autorizada por la ley, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.
 4. La persona que esté siendo objeto de un procedimiento sancionatorio o que haya sido sancionada dentro de los últimos cinco años por infracciones a las normas cuya fiscalización compete a la Superintendencia de Pensiones, a la Comisión para el Mercado Financiero, a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, siempre que, a su vez, dichas infracciones se encuentren tipificadas como delitos.
 5. La persona que tenga vigente o suscriba, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el Consejo. Tampoco podrá ser designada quien tenga litigios pendientes con éste, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
- Igual prohibición regirá respecto del director(a), administrador(a), representante y socio(a) titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el Consejo.
6. La persona que tenga participación en la propiedad de una administradora de fondos de pensiones o una participación relevante en aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de éstas, en los términos del artículo 96⁴⁵ de la ley N°18.045, de Mercado de Valores. Para estos efectos, se entenderá como participación relevante en

44 Véase el artículo 345 de la ley 20.720.

45 Artículo 96.- Grupo empresarial es el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.

Forman parte de un mismo grupo empresarial:

- a) Una sociedad y su controlador;
- b) Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último, y
- c) Toda entidad que determine la Superintendencia considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:
 1. Que un porcentaje significativo del activo de la sociedad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en sociedades, acreencias o garantías;
 2. Que la sociedad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda;
 3. Que la sociedad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial, y
 4. Que la sociedad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial.

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de la administradora de fondos de pensiones, cuando la persona sea director (a) o dueño (a), directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

Esta prohibición se extenderá a las o los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el primer grado de consanguinidad y hasta el primer grado de afinidad de las personas señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 17.- Incompatibilidades de las o los consejeros. El cargo de consejera o consejero será incompatible con:

1. El cargo de diputado, senador, ministro del Tribunal Constitucional, ministro de la Corte Suprema, consejero del Banco Central, Fiscal Nacional del Ministerio Público, Contralor General de la República y cargos del alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
2. El cargo de ministro de Estado, subsecretario, intendente y gobernador; alcalde y concejal; consejero regional; miembro del escalafón primario del Poder Judicial; secretario y relator del Tribunal Constitucional; fiscal del Ministerio Público; miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario-relator; miembro de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios-relatores; miembro de los demás tribunales creados por ley; funcionario de la Administración del Estado; ejecutivo de empresas estatales o en las que el Estado tenga participación mayoritaria por aporte de capital; miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular, y dirigentes de asociaciones gremiales o sindicales.

Lo establecido en este numeral no resultará aplicable a los cargos de rector, vicerrector, decano, director y académico de las universidades del Estado y de los centros de formación técnica estatales.

La incompatibilidad de los candidatos a cargos de elección popular regirá desde la inscripción de las candidaturas y hasta cumplidos seis meses desde la fecha de la respectiva elección. En el caso de los dirigentes gremiales y sindicales, la incompatibilidad regirá, asimismo, hasta cumplidos seis meses desde la fecha de cesación en el cargo de dirigente gremial o sindical, según correspondiere.

3. El cargo de director, administrador, gerente, subgerente, trabajador dependiente, consejero o mandatario, ejecutivo principal de alguna administradora de fondo de pensiones, compañía de seguros, banco, institución financiera, bolsa de valores, intermediadores de valores, administradoras generales de fondos, entidades de asesoría previsional o asesores previsionales.

Si una vez designado en el cargo sobreviniere a una o un consejero alguna de las inhabilidades o incompatibilidades señaladas en el artículo anterior o en el inciso precedente, deberá informarlo inmediatamente al Comité Directivo, cesando automáticamente en el cargo de consejera o consejero.

Se considerará incumplimiento grave el hecho de no cumplir con lo señalado en el inciso anterior.

Artículo 18.- Declaración jurada. Aquellas personas que hubieren sido designadas consejeras o consejeros deberán presentar una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 y la circunstancia de no encontrarse afectas a las inhabilidades e incompatibilidades a que se refieren los artículos 16 y 17, respectivamente.

Artículo 19.- Declaración de patrimonio e intereses. Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de la obligación de presentar las declaraciones de patrimonio e intereses a que se refiere la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

En caso que las o los consejeros incluyan datos inexactos u omitan inexcusablemente información relevante en las declaraciones a que se refiere el artículo 18 y el inciso anterior, se configurará la causal prevista en literal e) del artículo 21, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otras leyes.

Artículo 20.- Deber de abstención. Las o los consejeros deberán abstenerse de participar y votar cuando se traten materias o se resuelvan asuntos en que puedan tener interés, debiendo además informar al Comité Directivo el conflicto de intereses que les afecta, lo que deberá consignarse en el acta respectiva.

Se entenderá que las y los consejeros tienen interés, entre otras circunstancias, cuando:

- a) Las decisiones o asuntos se refieran a los casos contenidos en el inciso tercero del artículo 44⁴⁶ de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

46 Artículo 44. Una sociedad anónima cerrada sólo podrá celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas previamente por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, salvo que los estatutos autoricen la realización de tales operaciones sin sujeción a las mencionadas condiciones.

El directorio deberá pronunciarse con la abstención del director con interés. En el acta de la sesión de directorio correspondiente, deberá dejarse constancia de las deliberaciones para aprobar los términos y condiciones de los respectivos actos o contratos, y tales acuerdos serán informados en la próxima junta de accionistas por el que la presida, debiendo hacerse mención de esta materia en su citación.

Se entiende que existe interés de un director en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir en cualquiera de las siguientes situaciones: (i) él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; (ii) las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital; (iii) las sociedades o empresas en las cuales alguna de las personas antes mencionadas sea director o dueño, directo o indirecto, del 10% o más de su capital, y (iv) el controlador de la sociedad o sus personas relacionadas, si el director no hubiera resultado electo sin los votos de aquél o aquéllos.

Para los efectos de este artículo, se entiende que es de monto relevante todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 unidades de fomento y, en todo caso, cuando sea superior a 20.000 unidades de fomento. Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un período de 12 meses consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, incluidas las personas relacionadas, u objeto.

La infracción a este artículo no afectará la validez de la operación y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, otorgará a la sociedad, a los accionistas y a los terceros interesados, el derecho de exigir indemnización por los perjuicios ocasionados. En caso de demandarse los perjuicios ocasionados por la infracción de este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que las condiciones de negociación reportaron beneficios a la sociedad que justifican su realización.

Con todo, no será aplicable lo establecido en el inciso primero si la operación ha sido aprobada o ratificada por la junta extraordinaria de accionistas con el quórum de 2/3 de los accionistas con derecho a voto.

En el caso de las sociedades anónimas abiertas, se aplicará lo dispuesto en el Título XVI.

- b) La decisión que adopte tenga relación directa con los bienes y actividades señalados en el artículo 7⁴⁷ de la ley N°20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y el artículo 12⁴⁸ de la ley

47 Artículo 7°.- La declaración de intereses y patrimonio deberá contener la fecha y lugar en que se presenta y la singularización de todas las actividades y bienes del declarante que se señalan a continuación:

- a) Actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe el declarante, incluidas las realizadas en los doce meses anteriores a la fecha de asunción del cargo.
- b) Bienes inmuebles situados en el país o en el extranjero. Respecto de los ubicados en Chile, deberá indicarse su avalúo fiscal y fecha de adquisición, las prohibiciones, hipotecas, embargos, litigios, usufructos, fideicomisos y demás gravámenes que les afecten, con mención de las respectivas inscripciones, sea que tengan estos bienes en propiedad, copropiedad, comunidad, propiedad fiduciaria o cualquier otra forma de propiedad. Respecto de los inmuebles ubicados en el extranjero, deberá indicarse el valor corriente en plaza de los mismos, en los términos del artículo 46 bis de la ley N°16.271. Asimismo, se deberá incluir aquellos inmuebles sobre los cuales ejerza otros derechos reales distintos de la propiedad.
- c) Derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones de que sea titular el declarante.
- d) Bienes muebles registrables, tales como vehículos motorizados, indicando su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y su avalúo fiscal, y las naves y aeronaves señalando su tasación, matrícula y los datos para su debida singularización.
- e) Toda clase de derechos o acciones, de cualquier naturaleza, que tenga el declarante en comunidades, sociedades o empresas constituidas en Chile, con indicación del nombre o razón social, giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos, porcentaje que corresponde al declarante en dichas entidades, la cantidad de acciones, fecha de adquisición de las acciones o derechos y el valor corriente en plaza o, a falta de éste, el valor de libros de la participación que le corresponde. También deberá incluirse los derechos o acciones que la autoridad o funcionario declarante tenga en sociedades u otras entidades constituidas en el extranjero, indicando los datos que permitan su adecuada singularización y valorización.
Cuando los derechos o acciones de que sea titular el declarante le permitan ser controlador de una sociedad, en los términos del artículo 97 de la ley N°18.045, o influir decisivamente en la administración o en la gestión de ella en los términos del artículo 99 de la misma ley, también deberán incluirse los bienes inmuebles, derechos, concesiones y valores a que se refieren las letras b), c) y f) de este artículo, y los derechos y acciones de que trata esta letra que pertenezcan a dichas comunidades, sociedades o empresas, en los términos referidos precedentemente.
- f) Valores, distintos de aquellos señalados en la letra anterior, a que se refiere el inciso primero del artículo 3° de la ley N°18.045, que tenga la autoridad o el funcionario declarante, sea que se transen o no en bolsa, tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo aquellos emitidos o garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por el Banco Central de Chile, con indicación de su fecha de adquisición y de su valor corriente en plaza.
- g) Contratos de mandato especial de administración de cartera de valores con indicación de los siguientes antecedentes: individualización de la persona jurídica mandataria; fecha de celebración de el o los contratos; notaría pública o consulado de Chile donde fueron otorgados, según corresponda, indicando el valor comercial global de la cartera de activos entregada en administración a la fecha de la declaración, conforme a lo informado por el mandatario en la última memoria anual presentada.
- h) La enunciación del pasivo, siempre que en su conjunto ascienda a un monto superior a cien unidades tributarias mensuales.

La declaración deberá incluir asimismo el nombre completo del declarante y de su cónyuge o conviviente civil.

Tratándose de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4°, y de los sujetos a que se refiere el Capítulo 3° de este Título, además deberá incluirse el nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el sitio electrónico de la institución respectiva sólo podrá publicarse el nombre de los parientes por consanguinidad en primer grado en la línea recta del declarante. En el caso de los fiscales y de los jueces con competencia en lo penal, los datos respecto de todos los parientes indicados en el inciso precedente no serán publicados, debiendo registrarse esa información en el carácter de secreta.

Adicionalmente, los sujetos obligados a efectuar declaración de intereses y patrimonio podrán declarar voluntariamente toda otra posible fuente de conflicto de intereses, distinta a la que se detalla en este artículo.

Un reglamento expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia contendrá las demás normas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de este Título y regulará la forma en que la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia dispondrán de las declaraciones de patrimonio e intereses de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4°, y de los sujetos a que se refiere el Capítulo 3° de este Título, en portales accesibles a toda la ciudadanía, en formato de datos abiertos y reutilizables. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las declaraciones de los demás sujetos contemplados en el mencionado artículo 4° serán plenamente aplicables las disposiciones contenidas en la ley N°20.285.

48 Artículo 12. Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes:

1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente.
4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

La actuación de autoridades y los funcionarios de la Administración en los que concurren motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.

En los casos previstos en los incisos precedentes podrá promoverse inhabilitación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

La inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario afectado, por escrito, en el que se expresará la causa o causas en que se funda.

N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado.

- c) Las decisiones o asuntos a tratar recaigan sobre sociedades o entidades en las que se hubiere desempeñado en los últimos doce meses anteriores a su designación, como director(a), administrador(a), gerente, trabajador(a) dependiente, consejero(a) o mandatario(a), alto(a) ejecutivo(a) o miembro de algún comité, como también de sus matrices, filiales o coligadas.

El deber de abstención no impedirá que la o el consejero afectado por alguna de las circunstancias anteriores pueda participar de las decisiones que tengan un alcance general.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, la o el consejero afectado por una causal de abstención podrá asistir a aquella parte de la sesión en que se traten materias adicionales y distintas a aquélla que lo implica, pudiendo participar en el tratamiento y decisión de éstas. Con todo, su asistencia no será considerada para los efectos de determinar el quórum en la decisión de la materia o asunto en la que pudiera tener interés o estar involucrado.

La ausencia de la o el consejero que se haya abstenido de participar de una determinada sesión en virtud de alguna de las causales referidas en el presente artículo se entenderá, para todos los efectos de esta ley, como justificada.

Artículo 21.- Causales de cesación. Serán causales de cesación de las o los consejeros en sus cargos, las siguientes:

- a) Expiración del plazo por el cual fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante por el plazo señalado en el inciso tercero del artículo 11.
- b) Renuncia aceptada por la Presidenta o el Presidente de la República.
- c) Incapacidad física o síquica para el desempeño del cargo.
- d) Sobreveniencia de alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las contempladas en los artículos 16 y 17.

Si alguno de las o los consejeros hubiere sido acusado de alguno de los delitos señalados en el número 1 del artículo 16, quedará suspendido de su cargo hasta que concluya el proceso por sentencia firme. En este caso, así como en el previsto en el inciso sexto del presente artículo se entenderá también suspendido el derecho a la totalidad de la dieta que corresponda en razón de su cargo a la o el consejero acusado.

- e) Incumplimiento grave de sus funciones y deberes.

Se considerarán incumplimientos graves, entre otros, los siguientes:

- 1.- No justificar la inasistencia a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Comité Directivo, ordinarias o extraordinarias, durante un mismo año calendario.
- 2.- Infringir los deberes de abstención o de reserva consagrados en los artículos 20 y 59, respectivamente.
- 3.- Actuar negligentemente en el ejercicio de sus funciones, entorpeciendo el adecuado cumplimiento de los objetivos del Consejo.

La o el consejero respecto del cual se verifique alguna de las causales contenidas en las letras a), b) y d) del inciso primero, cesará automáticamente en su cargo.

La concurrencia de las causales contempladas en las letras c) y e) deberá ser declarada por la Corte Suprema, la cual conocerá en pleno y única instancia, a requerimiento de la Presidenta o Presidente de la República, o de la mayoría simple del Comité Directivo o de cuatro séptimos de las o los Senadores en ejercicio.

La Corte Suprema dará traslado por seis días hábiles a la o el acusado para que conteste la acusación, pudiendo dictar, igualmente, medidas para mejor resolver. La Corte Suprema podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días.

La acusación será fundada y tendrá preferencia para su vista y fallo. La sentencia se dictará en un plazo máximo de treinta días contado desde la vista de la causa.

La Corte Suprema, mientras se encuentre pendiente su resolución, podrá disponer la suspensión temporal de la o el consejero acusado. Ejecutoriada la sentencia que declare la configuración de la causal de cesación, la o el consejero afectado cesará de inmediato en su cargo, sin que pueda ser designado nuevamente.

Si quedare vacante el cargo de consejera o consejero, deberá procederse a un nombramiento en la forma indicada en el artículo 11. La o el consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el período del que hubiere cesado en el cargo. La o el consejero podrá ser renovado en sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 22.- Dietas. Las o los consejeros tendrán derecho a una dieta, la que será establecida y revisada por la o el Ministro de Hacienda, con una periodicidad no superior a dos años. En la determinación de las dietas y sus revisiones, la o el Ministro de Hacienda considerará la propuesta de una comisión especial ad honorem que designe al efecto, la que deberá estar integrada por tres personas que hayan desempeñado el cargo de Ministro (a) de Hacienda, Director (a) o Subdirector (a) de la Dirección de Presupuestos, consejero (a) o gerente general del Banco Central, o directores (as) de empresas públicas. Dicha comisión deberá formular propuestas de determinación o revisión de dietas, según corresponda, considerando las existentes que para cargos similares se encuentren vigentes en los sectores público y privado. Asimismo, en las dietas que propongan podrán incluir componentes asociados a la asistencia a sesiones, a la participación en subcomités, y al cumplimiento de metas anuales de gestión. Las y los consejeros no podrán recibir dietas, remuneraciones ni honorarios del Consejo por servicios profesionales distintos de los contemplados en la propuesta de la comisión antes señalada.

Párrafo 4°

DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO

Artículo 23.- De la Presidenta o Presidente del Comité Directivo. La Presidenta o Presidente de la República designará, entre las o los consejeros en ejercicio, a quien ejercerá el cargo de Presidenta o Presidente del Comité Directivo, por un periodo de tres años, pudiendo renovársele por una sola vez.

A la Presidenta o Presidente del Comité Directivo le corresponderán las siguientes funciones:

- a) Conducir las relaciones del Consejo con otros organismos públicos y privados.
- b) Ejecutar y dar cumplimiento a las normas y acuerdos adoptados por el Comité Directivo. Además, deberá enviar, trimestralmente, una relación de los acuerdos cumplidos o por cumplir.
- c) Citar y presidir las sesiones del Comité Directivo, establecer la tabla de materias a ser tratadas en cada sesión y convocar a sesión extraordinaria, cuando ello sea procedente.
- d) Representar extrajudicialmente al Consejo.
- e) Todas las demás funciones establecidas en esta u otras leyes.

Artículo 24.- De la Vicepresidenta o Vicepresidente del Comité Directivo. El Comité Directivo elegirá, de entre sus miembros, a una Vicepresidenta o Vicepresidente, quien permanecerá en este cargo por el tiempo que señale el Comité Directivo, pudiendo ser reelegido o removido por dicho órgano. Corresponderán a la Vicepresidenta o Vicepresidente las siguientes funciones:

- a) Subrogar a la Presidenta o Presidente en caso de ausencia, vacancia o cualquiera otra causa que impida a ésta o éste desempeñar el cargo, sin que sea necesario acreditarlo ante terceros. La subrogación comprenderá todas las funciones y facultades de la Presidenta o Presidente, inclusive las que le pertenezcan por delegación.
- b) Servir de ministro de fe y depositario de las declaraciones a las que se refieren los artículos 18 y 19.
- c) Cumplir con toda otra función que le encomiende la Presidenta o Presidente y el Comité Directivo.

En caso de vacancia, ausencia o imposibilidad para ejercer sus funciones, éstas serán ejercidas por la o el consejero que corresponda según lo señalado por la normativa interna de funcionamiento.

Párrafo 5°

DE LA O EL GERENTE GENERAL, DE LA O EL CONTRALOR INTERNO, DE LA O EL GERENTE DE INVERSIONES, DE LA O EL GERENTE DE RIESGOS Y DE LA O EL FISCAL

Artículo 25.- De la o el Gerente General. La o el Gerente General del Consejo será designado por el Comité Directivo.

La o el Gerente General tendrá a su cargo la administración del Consejo, de acuerdo con las facultades conferidas e instrucciones impartidas por el Comité Directivo. Le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

- a) Ejecutar los actos de administración del Consejo y aquéllos que le encomiende el Comité Directivo.
- b) Impartir al personal a su cargo, las instrucciones, observaciones y recomendaciones necesarias para una eficiente administración y gestión.
- c) Informar al Comité Directivo, a lo menos mensualmente, sobre la ejecución de las instrucciones a él impartidas por dicho órgano.
- d) Resguardar los bienes del Consejo.
- e) Asistir a las sesiones del Comité Directivo con derecho a voz.
- f) Suscribir todos los documentos públicos y privados que debe otorgar el Consejo, cuando expresamente no se hubiere designado a otra persona para hacerlo.
- g) Nombrar y remover al personal del Consejo, con entera independencia de toda otra autoridad, salvo las excepciones contenidas expresamente en la ley.
- h) Proponer al Comité Directivo el nombramiento y la remoción de la o el Gerente de Inversiones, de la o el Gerente de Riesgos y de la o el Fiscal.
- i) Representar judicialmente al Consejo, para lo cual tendrá las facultades señaladas en el inciso primero del artículo 7⁴⁹ del Código de Procedimiento Civil, debiendo notificarse a ella o él las demandas que se entablen contra el Consejo, para emplazarlo válidamente. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la o el Gerente General podrá otorgar poderes judiciales, con las facultades del inciso primero del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, a otras trabajadoras o trabajadores del Consejo o a terceros, acordando las remuneraciones de estos últimos. La o el Gerente General requerirá el acuerdo del Comité Directivo para desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.

49 Art. 7° (8°). El poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, autorizará al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría hacerlo el poderdante, en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvencción se promuevan, hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto en el artículo 4° o salvo que la ley exija intervención personal de la parte misma. Las cláusulas en que se nieguen o en que se limiten las facultades expresadas, son nulas. Podrá, asimismo, el procurador delegar el poder obligando al mandante, a menos que se le haya negado esta facultad.

Sin embargo, no se entenderán concedidas al procurador, sin expresa mención, las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que el artículo 2⁵⁰ de la ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, entrega a las o los Gerentes Generales de las instituciones de seguridad social y de lo dispuesto en el artículo 19⁵¹ del decreto ley N° 3.500, de 1980.

- j) Someter a aprobación del Comité Directivo los estados financieros auditados a que se refiere el artículo 48, antes del mes de marzo de cada año.
- k) Todas las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley, el Comité Directivo o la normativa interna de funcionamiento.

El Comité Directivo, por acuerdo de los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, podrá poner término a los servicios de la o el Gerente General, de conformidad con las causales de cesación establecidas en el Código del Trabajo.

Artículo 26.- De la o el Contralor Interno. La o el Contralor Interno será designado por el Comité Directivo y permanecerá en su cargo por tres años, pudiendo ser renovado por hasta dos periodos consecutivos.

La o el Contralor Interno será responsable de ejercer el control de legalidad de los actos del Consejo y la inspección y fiscalización de sus cuentas. Para el cumplimiento de sus funciones, le corresponderá especialmente:

- a) Velar por que los acuerdos y decisiones del Comité Directivo, así como los contratos que celebre el Consejo, se ajusten a la normativa vigente. Para este efecto, tomará conocimiento de todos ellos y representará sus observaciones al Comité Directivo, debiendo asistir a las sesiones de éste, con derecho a voz.
- b) Examinar y juzgar las cuentas, ingresos y gastos tanto del Consejo como las relativas a los Fondos del Sistema. Para estos efectos, deberá comunicar por escrito al Comité Directivo las observaciones que estime conveniente al respecto.
- c) Ejercer la auditoría interna del Consejo.

50 ARTICULO 2° El Jefe de Servicio, el Director Nacional o Gerente General de la respectiva institución de seguridad social, mediante resolución fundada y según corresponda, deberá:

- 1° Determinar el monto de las cotizaciones adeudadas por los empleadores y que no hubieren sido enteradas oportunamente, incluyendo las que descontaron o debieron descontar de las remuneraciones de los trabajadores;
- 2° Determinar el monto de los aportes legales que esas personas o cualquiera otra deban efectuar, y que hayan de descontarse de las remuneraciones de sus trabajadores, y
- 3° Aplicar las multas en que incurran esos empleadores por infracciones de las leyes sobre previsión social.

El Jefe de Servicio, el Director Nacional o Gerente General en su caso, podrán delegar estas atribuciones en funcionarios de la Institución de la respectiva región o provincia. Mediando tal delegación, podrá ejercer también dichas facultades, sin necesidad de nuevo mandato, el funcionario que subrogue o reemplace al delegatario por impedimento, ausencia u otra causa.

Las resoluciones a que se refiere este artículo, tendrán mérito ejecutivo.

Los juicios a que ellas den origen se sustanciarán de acuerdo al procedimiento fijado en las normas especiales de esta ley, y en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, en cuanto fueren compatibles con ellas.

Las referidas resoluciones de cobranzas de deudas previsionales podrán ser firmadas en forma mecanizada o electrónica avanzada, por los procedimientos que se autoricen en el reglamento que se dictará al efecto, en los casos y con las formalidades que en él se establezcan. Para todos los efectos legales, la firma estampada mecánicamente se entenderá suscrita por la persona cuya rúbrica haya sido reproducida. En el caso de la firma electrónica se estará a lo dispuesto en los artículos 3°, 4° y 5° de la ley N° 19.799.

51 El artículo 19, por su extensión, se incluye como **ANEXO III**

- d) Informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre cualquier operación sospechosa de que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones, en los términos del inciso sexto⁵² del artículo 3 de la ley N° 19.913.
- e) Todas las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley, el Comité Directivo o la normativa interna de funcionamiento.

El Comité Directivo, por acuerdo de los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, podrá poner término a los servicios de la o el Contralor Interno, de conformidad con las causales de cesación establecidas en el Código del Trabajo.

Artículo 27.- De la o el Gerente de Inversiones. El Comité Directivo designará a una o un Gerente de Inversiones, que tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Ejecutar los actos relativos a las inversiones de los Fondos del Sistema y aquéllos que le encomiende el Comité Directivo, ciñéndose estrictamente a lo establecido en la política de inversiones y de conformidad con lo dispuesto en el Título IV de la presente ley.
- b) Impartir al personal a su cargo las instrucciones, observaciones y recomendaciones necesarias para una eficiente administración y gestión.
- c) Asistir a las sesiones del Comité Directivo, cuando así lo solicite éste, con derecho a voz.
- d) Asistir al Subcomité de Inversiones y Solución de Conflictos de Intereses y al Subcomité de Auditoría y Riesgos.
- e) Reportar mensualmente al Comité Directivo sobre el estado de las inversiones efectuadas.
- f) Todas las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley, el Comité Directivo, la o el Gerente General o la normativa interna de funcionamiento.

El Comité Directivo, por acuerdo de los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, podrá poner término a los servicios de la o el Gerente de Inversiones, de conformidad con las causales de cesación establecidas en el Código del Trabajo.

Artículo 28.- De la o el Gerente de Riesgos. El Comité Directivo designará a una o un Gerente de Riesgos, que tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de la Gerencia de Riesgos.
- b) Participar en la elaboración y la ejecución de un plan estratégico y elaborar y ejecutar un plan operativo anual de la gerencia de riesgos.

52 Artículo 3°.-
[...]

Las superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, estas entidades no estarán sujetas a las obligaciones contenidas en el inciso cuarto de este artículo y a lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley, así como tampoco a las sanciones y al procedimiento establecido en el Título II de la presente ley.

La información proporcionada de buena fe en conformidad a esta ley, eximirá de toda responsabilidad legal a quienes la entreguen.

- c) Definir, promover e implementar las políticas y estrategias para la medición, control y gestión de riesgos operacionales, de mercado de crédito y liquidez, entre otros, a los que esté expuesto el funcionamiento del Sistema.
- d) Asistir a las sesiones del Comité Directivo, cuando éste lo solicite, con derecho a voz.
- e) Asistir al Subcomité de Inversiones y Solución de Conflictos de Intereses y al Subcomité de Auditoría y Riesgos.
- f) Todas las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley, el Comité Directivo, la o el Gerente General o la normativa interna de funcionamiento.

El Comité Directivo, por acuerdo de los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, podrá poner término a los servicios de la o el Gerente de Riesgos, de conformidad con las causales de cesación establecidas en el Código del Trabajo.

Artículo 29.- De la o el Fiscal. El Comité Directivo designará a una o un Fiscal, que tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Informar sobre los asuntos de orden legal que se sometan a su consideración y, en general, asesorar al Comité Directivo y, a través de la Fiscalía, a las unidades de la institución, en las materias que requieran una apreciación de carácter jurídico.
- b) Colaborar con el Comité Directivo en la dictación de la normativa interna de funcionamiento y las demás normas que dicte de conformidad a lo establecido en los numerales 8) y 9) del artículo 3.
- c) Supervisar el curso de los juicios en que el Consejo sea parte.
- d) Todas las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley, el Comité Directivo, la o el Gerente General o la normativa interna de funcionamiento.

El Comité Directivo, por acuerdo de los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, podrá poner término a los servicios de la o el Fiscal, de conformidad con las causales de cesación establecidas en el Código del Trabajo.

Artículo 30.- Régimen de postempleo. Las y los directivos a que se refiere el inciso segundo del artículo 8 no podrán, una vez cesados en el cargo y por un plazo de tres meses contado desde que la cesación se ha hecho efectiva, prestar ningún tipo de servicio, sea o no remunerado, ni adquirir participación en la propiedad, respecto de las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguros, las administradoras generales de fondos, los bancos e instituciones financieras, las bolsas de valores o las entidades de asesoría previsional, ni de aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de éstas cuando la participación sea relevante, en los términos del artículo 96⁵³ de la ley N° 18.045, de

53 Artículo 96.- Grupo empresarial es el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.

Forman parte de un mismo grupo empresarial:

- a) Una sociedad y su controlador;
- b) Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último, y
- c) Toda entidad que determine la Superintendencia considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:
 1. Que un porcentaje significativo del activo de la sociedad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en sociedades, acreencias o garantías;
 2. Que la sociedad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda.

Mercado de Valores. Para estos efectos, se entenderá como participación relevante en empresas que formen parte del grupo empresarial de las empresas antes señaladas, que la persona sea director o dueño, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital. Asimismo, no podrán desempeñarse como intermediarios de valores o asesores previsionales.

Durante los tres meses que dure la prohibición a que se refiere el inciso precedente, dichas personas tendrán derecho a percibir mensualmente de parte del Consejo una compensación económica equivalente al 75% de la remuneración que les correspondía percibir por el ejercicio de sus funciones. La remuneración que servirá de base para el cálculo de esta compensación será el promedio de la remuneración bruta mensual de los últimos doce meses anteriores al cese de funciones, actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya. Esta compensación se considerará remuneración para todos los efectos legales y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

De la compensación a que se refiere el inciso anterior se deducirán los montos que correspondan a los ingresos que mensualmente perciban dichas personas por la prestación de servicios que se encuentren habilitados a realizar, en cuanto excedan el 25% del precitado promedio de la remuneración bruta mensual. La Tesorería General de la República estará autorizada para retener los montos que por este concepto corresponda de la devolución anual de impuestos a la renta respectiva, imputar dichos montos a la deducción mencionada y enterarlos en el Consejo.

No procederá la compensación a que se refiere el inciso segundo en los casos en que las personas afectas por la prohibición de que trata el inciso primero cesen en sus cargos por cualquiera de las causales previstas en el artículo 160⁵⁴ del Código del Trabajo.

Artículo 31.- Obligación de informar y registro público. Las personas afectas a la prohibición establecida en el artículo precedente deberán informar al Consejo, durante el período que dure dicha prohibición, sus participaciones societarias y todas las actividades laborales y de prestación de servicios que realicen en el sector privado, sean

3. Que la sociedad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial, y
4. Que la sociedad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial.

54 Art. 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

- 1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:
 - a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
 - b) Conductas de acoso sexual;
 - c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;
 - d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador;
 - e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y
 - f) Conductas de acoso laboral.
- 2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.
- 3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.
- 4.- Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
 - a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y
 - b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.
- 5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.
- 6.- El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.
- 7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

o no remuneradas. Esta obligación se extenderá hasta los seis meses posteriores al término de la prohibición a que se refiere el artículo anterior y se materializará en la forma que indicará la normativa dictada para ese efecto por el Comité Directivo.

El Consejo deberá mantener un registro público disponible en su sitio electrónico donde conste la información entregada de conformidad al inciso anterior, durante todo el tiempo que dure dicha obligación y hasta que hubiere expirado el plazo a que se refiere el inciso final de este artículo. En dicho registro, además, constarán las sanciones que se hubiesen impuesto en virtud de los incisos siguientes.

La infracción cometida por las personas señaladas en el inciso primero al deber de información a que se refiere dicho inciso será sancionada con multa a beneficio fiscal de hasta 100 unidades tributarias mensuales. La infracción por el Consejo a lo dispuesto en el inciso anterior constituirá una contravención a las normas de transparencia activa previstas en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Por su parte, la infracción a la prohibición a que se refiere el inciso primero del artículo anterior será sancionada con multa a beneficio fiscal de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales. Adicionalmente, la o el infractor deberá restituir el monto percibido por concepto de compensación económica a que alude el inciso segundo de dicho artículo.

La responsabilidad por infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo y en el artículo anterior, se hará efectiva por la Corte de Apelaciones del domicilio de la o del presunto infractor, a requerimiento del Comité Directivo. La Corte de Apelaciones respectiva dará traslado a la o el inculcado, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo. Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se aplicarán las normas sobre los incidentes en materia civil, con preferencia para su vista y fallo.

Respecto de la resolución que falle este asunto procederá el recurso de apelación ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación respectiva, la que conocerá en la forma prevista en el inciso anterior. La interposición de la apelación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la sentencia recurrida.

Las personas naturales o jurídicas que, en infracción a lo dispuesto en el artículo precedente, establezcan vínculos laborales o de prestación de servicios, sean o no remunerados, con quienes se encuentren afectos a las prohibiciones en él contemplada, serán sancionadas por la Corte de Apelaciones del domicilio de dichas personas con multa a beneficio fiscal de hasta 4.000 unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento a que se refieren los incisos quinto y sexto. La multa que se aplique a las entidades privadas deberá ser proporcional al tamaño de la empresa en los términos de la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las Empresas de Menor Tamaño⁵⁵.

La responsabilidad por las infracciones de que trata este artículo prescribirá una vez transcurridos dos años desde la realización de los hechos que le dieron origen.

55 Véanse los artículos 506 y siguientes del Código del Trabajo, introducidos por la ley 20.416.

Párrafo 6°

DE LOS SUBCOMITÉS

Artículo 32.- Subcomité de Inversiones y Solución de Conflictos de Intereses. Las funciones y atribuciones del Subcomité de Inversiones y Solución de Conflictos de Intereses serán las siguientes:

- a) Supervisar el fiel cumplimiento de las políticas de inversiones y de solución de conflictos de intereses elaboradas y aprobadas por el Comité Directivo, y supervisar el cumplimiento del régimen de inversiones y la adecuada administración de los Fondos del Sistema, de conformidad con lo dispuesto en Título IV de la presente ley.
- b) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos del Sistema.
- c) Examinar los antecedentes relativos a las operaciones de los Fondos del Sistema con instrumentos derivados y activos restringidos a que se refiere la letra b) del inciso primero del artículo 56.
- d) Elevar al Comité Directivo propuestas de cambio a las políticas de inversiones y de solución de conflictos de intereses.
- e) Evacuar un informe anual al Comité Directivo respecto de las materias antes referidas, el cual deberá contener una evaluación sobre la aplicación y cumplimiento de las políticas a que se refiere este artículo. Asimismo, este informe, que será público, deberá incluir los comentarios del Comité Directivo, si los hubiere.
- f) Todas las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley, el Comité Directivo o la normativa interna de funcionamiento.

Las reuniones que sostengan las y los consejeros y altos directivos del Consejo relativas a materias propias de su objeto, con agentes de mercado, ministros de Estado, subsecretarios y quienes ejerzan cargos de elección popular, deberán informarse al Subcomité de Inversiones y de Solución de Conflictos de Intereses, dentro de los cinco días siguientes de ocurridas, de conformidad a las exigencias que establezca la normativa interna de funcionamiento. El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción grave, en los términos señalados en el inciso final del artículo 52.

Artículo 33.- Subcomité de Auditoría y Riesgos. Las funciones y atribuciones del Subcomité de Auditoría y Riesgos serán las siguientes:

- a) Velar por que la o el Contralor Interno cuente con los recursos necesarios para asegurar su independencia.
- b) Supervisar la eficacia de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos.
- c) Preservar la independencia de los auditores externos y velar por que éstos tengan acceso completo y oportuno a los antecedentes que requieran para el debido cumplimiento de su gestión.
- d) Todas las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley, el Comité Directivo o la normativa interna de funcionamiento.

TÍTULO III

OBLIGACIONES DEL CONSEJO

Párrafo 1°

DEBERES DE INFORMACIÓN

Artículo 34.- Información a las y los afiliados. El Consejo deberá proporcionar a las o los afiliados información sobre el saldo de sus cuentas de ahorro personal cada vez que éstos lo soliciten.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Consejo deberá mantener, en su sitio electrónico, a disposición de la o el afiliado, información actualizada de, al menos, los movimientos registrados en su cuenta de ahorro personal, con indicación de su valor en pesos; el monto de los descuentos efectuados de conformidad a lo establecido en el artículo 5 y de las comisiones a que se refieren los incisos sexto⁵⁶ y séptimo⁵⁷ del artículo 45 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pagados con cargo a el o los Fondos de Ahorro Personal en que se encuentren invertidas sus cotizaciones; y la rentabilidad real de las cuotas que tenga en dichos Fondos, así como también los montos transferidos a la entidad pagadora de su pensión en virtud de los beneficios establecidos en los Párrafos 4° y 5° del Título XVIII⁵⁸ del citado decreto ley, según corresponda.

El Comité Directivo mediante la normativa interna de funcionamiento regulará la forma en que se dará cumplimiento a los deberes establecidos en este artículo.

Artículo 35.- Información a la Superintendencia de Pensiones y a la Comisión para el Mercado Financiero. El Consejo tendrá el deber de informar mensualmente a la Superintendencia de Pensiones sobre los cálculos y transferencias de beneficios que realizare en el marco del Sistema y sobre cualquier otro antecedente que

56 Para efectos de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, a que se refieren las letras h) y j) del artículo 45 y títulos representativos de índices de instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que incluyan comisiones en el precio, los Superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros establecerán anualmente, a través de una resolución conjunta, debidamente fundada, y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, a los fondos mutuos, fondos de inversión y otros emisores.

Al efecto, se oír previamente a las Administradoras.

Si las comisiones pagadas son mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras. El procedimiento para determinar las comisiones efectivamente pagadas a los fondos mutuos y de inversión se establecerá en la citada resolución, la que definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.

57 La Superintendencia establecerá anualmente, a través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo 45. Estas comisiones máximas incluirán conceptos tales como: administración, transacción y custodia de los títulos a que se refiere la citada letra j), según determine la Superintendencia por norma de carácter general. Al efecto, se oír previamente a las Administradoras. Si las comisiones pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras. La referida resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.

58 Véase el artículo primero de este proyecto de ley.

la Superintendencia le solicite para efectuar los estudios técnicos necesarios para la evaluación y fortalecimiento del Sistema de Pensiones.

Asimismo, y con la misma periodicidad indicada en el inciso anterior, deberá informar a la Comisión para el Mercado Financiero sobre los cálculos y transferencias a las Compañías de Seguros de los beneficios establecidos en los párrafos 4^o⁵⁹ y 5^o⁶⁰ del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero podrán, en cualquier momento, solicitar antecedentes al Consejo acerca de las materias referidas en los incisos primero y segundo, respectivamente, con el solo fin de recabar información necesaria para el cumplimiento de las funciones de supervigilancia, control y fiscalización respecto de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de las Compañías de Seguros, según corresponda.

Artículo 36.- Información a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo podrá solicitar al Consejo la información sobre incumplimientos previsionales que requiera para el solo ejercicio de las funciones que le entrega la ley.

Artículo 37.- Información al Servicio de Impuestos Internos. A más tardar el último día del mes de febrero de cada año, el Consejo deberá informar al Servicio de Impuestos Internos el monto total de pagos provisionales efectuados de acuerdo al artículo 187⁶¹ del decreto ley N° 3.500, de 1980, por la o el trabajador independiente en el año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y declaradas y no pagadas por las o los empleadores, si dicha trabajadora o trabajador percibe simultáneamente remuneraciones durante ese periodo.

Asimismo, deberá informar el detalle de los saldos insolutos a que se refiere el artículo 92 G⁶² y la demás información necesaria para el cumplimiento del Título IX del citado decreto ley.

Artículo 38.- Información al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión. Al requerir las o los afiliados solicitudes de montos de pensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 bis⁶³ del decreto ley N° 3.500, de 1980, el Consejo deberá transmitir al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión la información

59 Párrafo 4° De la Solidaridad Intergeneracional

60 Párrafo 5° Del Bono Compensatorio para las Mujeres

61 Véase el artículo primero de este proyecto de ley.

62 Véase nota al N°4 letra b) del artículo primero del proyecto de ley.

63 Véase el ANEXO II.

sobre el saldo de sus cuentas de ahorro personal, para efectos de lo previsto en el párrafo 7^o⁶⁴ del Título XVIII del citado decreto ley.

Artículo 39.- Información a las Administradoras de Fondos de Pensiones. En el caso de las y los afiliados que no acceden al sistema a que se refiere el artículo anterior, el Consejo deberá informar a las Administradoras de Fondos de Pensiones el saldo de las cuentas de ahorro personal, para efectos del cálculo del monto de sus pensiones.

Artículo 40.- Base de Datos. El Consejo deberá mantener una Base de Datos del Sistema con los registros necesarios para su operación que incluirá el registro general de información de las y los afiliados, los movimientos de las cuentas de ahorro personal y el archivo de documentos.

El Consejo tendrá la responsabilidad de efectuar el tratamiento de la Base de Datos de las o los afiliados al Sistema sólo para cumplir las funciones definidas en la ley, y de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. El objeto único de la Base de Datos será servir de soporte a las funciones del Consejo y al cumplimiento de los deberes establecidos en este párrafo.

El Comité Directivo establecerá mediante su normativa interna de funcionamiento los mecanismos necesarios para garantizar el control y resguardo de la Base de Datos.

La Superintendencia de Pensiones, las Subsecretarías de Hacienda, de Previsión Social, de Servicios Sociales y de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos, estarán facultadas para solicitarle al Consejo los datos personales contenidos en la Base de Datos a que se refiere el inciso primero y la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones. En tales casos, el tratamiento y uso de los datos personales que efectúen los organismos antes mencionados quedarán dentro del ámbito de control y fiscalización de dichos servicios.

La o el que haga uso de la información incluida en la Base de Datos que mantenga el Consejo para un fin distinto al establecido en esta ley, será sancionado con las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 41.- Mecanismos de traspaso de información. Para el cumplimiento de las obligaciones que establece este párrafo, el Consejo podrá celebrar convenios y establecer otros mecanismos que permitan asegurar la coordinación y el traspaso eficaz, seguro y oportuno de la información requerida a las y los afiliados o a los órganos que corresponda, de conformidad a la ley.

Los organismos públicos receptores de la información a que se refiere el presente párrafo y su personal deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información de que tomen conocimiento y abstenerse de usar dicha información en beneficio

64 De los Beneficios con Recursos de las Cuentas de Ahorro Personal

propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo⁶⁵ del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

Párrafo 2°

DEBERES DE COORDINACIÓN

Artículo 42.- Coordinación con entidades fiscalizadoras. Siempre que el Consejo, en ejercicio de la atribución que le otorga el numeral 9) del artículo 3, deba dictar normas que digan relación con el funcionamiento del Sistema, deberá contar previamente con informes favorables tanto de la Superintendencia de Pensiones como de la Comisión para el Mercado Financiero, quienes tendrán un plazo de hasta treinta días corridos para evacuarlos, contado desde que hubieren recibido la solicitud. De no emitirse en el plazo antes señalado, los informes se entenderán favorables.

El Consejo, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero sostendrán reuniones de coordinación trimestrales, para proponer y evaluar las normas aplicables al Sistema.

Artículo 43.- Coordinación regulatoria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que el Consejo deba adoptar decisiones que tengan efectos directos en los ámbitos de competencia de otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de evitar o precaver conflictos de normas, con el objeto de resguardar la coordinación, cooperación y colaboración entre los órganos involucrados en su dictación.

Los órganos administrativos cuyo informe se solicite deberán evacuarlo dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha en que hubieren recibido el requerimiento a que se refiere el inciso precedente. El requirente valorará el contenido de la opinión del órgano administrativo requerido, expresándolo en la motivación de la decisión de carácter general que dicte. Transcurrido el plazo sin que se hubiere recibido el correspondiente informe, podrá el Consejo proceder en sus actuaciones.

Los informes a que se refiere este artículo no serán vinculantes, salvo norma expresa en contrario.

65 Artículo 125.- La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.

(Inciso segundo) La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos :

- a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;
- b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de este Estatuto;
- c) Condena por crimen o simple delito, y
- d) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.
- e) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.

No regirá lo establecido en el inciso primero en los casos en que la decisión que se pretende adoptar requiera aplicación inmediata o en el más breve plazo posible, atendida su naturaleza y urgencia, circunstancia que deberá ser justificada y de la cual se dejará constancia.

Párrafo 3°

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

Artículo 44.- Principio de transparencia. El Consejo se regirá por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, consagrado en el inciso segundo⁶⁶ del artículo 8 de la Constitución Política de la República y en los artículos 3⁶⁷ y 4⁶⁸ de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

La publicidad y el acceso a la información del Consejo se regirán, en lo que fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II⁶⁹; Título III⁷⁰, a excepción de los artículos 8⁷¹ y 9⁷²; y los artículos 10 al 22 del Título IV⁷³. En todo caso, la prórroga de que trata el inciso segundo⁷⁴ del referido artículo 22, se adoptará mediante acuerdo del Comité Directivo que requerirá del voto favorable de, a lo menos, cuatro consejeras o consejeros. Las referencias que dichas normas hacen a la autoridad, jefatura o jefe superior, se entenderán hechas a la Presidenta o Presidente del Comité Directivo.

66 Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

67 Artículo 3°.- La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.

68 Artículo 4°.- Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública.

El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

69 De la Publicidad de la Información de los Órganos de la Administración del Estado

70 De la Transparencia Activa

71 Artículo 8°.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los organismos de la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior. Esta acción estará sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes.

72 Artículo 9°.- Las reparticiones encargadas del control interno de los órganos u organismos de la Administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo y a la Contraloría General de la República.

73 Los artículos 10 a 22 del Título IV se incluyen en el **ANEXO IV**.

74 Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la calificación, el servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una sola vez, podrá prorrogarla por otros cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que pueda irrogar su terminación.

Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida, o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la presente ley. La Corte, en la misma sentencia que acoja el reclamo, sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones a la Presidenta o Presidente.

El Consejo, mediante acuerdo del Comité Directivo publicado en el sitio electrónico a que se refiere el artículo siguiente, establecerá las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.

Artículo 45.- Sitio electrónico. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Consejo deberá mantener en su sitio electrónico, a lo menos, la siguiente información, la que deberá ser actualizada dentro de los primeros cinco días de cada mes:

1. Individualización de las o los consejeros y altas o altos directivos a que se refieren los párrafos 3°, 4° y 5° del Título II de esta ley.
2. Valor total de las cotizaciones enteradas en el mes anterior e indicación de los montos asignados a cada uno de los Fondos del Sistema.
3. Política de inversiones y política de solución de conflictos de intereses vigentes.
4. Composición agregada de la cartera de inversión de cada uno de los Fondos del Sistema, considerando el período anterior al último día del cuarto mes precedente.
5. Valor de cada uno de los Fondos del Sistema, valor de sus cuotas y rentabilidad real de los mismos.
6. Monto de las comisiones a que se refieren los incisos sexto⁷⁵ y séptimo⁷⁶ del artículo 45 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pagadas con cargo a cada uno de los Fondos del Sistema.
7. El reporte a que se refiere el inciso final del artículo 5 de la presente ley.
8. Monto total de las transferencias mensuales efectuadas por concepto de aporte solidario intergeneracional y bono compensatorio para las mujeres, a que se refieren los párrafos 4° y 5° del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, y número de las mismas.

75 Para efectos de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, a que se refieren las letras h)[cuotas de fondos mutuos] y j)[efectos de comercio emitidos por empresas públicas o privadas] del artículo 45 y títulos representativos de índices de instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que incluyan comisiones en el precio, los Superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros establecerán anualmente, a través de una resolución conjunta, debidamente fundada, y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, a los fondos mutuos, fondos de inversión y otros emisores.

Al efecto, se oír previamente a las Administradoras.

Si las comisiones pagadas son mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras. El procedimiento para determinar las comisiones efectivamente pagadas a los fondos mutuos y de inversión se establecerá en la citada resolución, la que definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.

76 La Superintendencia establecerá anualmente, a través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo 45. Estas comisiones máximas incluirán conceptos tales como: administración, transacción y custodia de los títulos a que se refiere la citada letra j), según determine la Superintendencia por norma de carácter general. Al efecto, se oír previamente a las Administradoras. Si las comisiones pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras. La referida resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso.

9. La información entregada mensualmente de acuerdo a la obligación impuesta en el inciso final del artículo 32 de la presente ley.

El sitio electrónico deberá además permitir que las y los afiliados efectúen a través de aquél las consultas que el Comité Directivo determine, de conformidad a la normativa interna de funcionamiento.

Artículo 46.- Publicidad de las actas del Comité Directivo. Las actas de las sesiones del Comité Directivo serán públicas. En ellas deberá incluirse, a lo menos, el nombre de las y los consejeros y demás personas que hayan asistido a dicha sesión, un resumen de sus intervenciones y un registro de los acuerdos adoptados.

Con todo, las intervenciones y acuerdos que digan relación con las materias a que se refiere el Título IV de esta ley, así como aquellas que puedan contener información privilegiada en los términos del artículo 164⁷⁷ de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, o cuya publicidad pueda afectar los resultados de inversión de los Fondos del Sistema, serán secretos o reservados y mantendrán dicho carácter por el término señalado en el inciso segundo⁷⁸ del artículo 22 de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Artículo 47.- Memoria anual. Dentro del primer cuatrimestre de cada año, el Consejo deberá publicar en su sitio electrónico una memoria que describa el trabajo efectuado en el año inmediatamente anterior, incluyendo, entre otras materias, un reporte de aquellas a que se refiere el artículo 45 y una evaluación de la gestión y acciones realizadas en el año calendario anterior.

Artículo 48.- Estados financieros auditados. Dentro del primer cuatrimestre de cada año, el Consejo deberá publicar en su sitio electrónico sus estados financieros auditados que deberán reflejar con claridad su situación patrimonial, detallando los incrementos y disminuciones sufridos en su patrimonio propio, al cierre del año inmediatamente anterior.

En el mismo plazo y para el mismo período a que se refiere el inciso anterior deberá publicar los estados financieros auditados de los Fondos del Sistema.

Para efectos de lo establecido en los incisos anteriores, el Comité Directivo, a más tardar al 31 de enero del año a auditar, designará una o un auditor externo a partir de una terna que al efecto le hubiera formulado la o el Ministro de Hacienda, de entre quienes que figuren registrados ante la Comisión para el Mercado Financiero.

⁷⁷ Artículo 164.- Para los efectos de esta ley, se entiende por información privilegiada cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, como asimismo, la información reservada a que se refiere el artículo 10 de esta ley.

También se entenderá por información privilegiada, la que se posee sobre decisiones de adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas de un inversionista institucional en el mercado de valores.

⁷⁸ Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la calificación [de secreto o reservado], el servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una sola vez, podrá prorrogarla por otros cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que pueda irrogar su terminación.

La o el auditor externo deberá informar al Comité Directivo por escrito sobre el cumplimiento de su mandato de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo y deberá dar cuenta de ello en la sesión que éste lo convoque al efecto. El informe de la o del auditor externo será incorporado en la memoria a que se refiere el artículo anterior junto con los estados financieros auditados.

Los estados financieros a que se refiere este artículo deberán confeccionarse de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo con las normas que el Comité Directivo dicte, al efecto, previo informe favorable de la Comisión para el Mercado Financiero. El referido Comité regulará además la forma y plazos en que se realizará la auditoría a que se refiere este artículo, debiendo garantizar el acceso completo y oportuno a la o el auditor designado de los antecedentes que requiera para tal fin, sin perjuicio del deber de éste de mantener reserva respecto de aquéllos que no tengan el carácter de públicos.

Artículo 49.- Presentaciones. Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 47 y 48, la o el Presidente del Comité Directivo deberá presentar dichos documentos ante las o los Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, luego de lo cual deberá concurrir, para informar su contenido y conclusiones, ante las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, las que para estos efectos sesionarán conjuntamente.

Artículo 50.- Evaluación general trienal. Cada tres años, los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social efectuarán una evaluación general sobre la administración del Sistema y su conformidad con el objeto a que se refiere el artículo 1, en el respectivo periodo. Dicha evaluación comprenderá el examen de los actos y decisiones del Consejo en relación a la normativa legal y reglamentaria aplicable; a la normativa interna de funcionamiento que el Comité Directivo hubiere dictado al efecto; y a las políticas de inversiones y solución de conflictos de intereses que hubieran regido para el período en revisión, así como también los estados financieros de su patrimonio y los de los Fondos del Sistema.

Para estos efectos y de estimarlo necesario, los Ministerios podrán llevar a cabo una auditoría especial para examinar la información financiera del patrimonio del Consejo, así como también la de los Fondos del Sistema. Esta auditoría podrá ser encargada a terceros, la que será sin perjuicio de la contemplada de manera permanente en el artículo 48.

El Consejo deberá facilitar el acceso oportuno y completo de toda la documentación que le sea requerida en el marco de la evaluación trienal, sin perjuicio del deber de reserva a que se refiere el artículo 59.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN DE INVERSIONES Y

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DEL SISTEMA

Párrafo 1°

RÉGIMEN DE INVERSIONES

Artículo 51.- Instrumentos, operaciones y contratos autorizados. Los Fondos del Sistema, sin perjuicio de los depósitos que se mantengan en cuentas corrientes, deberán ser invertidos en los mismos instrumentos, operaciones y contratos autorizados como inversión para los Fondos de Pensiones, en virtud de lo establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.

El Consejo no podrá adquirir, con recursos de los Fondos del Sistema, valores afectos a gravámenes, prohibiciones o embargos, salvo que el Comité Directivo, de acuerdo a lo que establezca en su política de inversiones exceptúe de esta prohibición a aquellas acciones de una sociedad nacional concesionaria de obras de infraestructura que se encuentren prendadas en favor de tenedores de bonos u otros acreedores de la misma sociedad.

Artículo 52.- Políticas de Inversiones y de Solución de Conflictos de Intereses. El Comité Directivo elaborará y aprobará la política de inversiones para cada uno de los Fondos del Sistema. Asimismo, elaborará y aprobará una política de solución de conflictos de intereses. Anualmente, ambas políticas deberán ser actualizadas y aprobadas por el Comité Directivo. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 46, ambos documentos serán de carácter público y deberán estar disponibles en el sitio electrónico del Consejo.

La política de inversiones deberá incluir al menos los siguientes contenidos:

- a) Objetivos en la gestión de los recursos de cada Fondo del Sistema.
- b) Políticas de control interno relativas al proceso de inversión.
- c) Identificación de las fuentes de riesgo y descripción de los tipos de riesgos considerados, así como de la política de administración según tipo de riesgo.
- d) Definición de las modalidades de contratación para la materialización de las inversiones, a las que en todo caso no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley.
- e) Criterios generales para la evaluación y selección de las inversiones y las entidades que puedan intervenir en el proceso de inversión.
- f) Mecanismos y plazos para la eliminación de los excesos de inversión que se produzcan.
- g) Tipos de operaciones con instrumentos derivados.

- h) Condiciones éticas y profesionales exigidas al personal interno o externo que tenga participación en el área de inversiones.
- i) Criterios de selección de los administradores de activos, a que se refieren los incisos sexto y séptimo del artículo 45 bis⁷⁹ del decreto ley N° 3.500, de 1980, y tratamiento de eventuales conflictos de intereses entre el Consejo y los citados administradores de activos.
- j) Criterios y procedimientos para evaluar el desempeño en la gestión de las inversiones.

Por su parte, la política de solución de conflictos de intereses deberá referirse, a lo menos, a las siguientes materias:

- a) Definición e identificación de potenciales conflictos de intereses derivados de la función de administrador de recursos previsionales.
- b) Procedimientos y normas de control interno que aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos de intereses.
- c) Procedimientos y normas de confidencialidad y manejo de la información privilegiada.

El incumplimiento de la política de inversiones o de la política de solución de conflictos de intereses, establecidas de conformidad con el presente artículo, por las o los gerentes y trabajadoras o trabajadores del Consejo o por las personas que le presten servicios a cualquier título, configurará incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, en los términos del artículo 160, N° 7⁸⁰, del Código del Trabajo o el contrato de prestación de servicios, respectivamente. En el caso que el incumplimiento se efectúe por alguno de las o los consejeros, se configurará la causal de remoción a que se refiere el artículo 21, letra e). Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan, las que podrán perseguirse de conformidad a lo establecido en el artículo 62.

Artículo 53.- Valoración de los Fondos del Sistema. El valor de los Fondos del Sistema se determinará diariamente sobre la base del valor económico o de mercado de las inversiones. Para estos efectos deberá utilizarse el valor determinado e informado por la Superintendencia de Pensiones para los Fondos de Pensiones. En caso que los Fondos del Sistema adquieran un instrumento que la Superintendencia de Pensiones no haya valorado, el Consejo deberá determinar su precio sobre la base del valor económico o de mercado.

Artículo 54.- Custodia de los Títulos. Las normas sobre depósito de valores contenidas en la ley N° 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores, se aplicarán a los Fondos del Sistema, en todo lo que no se contraponga al presente artículo.

79 Véanse las notas al artículo 45 N°6 del proyecto de ley.

80 Art. 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:
7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Cuando se depositen valores de los Fondos del Sistema, se entenderá que quien deposita son los Fondos, quedando obligada la empresa de depósito a llevar cuentas individuales separadas por cada Fondo.

Los valores depositados en las empresas de depósito que correspondan a los Fondos del Sistema serán inembargables y no podrán constituirse sobre ellos, prendas o derechos reales, ni decretarse medidas precautorias. Lo anterior es sin perjuicio de la entrega de estos valores en garantía para la realización de operaciones con instrumentos derivados.

Una o un representante del Consejo deberá concurrir a las asambleas de depositantes a que se refiere el Título III de la ley N° 18.876. En tales asambleas deberá siempre pronunciarse respecto de los acuerdos que se adopten y se deberá dejar constancia de su voto en las actas respectivas.

Cuando la empresa de depósito se encuentre en la situación descrita en los artículos 37⁸¹ y 38⁸² de la ley N° 18.876 y la Comisión para el Mercado Financiero revocare su autorización de existencia, hecho que comunicará al Consejo a más tardar al día siguiente de decretada la revocación, éste dispondrá el traspaso transitorio de la cartera de valores depositados en custodia, al Banco Central de Chile o a otra empresa de depósito de valores.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también, en caso de disolución de la empresa de depósito, cualquiera sea su causa, hecho que deberá ser comunicado por la Comisión para el Mercado Financiero al día siguiente de producido.

Artículo 55.- Mercados. Las transacciones de títulos efectuadas con los recursos de los Fondos del Sistema deberán realizarse en los mercados autorizados para los Fondos de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980.

Artículo 56.- Límites cuantitativos. Las inversiones con los recursos de los Fondos de Ahorro Personal deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que se señalan a continuación:

a) El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la suma de las inversiones de los Fondos de Ahorro Personal en el extranjero dentro del siguiente rango: 30% al 80% del valor de estos Fondos.

81 Artículo 37.- Si el patrimonio de una empresa se redujere bajo el mínimo señalado en el Artículo 18, letra c), deberá informar tal circunstancia a la Superintendencia dentro de los dos días hábiles siguientes de constatado el hecho, con una explicación sobre las razones del déficit. Además, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a esa comunicación presentará a la Superintendencia y al comité de vigilancia un detalle de las medidas que hubiere adoptado o adoptará para solucionarlo.

Transcurridos 30 días hábiles desde que se hubiere producido el déficit sin haberlo superado, el directorio de la empresa o la Superintendencia a solicitud del comité de vigilancia, dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior mencionado en este inciso, deberá convocar en única citación a una junta extraordinaria de accionistas para aprobar el aumento de capital necesario para cumplir el requerimiento legal, la que deberá celebrarse dentro de los 60 días hábiles siguientes de producido el déficit.

La junta se constituirá con las acciones que se encuentren presentes o representadas, cualquiera que sea su número, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto.

En caso de aprobarse el aumento de capital, éste deberá enterarse en dinero efectivo y en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la fecha del acuerdo.

Si transcurrido el plazo anterior, el patrimonio de la custodia no igualare al menos el patrimonio legal, la Superintendencia revocará su autorización de existencia. Igual medida se aplicará, en caso que la junta no se constituya o no acordare aumentar el capital social.

82 Artículo 38.- Si las pólizas de seguros o las garantías constituidas conforme al Artículo 20, letra e), por cualquier causa fueren insuficientes, la empresa deberá rehabilitarlas, reemplazarlas, completarlas o restablecerlas, dentro de los 20 días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento del déficit. La empresa informará a la Superintendencia dentro de las 24 horas siguientes de haber tomado dicho conocimiento, explicando las razones del déficit. Transcurrido el plazo sin que se hubieren rehabilitado, reemplazado, completado o restablecido convenientemente las pólizas de seguros o las garantías, la Superintendencia revocará la autorización de existencia de la empresa.

- b) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo primero del artículo 45⁸³ del decreto ley N° 3.500, de 1980, no podrá ser superior al 17% del valor de cada Fondo de Ahorro Personal.
- c) La inversión máxima en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrá mantener cada Fondo de Ahorro Personal respecto de la inversión en instrumentos calificados como de deuda será de un 50% de la inversión en tales instrumentos con exposición en moneda extranjera.
- d) La inversión de los Fondos de Ahorro Personal en instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que se autoricen en el Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones, no podrá ser superior al 30% del valor de cada Fondo de Ahorro Personal.

Asimismo, los Fondos de Ahorro Personal deberán observar los siguientes límites de inversión por emisor:

- a) La suma de las inversiones que se efectúen con recursos de cada uno de los Fondos de Ahorro Personal en acciones, depósitos en cuentas corrientes y a plazo, otros títulos de deuda y operaciones con instrumentos derivados, calculado en función del activo objeto y medido en términos netos, emitidos por un mismo banco o institución financiera o garantizados por ellos, no podrá exceder del 9% del valor total del respectivo Fondo.
- b) La suma de las inversiones en acciones, bonos y efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma empresa nacional, no podrá superar el 6% del valor de cada Fondo de Ahorro Personal.

Con todo, las inversiones con recursos de los Fondos de Ahorro Personal en cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos, regido por la ley N° 20.712, que establece la administración de fondos de terceros y carteras individuales y deroga los cuerpos legales que indica, más el monto de los aportes comprometidos a enterar mediante contratos de promesas, no podrá exceder del 5% del valor de cada Fondo.

La suma de las inversiones de los Fondos de Ahorro Personal en cuotas de un fondo de inversión regido por la ley N° 20.712, más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos de promesa y suscripción de pago de cuotas de los fondos de inversión antedichos, no podrá exceder el 49% de la suma de las cuotas suscritas y las cuotas que se haya prometido suscribir y pagar del respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del 49% de la emisión.

- c) La suma de las inversiones de los Fondos de Ahorro Personal en cuotas de un fondo mutuo regido por la ley N° 20.712, no podrá ser superior al 35% de las cuotas en circulación del respectivo fondo mutuo.

La suma de las inversiones de los Fondos de Ahorro Personal en acciones de un banco o una sociedad nacional, no podrá exceder el 7% del total de las acciones suscritas de dicha sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder el 20% de la emisión.

La suma de las inversiones de los Fondos de Ahorro Personal en acciones, bonos y efectos de comercio, emitidos o garantizados por empresas que pertenezcan a un mismo grupo empresarial en los términos del artículo 96⁸⁴ de la ley N° 18.045, no podrá exceder del 15% del valor de cada Fondo.

83 El artículo 45 del decreto ley 3.500, de 1980, se incluye como **ANEXO V**.

84 Artículo 96.- Grupo empresarial es el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.

Forman parte de un mismo grupo empresarial:

Al Fondo de Ahorro Colectivo le serán aplicables los mismos límites individualizados en el presente artículo. Con todo, no podrá invertir en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo primero del artículo 45⁸⁵ del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Párrafo 2°

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DEL SISTEMA

Artículo 57.- Diligencia debida. El Consejo deberá efectuar todas las gestiones que sean necesarias para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos del Sistema. En cumplimiento de sus funciones, atenderá exclusivamente al interés de dichos Fondos y asegurará que todas las operaciones de adquisición y enajenación de títulos de recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo.

El Consejo podrá celebrar transacciones, compromisos, convenios judiciales y extrajudiciales, avenimientos, prórrogas y novaciones, con el objeto de evitar perjuicios para los Fondos del Sistema, derivados del no pago de los instrumentos de deuda adquiridos por éstos. Asimismo, podrá participar con derecho a voz y voto en juntas de acreedores o en cualquier tipo de procedimientos concursales o de reorganización.

Artículo 58.- Registro. El Consejo deberá mantener la información y llevar registros de las transacciones propias y las de los Fondos del Sistema, según se establezca en la normativa interna de funcionamiento.

La o el Contralor Interno del Consejo deberá pronunciarse acerca de los mecanismos de control interno que éste se imponga para velar por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente Título y el acatamiento de las prohibiciones a que se refiere el artículo 60 de la ley N° 20.712, como también sobre los sistemas de información y archivo para registrar el origen, destino y oportunidad de las transacciones que se efectúen con los recursos de los Fondos del Sistema.

-
- a) Una sociedad y su controlador;
 - b) Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último, y
 - c) Toda entidad que determine la Superintendencia considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:
 1. Que un porcentaje significativo del activo de la sociedad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en sociedades, acreencias o garantías;
 2. Que la sociedad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda;
 3. Que la sociedad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial, y
 4. Que la sociedad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial.

85 Véase el ANEXO V.

Artículo 59.- Deber de reserva. Las y los consejeros, altos directivos, trabajadores y personas que, a cualquier título, presten servicios para el Consejo estarán obligados a guardar reserva acerca de la información de que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción de estas obligaciones se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales.

Se entenderá, para todos los efectos legales, que tienen el carácter de reservados los documentos y antecedentes a los cuales las personas a que se refiere el inciso anterior accedan en el ejercicio de sus funciones respecto de la adquisición, enajenación o mantención de instrumentos para alguno de los Fondos del Sistema, y la información sobre las inversiones de los recursos de un Fondo, que aún no haya sido divulgada oficialmente al mercado y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones, sin perjuicio de las demás materias a las que la ley le otorgue tal carácter.

Artículo 60.- Información privilegiada. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, las y los consejeros, altos directivos, trabajadores y personas que, a cualquier título, presten servicios en el Consejo y que en razón de su cargo o posición y valiéndose de información privilegiada de aquella que trata el Título XXI de la ley N° 18.045:

- a) Ejecuten un acto por sí o por intermedio de otras personas, con el objeto de obtener un beneficio pecuniario para sí o para otros, mediante cualquier operación o transacción de valores de oferta pública.
- b) Divulguen la información privilegiada relativa a las decisiones de inversión de cualquiera de los Fondos del Sistema a personas distintas de las encargadas de efectuar las operaciones de adquisición o enajenación de valores de oferta pública por cuenta o en representación de cualquiera de ellos.

Igual pena sufrirán, las y los trabajadores del Consejo que, estando encargados de la administración de la cartera y, en especial, de las decisiones de adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para cualquiera de los Fondos del Sistema, ejerzan por sí o a través de otras personas, simultáneamente la función de administración de otra cartera de inversiones.

Las sanciones establecidas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas que correspondan, según a lo establecido en el artículo 172⁸⁶ de la ley N° 18.045. Para estos efectos, el Consejo podrá perseguir dichas responsabilidades en representación de los Fondos del Sistema.

Artículo 61.- Prohibiciones. En todo aquello que no sea contrario a lo establecido en esta ley, el Consejo y quienes participen en las decisiones de inversión de los Fondos del Sistema o que, en razón de su cargo o posición, tengan acceso a

86 Artículo 172.- Toda persona perjudicada por actuaciones que impliquen infracción a las disposiciones del presente Título, tendrá derecho a demandar indemnización en contra de las personas infractoras.

La acción para demandar perjuicios prescribirá en cuatro años contado a partir de la fecha en que la información privilegiada haya sido divulgada al mercado y al público inversionista. Las personas que hayan actuado en contravención a lo establecido en este Título, deberán entregar a beneficio fiscal, cuando no hubiere otro perjudicado, toda utilidad beneficio pecuniario que hubieren obtenido a través de transacciones de valores del emisor de que se trate.

Aquel que infrinja lo dispuesto en el artículo 169, será responsable civilmente de los daños ocasionados al cliente respectivo o a los fondos en su caso, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan.

información al respecto, estarán sujetos a las prohibiciones establecidas en los artículos 22⁸⁷ y 23⁸⁸ de la ley N° 20.712 y en el artículo 154⁸⁹ del decreto ley N° 3.500, de 1980. Podrá perseguirse la responsabilidad civil y penal que corresponda por los actos y contratos realizados en contravención a las mismas.

87 Artículo 22.- Prohibiciones. Sin perjuicio de las demás prohibiciones contenidas en otras leyes, son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones efectuadas por las administradoras y, según corresponda en cada caso, por las personas que participen en las decisiones de inversión del fondo o que, en razón de su cargo o posición, tengan acceso a información de las inversiones del fondo:

- a) Las operaciones realizadas con los bienes del fondo para obtener beneficios indebidos, directos o indirectos.
- b) El cobro de cualquier servicio al fondo, no autorizado por ley o los reglamentos internos, o en plazos y condiciones distintas de las que en ellos se establezca.
- c) El cobro al fondo de cualquier servicio prestado por personas relacionadas con la administradora del mismo, salvo que ello esté expresamente autorizado con un límite anual por el reglamento interno del fondo y que dicho cobro se efectúe en condiciones de mercado.
- d) La comunicación de información relevante relativa a la adquisición, enajenación o mantención de activos por cuenta del fondo, a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas.
- e) La adquisición de activos que haga la administradora para sí, dentro de los 5 días siguientes a la enajenación de éstos, efectuada por ella por cuenta del fondo, si el precio de compra es inferior al existente antes de dicha enajenación. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de 60 días.
- f) La enajenación de activos propios que haga la administradora dentro de los 5 días siguientes a la adquisición de éstos por cuenta del fondo, si el precio de venta es superior al existente antes de dicha adquisición. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de 60 días.
- g) La adquisición o enajenación de bienes por cuenta del fondo en que actúe para sí como vendedor o comprador la administradora o un fondo privado, de los del capítulo V de esta ley, bajo su administración o de una sociedad relacionada a ella.
- h) La adquisición o enajenación de bienes por cuenta del fondo a personas relacionadas con la administradora o a fondos administrados por ella o por sociedades relacionadas, salvo que se trate de las excepciones a las que se refiere el artículo siguiente.
- i) Las enajenaciones o adquisiciones de activos que efectúe la administradora, si resultaren ser más ventajosas para ésta que las respectivas enajenaciones o adquisiciones de éstos, efectuadas en el mismo día, por cuenta del fondo. Lo anterior, salvo que se entregara al fondo, dentro de los dos días siguientes al de la operación, la diferencia de precio correspondiente.

Para los efectos de las operaciones a que se refiere este artículo, se entenderá por activos todos aquellos que sean de la misma especie, clase, tipo, serie y emisor.

Se entenderá por activos de baja liquidez aquellos que no se transen frecuentemente y en volúmenes significativos en los mercados secundarios formales, de conformidad a lo determinado por la Superintendencia mediante norma de carácter general.

No obstante las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan y el derecho a reclamar perjuicios, los actos o contratos realizados en contravención a las prohibiciones anteriormente señaladas no verán afectada su validez.

88 Artículo 23.- Prohibiciones adicionales. Las administradoras, sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y demás personas relacionadas no podrán adquirir, enajenar o gravar directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, instrumentos, bienes o contratos de propiedad de los fondos que administren, ni enajenar o gravar los suyos a éstos. Tampoco podrán dar en préstamo dinero u otorgar garantías a favor de dichos fondos y viceversa. Se exceptuarán de esta prohibición y de la establecida en la letra h) del artículo anterior, aquellas adquisiciones y enajenaciones que se realicen sobre los activos en la forma y condiciones determinadas por la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Las transacciones de cuotas del fondo que efectúen las personas mencionadas en el inciso anterior deberán informarse a la Superintendencia en la forma y plazos que ésta determine mediante norma de carácter general. No se considerará, para efectos de este inciso, como persona relacionada al custodio cuando actúe por cuenta de terceros.

89 Artículo 154.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones efectuadas por las Administradoras:

- a) Las operaciones realizadas con los bienes de cualquiera de los Fondos, para obtener beneficios indebidos, directos o indirectos;
- b) El cobro de cualquier servicio a los Fondos, salvo aquellas comisiones que están expresamente autorizadas por ley;
- c) La utilización en beneficio propio o ajeno de información relativa a operaciones a realizar por cualquiera de los Fondos, con anticipación a que éstas se efectúen;
- d) La comunicación de información esencial relativa a la adquisición, enajenación y mantención de activos por cuenta de cualquiera de los Fondos a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas, en representación de la Administradora;
- e) La adquisición de activos, con excepción de cuotas de fondos mutuos que se transen directamente con el emisor, que haga la Administradora para sí, dentro de los 5 días siguientes a la enajenación de éstos, efectuada por ella por cuenta de cualquiera de los Fondos, si el precio de compra es inferior al precio promedio ponderado existente en los mercados formales el día anterior al de dicha enajenación;
- f) La enajenación de activos propios, con excepción de cuotas de fondos mutuos que se transen directamente con el emisor, que haga la Administradora dentro de los 5 días siguientes a la adquisición de éstos, efectuada por ella por cuenta de cualquiera de los Fondos, si el precio de venta es superior al precio promedio ponderado existente en los mercados formales el día anterior al de dicha adquisición;
- g) La adquisición o enajenación de bienes, por cuenta de cualquiera de los Fondos, en que actúe para sí, como cedente o adquirente la Administradora;
- h) Las enajenaciones o adquisiciones de activos, con excepción de cuotas de fondos mutuos que se transen directamente con el emisor, que efectúe la Administradora si resultaran ser más ventajosas para ésta que las respectivas enajenaciones o adquisiciones de éstos, efectuadas en el mismo día por cuenta de cualquiera de los Fondos; salvo si se entregara al Fondo respectivo, dentro de los dos días siguientes al de la operación, la diferencia de precio correspondiente, y
- i) La realización de descuentos a los beneficios que paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual pertenece la Administradora.

Para los efectos de este artículo, la expresión Administradora comprenderá, también, cualquier persona que participe en las decisiones de inversión de alguno de los Fondos o que, en razón de su cargo o posición, tenga acceso a información de las inversiones de alguno de éstos. Además, se entenderá por activos, aquellos que sean de la misma especie, clase, tipo, serie y emisor, en su caso.

No obstante las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, y el derecho a reclamar perjuicios, los actos o contratos realizados en contravención a las prohibiciones anteriormente señaladas, se entenderán válidamente celebradas.

En todo caso, las transacciones de activos que pueden ser adquiridos con los recursos de alguno de los Fondos del Sistema, efectuadas por las personas a que se refiere el inciso primero, sus cónyuges o convivientes civiles, deberán ser informadas al Comité Directivo dentro de los cinco días siguientes de la respectiva transacción, a excepción de los depósitos a plazo emitidos por bancos e instituciones financieras, adquiridos directamente de las instituciones emisoras. El Comité Directivo podrá solicitar a estas personas información respecto de las transacciones de los activos a que alude este inciso que hubieran efectuado en un período previo de hasta doce meses a la fecha en que pasen a ser elegibles para alguno de los Fondos del Sistema.

Artículo 62.- Responsabilidad por perjuicio a los Fondos del Sistema. El Consejo estará expresamente facultado para iniciar todas las acciones legales que correspondan en contra de quien cause un perjuicio a cualquiera de los Fondos del Sistema, incluidos las o los altos directivos, dependientes y personas que, a cualquier título, presten servicios en él cuando dichos perjuicios se causaran por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el presente Título, debidamente certificadas por la o el Contralor Interno. Las personas antes mencionadas que hubieran participado en tales actuaciones serán solidariamente responsables, y de proceder indemnización de los perjuicios, ésta incluirá el daño emergente y el lucro cesante, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Será competente para conocer de las acciones destinadas a obtener las indemnizaciones correspondientes el Juez de Letras del domicilio del Consejo. Éstas se tramitarán de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Mediante normativa interna de funcionamiento, el Comité Directivo fijará el mecanismo, forma y plazo conforme a los cuales dichas indemnizaciones deberán ser enteradas a los Fondos del Sistema, o traspasadas a sus afiliadas o afiliados.

Los incumplimientos a que se refiere el inciso primero, configurarán además un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, en los términos del artículo 160, N° 7⁹⁰, del Código del Trabajo o el contrato de prestación de servicios, según corresponda.

TÍTULO V

DEL PERSONAL DEL CONSEJO

Artículo 63.- Régimen de personal. Todo el personal del Consejo se registrará por las disposiciones de esta ley y en lo no previsto en ella, se registrará, como legislación supletoria, por el Código del Trabajo. En ningún caso se aplicarán al personal del Consejo las normas generales o especiales dictadas o que se dicten para el sector público.

90 Véase nota al artículo 52, inciso final.

En el Consejo no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, acuerdo de unión civil o parentesco hasta el primer grado de consanguinidad o primer grado de afinidad. Con todo, si respecto de alguno de sus consejeras o consejeros o trabajadoras o trabajadores se produjera en forma sobreviniente alguno de los vínculos aludidos, la incompatibilidad señalada no se configurará.

El Comité Directivo fijará, en su normativa interna de funcionamiento, el procedimiento de selección aplicable a la designación de las o los altos directivos a que se refiere el inciso segundo del artículo 8, el que deberá considerar requisitos de idoneidad técnica y ser abierto, de amplia difusión, transparente y competitivo. Las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en los artículos 16 y 17 se harán extensivas a estos directivos, en los términos dispuestos en dichas normas y conforme a lo establecido en el artículo 18.

Por su parte, la o el Gerente General podrá hacer extensivas todas o algunas de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 16 y 17, así como las obligaciones establecidas en los artículos 30 y 31 a determinados trabajadoras o trabajadores del Consejo, considerando las responsabilidades que tengan a su cargo y en función de lo establecido en las políticas de inversiones y de solución de conflictos de intereses.

Será obligación de cada uno de las o los consejeros, altos directivos y trabajadores del Consejo denunciar ante el Ministerio Público, o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que se prestan los servicios, con la debida prontitud, los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio, en los términos señalados en el inciso final del artículo 52. La normativa interna de funcionamiento regulará, a lo menos, el procedimiento para la contratación de las o los trabajadores del Consejo, la forma en que se determinarán sus remuneraciones, la aplicación de las indemnizaciones indicadas en los artículos 161⁹¹, 162⁹² y

91 Art. 161. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168.

En el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores de casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pague al trabajador, al momento de la terminación, una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de cargos o empleos de exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos.

Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia.

92 Art. 162. Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda.

Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en el número 6 del artículo 159, el plazo será de seis días hábiles.

Deberá enviarse copia del aviso mencionado en el inciso anterior a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo. Las Inspecciones del Trabajo, tendrán un registro de las comunicaciones de terminación de contrato que se les envíen, el que se mantendrá actualizado con los avisos recibidos en los últimos treinta días hábiles.

Cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161, el aviso deberá darse al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a lo menos con treinta días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pague al trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada. La comunicación al trabajador deberá, además, indicar, precisamente, el monto total a pagar de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador. No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la respectiva demanda.

Los errores u omisiones en que se incurra con ocasión de estas comunicaciones que no tengan relación con la obligación de pago íntegro de las imposiciones previsionales, no invalidarán la terminación del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que establece el artículo 506 de este Código. La Inspección del Trabajo, de oficio o a petición de parte, estará especialmente facultada para exigir al empleador la acreditación del pago de cotizaciones previsionales al momento del despido, en los casos a que se refieren los

163⁹³ del Código del Trabajo y otros aspectos relacionados con el personal. En ningún caso se podrá pactar el pago de indemnizaciones por causas distintas a las indicadas en los mencionados artículos, ni alterar el monto que entregue la base de cálculo dispuesta en dichas normas. Tampoco se podrá convenir, individual o colectivamente, indemnizaciones cuyo límite máximo exceda aquel establecido en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo.

TÍTULO VI

DE LOS RECURSOS

Artículo 64.- Régimen general. Las decisiones a que den lugar los cálculos y transferencias de los beneficios establecidos en el Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, que el Consejo efectúe en el ejercicio de sus facultades son impugnables por la o el interesado mediante los recursos administrativos y judiciales regulados en este Título, sin perjuicio de los que sean procedentes de conformidad a las normas generales.

Artículo 65.- Recursos administrativos. Se podrá solicitar ante la o el Contralor Interno la reconsideración de las decisiones del Consejo a que se refiere el artículo anterior.

La solicitud de reconsideración se formulará por escrito y contendrá en forma clara y precisa los hechos y el derecho en que se fundamenta. La o el Contralor Interno podrá ordenar la apertura de un término de prueba, si así lo estimare necesario, el que no podrá ser inferior a cinco días ni superior a quince, y dispondrá de cuarenta y cinco días para pronunciarse al respecto, contados desde la recepción del recurso.

incisos precedentes. Asimismo, estará facultada para exigir el pago de las cotizaciones devengadas durante el lapso a que se refiere el inciso séptimo. Las infracciones a este inciso se sancionarán con multa de 2 a 20 UTM.

93 Art. 163. Si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término en conformidad al artículo 161, deberá pagar al trabajador, la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el inciso siguiente.

A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal la que no cumpla con el requisito señalado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente a dicho empleador. Esta indemnización tendrá un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración.

La indemnización a que se refiere este artículo será compatible con la sustitutiva del aviso previo que corresponda al trabajador, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 y en el inciso cuarto del artículo 162 de este Código.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no se aplicará en el caso de terminación del contrato de los trabajadores de casa particular, respecto de los cuales regirán las siguientes normas:

- a) Tendrán derecho, cualquiera que sea la causa que origine la terminación del contrato, a una indemnización a todo evento que se financiará con un aporte del empleador, equivalente al 4,11% de la remuneración mensual imponible, la que se regirá, en cuanto corresponda, por las disposiciones de los artículos 165 y 166 de este Código, y
- b) La obligación de efectuar el aporte tendrá una duración de once años en relación con cada trabajador, plazo que se contará desde el 1° de enero de 1991, o desde la fecha de inicio de la relación laboral, si ésta fuere posterior. El monto de la indemnización quedará determinado por los aportes correspondientes al período respectivo, más la rentabilidad que se haya obtenido de ellos.

Vencido el término de cuarenta y cinco días a que se refiere el inciso anterior y sin que la o el Contralor Interno se hubiere pronunciado sobre la solicitud de reconsideración, se entenderá que la rechaza. En este último caso, la interesada o interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite.

La interposición de este recurso no suspenderá la ejecución de la decisión impugnada, a menos que, a solicitud de la interesada o interesado, la o el Contralor Interno, por decisión fundada, determine lo contrario.

La o el recurrente no podrá deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras el recurso a que se refiere el presente artículo no haya sido resuelto o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimado.

Las decisiones que se adopten durante el procedimiento de impugnación se notificarán mediante carta certificada dirigida al domicilio que la o el interesado hubiere designado en su escrito de reconsideración o con posterioridad, salvo que éste hubiere propuesto una forma de notificación diversa. Las notificaciones efectuadas por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Artículo 66.- Reclamación de ilegalidad. Contra la decisión de la o el Contralor Interno que rechace total o parcialmente la solicitud de reconsideración de la o el interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, éste podrá deducir reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de su domicilio.

La interesada o interesado deberá interponer la reclamación por escrito, en el plazo de diez días contados desde la fecha de notificación de la decisión a que se refiere el inciso precedente o desde el vencimiento del término para resolverlo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior, y deberá señalar los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, las razones por las cuales el acto impugnado lo perjudicaría y las peticiones concretas que se someten a la resolución del Tribunal.

La Corte de Apelaciones respectiva declarará inadmisibles las reclamaciones que no cumpla con las condiciones señaladas en el inciso precedente. Cuando corresponda, la o el reclamante deberá acompañar el certificado que acredite que la o el Contralor Interno no ha resuelto su solicitud dentro del plazo legal, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo anterior o, en su defecto, copia del escrito por medio del cual se solicita la expedición de dicho certificado.

Si la Corte de Apelaciones declare admisible el reclamo, dará traslado de éste al Consejo por seis días, más el aumento del término de emplazamiento a que se refiere el artículo 259⁹⁴ del Código de Procedimiento Civil, notificando esta resolución por oficio.

94 Art. 259 (256). Si el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso o fuera del territorio de la República, el término para contestar la demanda será de dieciocho días, y a más el aumento que corresponda al lugar en que se encuentre. Este aumento será determinado en conformidad a una tabla que cada cinco años formará la Corte Suprema con tal objeto, tomando en consideración las distancias y las facilidades o dificultades que existan para las comunicaciones.

Esta tabla se formará en el mes de Noviembre del año que preceda al del vencimiento de los cinco años indicados, para que se ponga en vigor en toda la República desde el 1° de Marzo siguiente; se publicará en el «Diario Oficial», y se fijará a lo menos, dos meses antes de su vigencia, en el portal de internet del Poder Judicial y en los oficios de todos los secretarios de Cortes y Juzgados de Letras.

Evacuado el traslado, o acusada la rebeldía, la Corte dispondrá, si lo estima procedente, la apertura de un término de prueba, el cual no podrá exceder de diez días, y dictará sentencia, en cuenta o previa vista de la causa, en el término de quince días, la cual no será susceptible de recurso alguno.

La sola interposición del reclamo de ilegalidad a que se refiere el presente artículo no suspenderá los efectos de la decisión impugnada. Con todo, la Corte podrá decretar orden de no innovar cuando su ejecución le produzca un daño irreparable al recurrente.

Artículo 67.- Plazos. Todos los términos previstos en el presente Título son de días hábiles.

Para los efectos de esta ley, se entienden que son días inhábiles los sábados, los domingos y los festivos, salvo respecto a los plazos judiciales establecidos en ella, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 66⁹⁵ del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

TÍTULO VII

DE LAS ADECUACIONES A OTRAS NORMAS

Artículo 68.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios:

1. Agrégase al artículo 4⁹⁶ el siguiente número 9):

“9) En el Consejo de Ahorro Colectivo: las o los consejeros y la o el Gerente General.”.

⁹⁵ Art. 66 (69). Los términos de días que establece el presente Código, se entenderán suspendidos durante los feriados, salvo que el tribunal, por motivos justificados, haya dispuesto expresamente lo contrario.

⁹⁶ Artículo 4°, encabezamiento:

Artículo 4°.- Son también sujetos pasivos de esta ley, aquellas autoridades y funcionarios que se indican a continuación:

2. Agrégase en el artículo 7⁹⁷ el siguiente número 7):

“7) Un registro a cargo del Consejo de Ahorro Colectivo, en el que deberá incluirse la información por los sujetos pasivos indicados en el numeral 9) del artículo 4°.”.

3. En el inciso cuarto del artículo 8°, reemplázase a continuación del número “6)”, la expresión “y” por una coma y agrégase a continuación del número “8)”, la expresión “y 9)”⁹⁸.

4. En el artículo 9:

- a) Sustitúyese, en su inciso primero, a continuación del número “6)”, la expresión “y” por una coma (,) y agrégase a continuación del número “8)” la expresión “y 9)”.
- b) Reemplázase, en su inciso cuarto, a continuación del número “6)”, la expresión “y” por una coma (,) y agrégase a continuación del número “8)” la expresión “y 9)”⁹⁹.

5. En el numeral 4 del inciso primero del artículo 12, sustitúyase a continuación del número “6)”, la expresión “y” por una coma y agrégase a continuación del número “8)”, la expresión “y 9)”¹⁰⁰.

6. Intercálase el siguiente artículo 22 bis, nuevo:

“Artículo 22 bis.- Si alguna de las personas individualizadas en el numeral 9 del artículo 4 no informa o registra de manera oportuna lo señalado en el artículo 8^{o101}, será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, la que será impuesta por el Comité Directivo del Consejo de Ahorro Colectivo.

Para estos efectos, el ministro de fe del Consejo del Ahorro Colectivo deberá poner los antecedentes respectivos en conocimiento de su Comité Directivo, para que se inicie el pertinente procedimiento, comunicándose esta circunstancia al afectado, quien tendrá el derecho a contestar en el plazo de diez días hábiles, pudiendo establecerse, en caso de

97 Artículo 7°, encabezamiento:

Artículo 7°.- Créanse los siguientes registros de agenda pública en los que deberá incorporarse la información señalada en el artículo 8°:

98 Concordancia.

99 Concordancias.

100 Concordancias

101 Artículo 8°.- Los registros de agenda pública establecidos en el artículo anterior deberán consignar:

1) Las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5°.

En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, si se percibe una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada.

El que, al solicitar reunión o audiencia, omitiere inexcusablemente la información señalada en el inciso anterior o indicare a sabiendas información inexacta o falsa sobre tales materias, será sancionado con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las otras penas que pudieren corresponderle.

2) Los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en esta ley, en el ejercicio de sus funciones.

Deberá publicarse en dicho registro el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió.

3) Los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación, que reciban los sujetos pasivos establecidos en esta ley, con ocasión del ejercicio de sus funciones.

En dichos registros deberá singularizarse el regalo o donativo recibido, la fecha y ocasión de su recepción y la individualización de la persona natural o jurídica de la cual procede

Se exceptuarán de esta obligación aquellas reuniones, audiencias y viajes cuando su publicidad comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional.

De éstos se rendirá cuenta anual, en forma reservada, a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General o de quien éste delegue, respecto de los sujetos pasivos señalados en el artículo 3° y en los numerales 1), 2), 4) y 7) del artículo 4°. En el caso de los sujetos pasivos señalados en los números 3), 5), 6) y 8) del artículo 4°, dicha rendición se realizará ante quien tenga la potestad sancionatoria, de acuerdo a las normas del Título III.

ser necesario, un período probatorio de ocho días, dentro del cual podrán presentarse todos los medios de prueba, la que se apreciará en conciencia. El Comité Directivo deberá adoptar la decisión final dentro de los diez días siguientes, contados desde la última diligencia.

En todo caso, el afectado podrá reclamar de la multa que le imponga el Comité Directivo del Consejo de Ahorro Colectivo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por escrito, en el plazo de diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la decisión a que se refiere el inciso segundo, señalando los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se someten a la resolución del Tribunal.

La Corte de Apelaciones declarará inadmisile la reclamación que no cumpla con las condiciones señaladas en el inciso precedente. En caso contrario, dará traslado de ésta al Consejo de Ahorro Colectivo por seis días hábiles, notificando esta resolución por oficio.

Evacuado el traslado, o acusada la rebeldía, la Corte dispondrá, si lo estima procedente, la apertura de un término de prueba, el cual no podrá exceder de diez días hábiles, y dictará sentencia, en cuenta o previa vista de la causa, en el término de quince días hábiles, la cual podrá ser apelada para ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles contado desde su notificación. La apelación será conocida en la forma prevista en los incisos anteriores y gozará de preferencia para su vista y fallo.

La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 3 del artículo 7¹⁰², o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa en dicho registro, configurará incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, en los términos del artículo 160, N° 7¹⁰³, del Código del Trabajo o la causal de remoción a que se refiere el artículo 21, letra e)¹⁰⁴ de la ley que regula al Consejo de Ahorro Colectivo, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

En el sitio electrónico del Consejo de Ahorro Colectivo se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas de acuerdo al inciso anterior, por el plazo de un mes desde que la decisión que establece la sanción esté firme.”.

Artículo 69.- Intercálase el siguiente artículo 20 bis, nuevo, en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses:

102 Artículo 7°.- Créanse los siguientes registros de agenda pública en los que deberá incorporarse la información señalada en el artículo 8°:
3) Un registro a cargo del Banco Central, en el que deberán incluir la información los sujetos pasivos indicados en el numeral 3) del artículo 4°.

103 Véase nota al artículo 52, inciso final.

104 Artículo 21.- Causales de cesación. Serán causales de cesación de las o los consejeros en sus cargos, las siguientes:
e) Incumplimiento grave de sus funciones y deberes.
Se considerarán incumplimientos graves, entre otros, los siguientes:
1) No justificar la inasistencia a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones del Comité Directivo, ordinarias o extraordinarias, durante un mismo año calendario
2) Infringir los deberes de abstención o de reserva consagrados en los artículos 20 y 59, respectivamente.
3) Actuar negligentemente en el ejercicio de sus funciones, entorpeciendo el adecuado cumplimiento de los objetivos del Consejo.

"Artículo 20 bis.- Los miembros del Comité Directivo del Consejo de Ahorro Colectivo deberán efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio, en los términos de los artículos 5¹⁰⁵, 6¹⁰⁶, 7¹⁰⁷ y 8¹⁰⁸.

105 Artículo 5°.- La declaración de intereses y patrimonio deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes de la fecha de asunción del cargo. Además, el declarante deberá actualizarla anualmente, durante el mes de marzo, y dentro de los treinta días posteriores a concluir sus funciones.

106 Artículo 6°.- La declaración de intereses y patrimonio, y sus actualizaciones, deberán efectuarse a través de un formulario electrónico y conforme a lo previsto en la ley N°19.799. En caso de no estar implementado o habilitado el respectivo formulario electrónico, la declaración podrá efectuarse en papel, debidamente autenticada al momento de su recepción por el ministro de fe del órgano u organismo al que pertenezca el declarante o, en su defecto, ante notario.

La declaración será pública, sin perjuicio de los datos sensibles y datos personales que sirvan para la individualización del declarante y su domicilio, y revestirá, para todos los efectos legales, la calidad de declaración jurada. Respecto de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4°, y de los sujetos a que se refiere el Capítulo 3° de este Título, esta declaración y sus actualizaciones se publicarán en el sitio electrónico de la institución respectiva, debiendo mantenerse en dicho sitio mientras el declarante se desempeñe en el cargo y hasta seis meses después del cese de sus funciones. Quienes posteriormente traten los datos contenidos en la declaración, no podrán usarlos con finalidades diferentes a aquellas que permitan el control de la probidad en la función pública. La infracción de esta prohibición será sancionada conforme al Título V de la ley N°19.628.

Las declaraciones se contendrán en las bases de datos interoperables que determinen las entidades responsables de la fiscalización para cada caso. Un reglamento expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia determinará el formulario único en el cual deberán efectuarse las declaraciones y la forma en que estarán disponibles para quienes corresponda supervisar el cumplimiento de esta obligación, sea la Contraloría General de la República para su debido registro y fiscalización respecto de los sujetos señalados en el artículo 4°, o la entidad que corresponda tratándose de los sujetos obligados que indica el Capítulo 3° de este Título.

107 Artículo 7°.- La declaración de intereses y patrimonio deberá contener la fecha y lugar en que se presenta y la singularización de todas las actividades y bienes del declarante que se señalan a continuación:

- a) Actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe el declarante, incluidas las realizadas en los doce meses anteriores a la fecha de asunción del cargo.
- b) Bienes inmuebles situados en el país o en el extranjero. Respecto de los ubicados en Chile, deberá indicarse su avalúo fiscal y fecha de adquisición, las prohibiciones, hipotecas, embargos, litigios, usufructos, fideicomisos y demás gravámenes que les afecten, con mención de las respectivas inscripciones, sea que tengan estos bienes en propiedad, copropiedad, comunidad, propiedad fiduciaria o cualquier otra forma de propiedad. Respecto de los inmuebles ubicados en el extranjero, deberá indicarse el valor corriente en plaza de los mismos, en los términos del artículo 46 bis de la ley N°16.271. Asimismo, se deberá incluir aquellos inmuebles sobre los cuales ejerza otros derechos reales distintos de la propiedad.
- c) Derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones de que sea titular el declarante.
- d) Bienes muebles registrables, tales como vehículos motorizados, indicando su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y su avalúo fiscal, y las naves y aeronaves señalando su tasación, matrícula y los datos para su debida singularización.
- e) Toda clase de derechos o acciones, de cualquier naturaleza, que tenga el declarante en comunidades, sociedades o empresas constituidas en Chile, con indicación del nombre o razón social, giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos, porcentaje que corresponde al declarante en dichas entidades, la cantidad de acciones, fecha de adquisición de las acciones o derechos y el valor corriente en plaza o, a falta de éste, el valor de libros de la participación que le corresponde. También deberá incluirse los derechos o acciones que la autoridad o funcionario declarante tenga en sociedades u otras entidades constituidas en el extranjero, indicando los datos que permitan su adecuada singularización y valorización.
Cuando los derechos o acciones de que sea titular el declarante le permitan ser controlador de una sociedad, en los términos del artículo 97 de la ley N°18.045, o influir decisivamente en la administración o en la gestión de ella en los términos del artículo 99 de la misma ley, también deberán incluirse los bienes inmuebles, derechos, concesiones y valores a que se refieren las letras b), c) y f) de este artículo, y los derechos y acciones de que trata esta letra que pertenezcan a dichas comunidades, sociedades o empresas, en los términos referidos precedentemente.
- f) Valores, distintos de aquellos señalados en la letra anterior, a que se refiere el inciso primero del artículo 3° de la ley N°18.045, que tenga la autoridad o el funcionario declarante, sea que se transen o no en bolsa, tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo aquellos emitidos o garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por el Banco Central de Chile, con indicación de su fecha de adquisición y de su valor corriente en plaza.
- g) Contratos de mandato especial de administración de cartera de valores con indicación de los siguientes antecedentes: individualización de la persona jurídica mandataria; fecha de celebración de el o los contratos; notaría pública o consulado de Chile donde fueron otorgados, según corresponda, indicando el valor comercial global de la cartera de activos entregada en administración a la fecha de la declaración, conforme a lo informado por el mandatario en la última memoria anual presentada.
- h) La enunciación del pasivo, siempre que en su conjunto ascienda a un monto superior a cien unidades tributarias mensuales.

La declaración deberá incluir asimismo el nombre completo del declarante y de su cónyuge o conviviente civil.
Tratándose de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4°, y de los sujetos a que se refiere el Capítulo 3° de este Título, además deberá incluirse el nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el sitio electrónico de la institución respectiva sólo podrá publicarse el nombre de los parientes por consanguinidad en primer grado en la línea recta del declarante. En el caso de los fiscales y de los jueces con competencia en lo penal, los datos respecto de todos los parientes indicados en el inciso precedente no serán publicados, debiendo registrarse esa información en el carácter de secreta.

Adicionalmente, los sujetos obligados a efectuar declaración de intereses y patrimonio podrán declarar voluntariamente toda otra posible fuente de conflicto de intereses, distinta a la que se detalla en este artículo.

Un reglamento expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia contendrá las demás normas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de este Título y regulará la forma en que la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia dispondrán de las declaraciones de patrimonio e intereses de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4°, y de los sujetos a que se refiere el Capítulo 3° de este Título, en portales accesibles a toda la ciudadanía, en formato de datos abiertos y reutilizables. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las declaraciones de los demás sujetos contemplados en el mencionado artículo 4° serán plenamente aplicables las disposiciones contenidas en la ley N°20.285.

108 Artículo 8°.- La declaración de intereses y patrimonio deberá comprender los bienes del cónyuge siempre que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y los

Si el declarante no realiza la declaración dentro del plazo dispuesto para ello o la efectúa de manera incompleta o inexacta, será apercibido para que la realice o rectifique dentro del plazo de diez días hábiles y, en caso de incumplimiento, será sancionado con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, la que será impuesta por el Comité Directivo del Consejo de Ahorro Colectivo. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo. Si el incumplimiento se mantuviere por un período superior a los cuatro meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo.

El procedimiento podrá iniciarse por el Comité Directivo del Consejo de Ahorro Colectivo de oficio o por denuncia fundada de cualquier interesado. La formulación de cargos dará al afectado el derecho a contestarlos en el plazo de diez días hábiles, pudiendo establecerse, en caso de ser necesario, un período probatorio de ocho días hábiles, dentro del cual podrán presentarse todos los medios de prueba, la que se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica. El Comité Directivo deberá adoptar la decisión final dentro de los diez días hábiles siguientes contados desde la última diligencia.

En todo caso, el afectado podrá reclamar de la multa que le imponga el Comité Directivo del Consejo de Ahorro Colectivo, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por escrito, en el plazo de diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la decisión a que se refiere el inciso anterior, señalando los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se someten a la resolución del Tribunal.

La Corte de Apelaciones declarará inadmisile la reclamación que no cumpla con las condiciones señaladas en el inciso precedente. En caso contrario, dará traslado de ésta al Consejo de Ahorro Colectivo por seis días hábiles, notificando esta resolución por oficio.

Evacuado el traslado, o acusada la rebeldía, la Corte dispondrá, si lo estima procedente, la apertura de un término de prueba, el cual no podrá exceder de diez días hábiles, y dictará sentencia, en cuenta o previa vista de la causa, en el término de quince días hábiles, la cual podrá ser apelada para ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles contado desde su notificación. La apelación será conocida en la forma prevista en los incisos anteriores y gozará de preferencia para su vista y fallo.”.

Artículo 70.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo primero de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública:

1. Reemplázase, en el artículo 2 inciso segundo, la expresión “y” por una coma, y agrégase la expresión “y el Consejo de Ahorro Colectivo” entre las palabras “Central” y “se”.
2. Agrégase al inciso primero del artículo 37, entre las palabras “Público” y “ni”, la frase “los consejeros del Consejo de Ahorro Colectivo”.¹⁰⁹.

del conviviente civil del declarante, siempre que hayan pactado régimen de comunidad de bienes.

Si el declarante está casado bajo cualquier otro régimen o si es conviviente civil sujeto a un régimen de separación de bienes, dicha declaración será voluntaria respecto de los bienes de dicho cónyuge o conviviente, y deberá tener el consentimiento de éste. Si la cónyuge del declarante es titular de un patrimonio en los términos de los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil, la declaración será igualmente voluntaria respecto de dichos bienes.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, el declarante deberá incluir en su declaración de intereses las actividades económicas, profesionales o laborales que conozca, de su cónyuge o conviviente civil.

La declaración de intereses y patrimonio también comprenderá los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad del declarante y los de las personas que éste tenga bajo tutela o curatela. La declaración de los bienes del hijo sujeto a patria potestad, que no se encuentren bajo la administración del declarante, será voluntaria.

109 Concordancias.

TÍTULO II

SOBRE EL AUMENTO DE COBERTURA DEL SISTEMA DE PENSIONES

Artículo tercero.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, que establece Nuevo Sistema de Pensiones, de 1980:

1. Modifícase el artículo 16, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 16.- La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible igual al que se determine para las cotizaciones al Seguro de Cesantía de la ley N° 19.728.¹¹⁰”.

b) Elimínanse sus incisos segundo y tercero, pasando sus actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser incisos segundo, tercero y cuarto, respectivamente.

c) Reemplázase en la primera oración de su actual inciso cuarto, que ha pasado a ser segundo, la expresión “el inciso anterior”, por la expresión “este artículo”¹¹¹.

110 Ley 19.728, artículo 6°:

Artículo 6°.- Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considera remuneración la señalada en el artículo 41 del Código del Trabajo. Las cotizaciones a que se refiere el artículo anterior se calcularán sobre aquellas, hasta el tope máximo equivalente a 90 unidades de fomento consideradas al último día del mes anterior al pago. Dicho tope se reajustará anualmente de acuerdo a la variación del Índice de Remuneraciones Reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas o el Índice que lo sustituya, entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del año precedente al que comenzará a aplicarse el reajuste. El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día de cada año.

Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionado sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en Unidades de Fomento y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el inciso primero.

111 El artículo 16 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 16.- La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible igual al que se determine para las cotizaciones al Seguro de Cesantía de la ley N° 19.728. El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día de cada año y será determinado mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones:

Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en unidades de fomento y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.

Si un trabajador percibe simultáneamente remuneraciones de dos o más empleadores o, todas las remuneraciones se sumarán para los efectos señalados en este artículo, debiendo la Superintendencia determinar la forma en que se efectúen y enteren las cotizaciones que señala la ley. En todo caso, aquella parte de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.

Los trabajadores del sector público afiliados al Sistema podrán optar, en forma definitiva mientras permanezcan en el mismo empleo, porque tengan el carácter de imponibles las asignaciones que no tienen dicha calidad, con excepción de aquellas que el Código del Trabajo declara que no constituyen remuneraciones. La mayor imponibilidad se considerará sólo para los efectos de esta ley.

Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se determine en función del procedimiento indicado en este artículo.

2. Agréganse al artículo 17¹¹², los siguientes incisos séptimo al décimo, nuevos:

“Tratándose de trabajadores cuya remuneración y renta mensual supere las 76 unidades de fomento, la parte de la cotización adicional destinada al financiamiento de la Administradora, se calculará hasta dicho límite. El exceso de cotización por sobre las 76 unidades de fomento, será enterado en la cuenta de capitalización individual del respectivo trabajador.

El límite a que se refiere el inciso anterior se reajustará considerando la variación del índice de remuneraciones reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, o la entidad que lo reemplace, entre noviembre del año antecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que comenzará a aplicarse.

El monto así reajustado, comenzará a regir el primer día de cada año y será determinado mediante resolución de la Superintendencia.

Con todo, el referido monto será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el monto mantendrá su valor vigente en unidades de fomento y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del inciso octavo.”.

3. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 62, la expresión “la pensión básica solidaria de vejez” por “tres unidades de fomento”¹¹³.
4. Reemplázase en el inciso primero del artículo 62 bis, la expresión “la pensión básica solidaria de vejez” por “tres unidades de fomento”¹¹⁴.
5. Elimínase en el inciso tercero del artículo 65, el texto que inicia con la expresión “y se corregirá” hasta el punto y aparte¹¹⁵.

112 Artículo 17, vigente:

Artículo 17.- Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imposables.

Además, se deberá efectuar una cotización adicional en la misma cuenta y calculada sobre la misma base que será determinada por cada Administradora y que estará destinada a su financiamiento, incluido el pago de la prima de seguro a que se refiere el artículo 59. Esta cotización adicional deberá ser comunicada de acuerdo a lo señalado en el inciso quinto del artículo 29 y tendrá el carácter de uniforme para todos los afiliados a una Administradora, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo. Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo dicho subsidio.

Durante los períodos de incapacidad laboral, afiliados y empleadores deberán efectuar las cotizaciones a que se refiere este artículo.

Asimismo, durante los referidos períodos de incapacidad laboral, los afiliados deberán efectuar la cotización para salud establecida en los artículos 84 y 92, calculada sobre las remuneraciones o rentas imposables para salud, según corresponda.

Las cotizaciones establecidas en los incisos precedentes deberán efectuarse sobre la base de la última remuneración o renta imponible correspondiente al mes anterior a que se haya iniciado la licencia o en su defecto la estipulada en el respectivo contrato de trabajo, en su caso. Para este efecto, la referida remuneración o renta imponible se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajuste el subsidio respectivo.

Las entidades pagadoras del subsidio deberán efectuar las retenciones correspondientes y enterar dichas cotizaciones en las instituciones que correspondan.

113 El inciso tercero quedaría con la siguiente redacción:

Por la modalidad de renta vitalicia inmediata sólo podrán optar aquellos afiliados que puedan contratar una renta que sea igual o mayor que tres unidades de fomento.

114 El inciso primero quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 62 bis: Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado es aquella modalidad de pensión por la cual el afiliado contrata con una Compañía de Seguros de Vida una Renta Vitalicia Inmediata con una parte del saldo de la cuenta de capitalización individual, acogiéndose con la parte restante a la modalidad de Retiro Programado. En este caso, la pensión corresponderá a la suma de los montos percibidos por cada una de las modalidades. Sólo podrán optar por esta modalidad aquellos afiliados que puedan obtener una renta vitalicia inmediata que sea igual o mayor que tres unidades de fomento.

115 El inciso tercero quedaría con la siguiente redacción:

La anualidad que resulte de aplicar lo dispuesto en el inciso primero se pagará en doce mensualidades ~~y se corregirá por un factor de ajuste, determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias. El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto~~

Artículo cuarto.- Reemplázanse en el inciso primero del artículo 25 ter de la ley N° 19.728, que establece un Seguro de Desempleo, las frases “que hayan optado por dicho Fondo” y “al artículo 25”, por las expresiones “del Seguro” y “a los artículos 15 y 25”, respectivamente¹¹⁶.

TÍTULO III

SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL PILAR SOLIDARIO

Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.255, que establece Reforma Previsional:

1. Modifícase el artículo 2, en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el párrafo segundo de la letra g), entre las expresiones “no se incluirán” y “las cotizaciones voluntarias”, la siguiente oración: «los traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 19.728, los traspasos de la cuenta de ahorro personal, los traspasos de la cuenta de ahorro voluntario»¹¹⁷.

b) Incorpórase una nueva letra k), del siguiente tenor:

“k) Pensión o suma de pensiones, corresponde a las pensiones percibidas por el afiliado, excluyendo de las pensiones de vejez e invalidez aquella parte cuyo financiamiento provenga de traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 19.728, de traspasos de la cuenta de ahorro personal, de traspasos de la cuenta de ahorro voluntario, de cotizaciones voluntarias, de depósitos de ahorro previsional voluntario, de ahorro previsional voluntario colectivo y de depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.”.

de la pensión producto del recálculo del retiro programado:

116 El artículo 25 ter quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 25 ter.- El Fondo de Cesantía Solidario aportará a la cuenta de capitalización individual obligatoria para pensiones de los beneficiarios del Seguro, el monto equivalente al 10% de la prestación por cesantía que les corresponda recibir de acuerdo a los artículos 15 y 25”. El aporte a que se refiere este artículo deberá ser enterado por la Sociedad Administradora del Fondo y no estará afecto al cobro de comisiones por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente.

117 La letra g) quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:

g) Pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez o invalidez de acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 74 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán los traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 19.728, los traspasos de la cuenta de ahorro personal, los traspasos de la cuenta de ahorro voluntario, las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.

2. Incorpórase a continuación del artículo 9, el siguiente artículo 9 bis:

“Artículo 9 bis.- Los pensionados por vejez bajo la modalidad de retiro programado, que tengan una pensión base de un valor igual o superior a la pensión máxima con aporte solidario, tendrán derecho, cuando el monto de la pensión o suma de pensiones que perciban de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, sea inferior a la pensión básica solidaria de vejez, a un complemento que ascenderá a la cantidad que se obtenga de descontar del valor de dicha pensión básica el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al citado decreto ley y siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3 de la presente ley¹¹⁸. En todo caso, cuando el monto del retiro programado sea inferior al valor de la pensión básica solidaria de vejez, dicho retiro se ajustará a este último valor.

Para acceder al beneficio establecido en este artículo, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión Social.”.

3. Modifícase el artículo 10, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero la frase “el artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la pensión básica solidaria de vejez” por “el artículo 9, que perciban una pensión bajo la modalidad de retiro programado”.

b) su inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Cuando la pensión percibida bajo la modalidad de retiro programado pase a ser inferior a la pensión autofinanciada de referencia, el monto del retiro programado se ajustará al valor de ésta.

Asimismo, cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión final.”¹¹⁹.

4. Modifícase el artículo 11, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“**Artículo 11.-** Para los beneficiarios señalados en el artículo 9, que perciban una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia, el monto del aporte previsional solidario de vejez ascenderá al valor del complemento solidario.”.

118 Artículo 3°.- Serán beneficiarias de la pensión básica solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:

a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 32 de esta ley.
c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios de este Título.

119 El artículo 10 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 10.- Para los beneficiarios señalados en el artículo 9, que perciban una pensión bajo la modalidad de retiro programado, el monto del aporte previsional solidario de vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980.

Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión final.

Cuando la pensión percibida bajo la modalidad de retiro programado pase a ser inferior a la pensión autofinanciada de referencia, el monto del retiro programado se ajustará al valor de ésta. Asimismo, cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión final.

- b) Suprímense sus incisos segundo y tercero¹²⁰.
5. Intercálase en el inciso segundo del artículo 14, entre las expresiones “no se incluirán” y “las cotizaciones voluntarias”, la siguiente oración: «los traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 19.728, los traspasos de la cuenta de ahorro personal, los traspasos de la cuenta de ahorro voluntario»,¹²¹.
 6. Intercálase en el inciso cuarto del artículo 15, entre las expresiones “no se incluirán” y “las cotizaciones voluntarias”, la siguiente oración: «los traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 19.728, los traspasos de la cuenta de ahorro personal, los traspasos de cuenta de ahorro voluntario»,¹²².

120 El artículo 11 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 11.- Para los beneficiarios señalados en el artículo 9, que perciban una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia, el monto del aporte previsional solidario de vejez ascenderá al valor del complemento solidario.

Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de dicha pensión solidaria.

Las reglas de cálculo a que se refieren el artículo 10 y los incisos precedentes se establecerán en el momento de acceder al beneficio y no serán modificadas ante alguna variación en el monto de la pensión base o de la pensión básica solidaria de vejez, sin perjuicio de que dichas variaciones modificarán el monto resultante del aporte previsional solidario de vejez de acuerdo a la regla de cálculo correspondiente.

121 Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g) del artículo 2° de la presente ley, respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será calculada como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 74 de la presente ley más el interés real que haya devengado a la fecha en que cumpla sesenta años de edad. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión y se le sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en cuotas. En dicho saldo, no se incluirán los traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 19.728, los traspasos de la cuenta de ahorro personal, los traspasos de la cuenta de ahorro voluntario, las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de 1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65 años en el de los hombres, la pensión autofinanciada de referencia se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.

122 Adecuación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Párrafo 1°

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL TÍTULO I, SOBRE EL SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO

Artículo primero.- A partir del primer día del duodécimo mes siguiente desde la publicación de la presente ley y durante un periodo de doce meses, la cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo será de 1% de la remuneración o renta imponible de la o el afiliado. En adelante, la cotización se incrementará, cada doce meses, en 0,8% de la remuneración o renta imponible hasta completar un 5% de aquélla.

Durante el periodo transitorio a que se refiere el inciso precedente, una vez financiados el aporte solidario intergeneracional y el bono compensatorio para las mujeres, la diferencia que resulte entre los recursos correspondientes a la cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo y el financiamiento de los beneficios antes señalados se destinará, en igual proporción, al aporte solidario intrageneracional y a las cuentas de ahorro personal de las y los afiliados a dicho sistema, en la periodicidad que para cada uno de esos beneficios establecen las normas del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980. Con todo, cuando la cotización sea superior al dos por ciento de la remuneración o renta imponible de la o el afiliado, el exceso sobre dicho porcentaje se destinará íntegramente a las cuentas de ahorro personal y el procedimiento antes descrito se aplicará exclusivamente respecto a los recursos correspondientes a una cotización equivalente al dos por ciento.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las cotizaciones enteradas durante los dos primeros meses del periodo transitorio se destinarán íntegramente al Fondo de Ahorro Colectivo para el financiamiento del aporte solidario intergeneracional y el bono compensatorio para las mujeres.

Artículo segundo.- Las modificaciones que los números 3 y 4 del artículo primero de la presente ley introducen a los artículos 92 F y 92 G del decreto ley N° 3.500, de 1980, respectivamente, regirán a partir del primer día del duodécimo mes siguiente a la publicación de la presente ley.

Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de las modificaciones establecidas en el Título I, sobre el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo, para los órganos y servicios públicos referidos en la ley de presupuestos del sector público, durante su primer año de vigencia, se financiará con cargo a los recursos que se consideran en dicha ley. No obstante, lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a los recursos de la partida Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

Artículo cuarto. – El o los reglamentos a que alude el Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán estar dictados al primer día del quinto mes siguiente a la publicación de la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

SOBRE EL APOORTE SOLIDARIO INTERGENERACIONAL

Artículo quinto.- Las disposiciones del Párrafo 4° del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en vigencia a partir del primer día del décimo quinto mes siguiente a la publicación de la presente ley.

Artículo sexto.- Tratándose de afiliadas o afiliados que a la fecha de vigencia establecida en el artículo anterior, se encontraren pensionados en virtud de lo dispuesto en el artículo 68, la pensión autofinanciada de referencia que se utilice para el cálculo del Aporte Solidario Intergeneracional, corresponderá a aquella calculada a la fecha de pensión para efectos del Sistema de Pensiones Solidarias.

Artículo séptimo.- El primer reajuste que corresponda por aplicación de lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 193 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se concederá a los doce meses siguientes a la fecha de vigencia establecida en el artículo quinto transitorio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

SOBRE EL BONO COMPENSATORIO PARA LAS MUJERES

Artículo octavo.- Tendrán derecho al bono compensatorio para las mujeres, en los términos contemplados en el Párrafo 5° del Título XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, las mujeres que se pensionen por vejez o invalidez definitiva no cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, a contar del primer día del décimo quinto mes siguiente a la publicación de la presente ley.

Artículo noveno.- El primer reajuste que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 197 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se concederá a los doce meses siguientes a la fecha de vigencia establecida en el artículo precedente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

SOBRE EL CONSEJO DE AHORRO COLECTIVO

Artículo décimo.- El Comité Directivo a que se refiere el artículo 10 del artículo segundo de la presente ley deberá ser nombrado a más tardar al primer día del quinto mes siguiente al de su publicación.

Para el primer nombramiento de las o los consejeros, de conformidad a la forma prevista en el artículo 11 del artículo segundo de la presente ley, la Presidenta o Presidente de la República propondrá al Senado dentro del primer mes siguiente a su publicación:

- a) Una cuaterna cuyos candidatos, de ser elegidos, tendrán una duración en su cargo de seis años a contar de la fecha de su nombramiento.
- b) Una terna cuyos candidatos, de ser elegidos, tendrán una duración en su cargo de tres años a contar de la fecha de su nombramiento.

Las duraciones antes referidas deberán quedar consignadas en el decreto de nombramiento.

El Senado se pronunciará respecto de las propuestas a que se refiere el inciso segundo de manera separada, pero respecto a cada terna o cuaterna, según corresponda, como una unidad.

Las o los consejeros nombrados, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo, podrán ser designados hasta por un nuevo período adicional de seis años.

A partir de la fecha del decreto de nombramiento de las o los consejeros, de conformidad con lo dispuesto en los incisos anteriores, iniciará su funcionamiento el Consejo de Ahorro Colectivo y entrarán en vigencia las demás disposiciones del artículo segundo de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo undécimo.- El Comité Directivo del Consejo de Ahorro Colectivo deberá dictar su normativa interna de funcionamiento en el plazo de sesenta días, contado desde la fecha de inicio de sus funciones.

Artículo duodécimo.- Autorízase a la o el Ministro de Hacienda para que, mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, efectúe un aporte de capital inicial hasta por un monto de 3.756.000 Unidades de Fomento o su equivalente en moneda nacional, en una o más transferencias, a más tardar en treinta y seis meses contados desde la publicación de la presente ley.

La primera transferencia de dicho aporte deberá materializarse a más tardar dentro del primer mes siguiente a la fecha a que se refiere el inciso final del artículo décimo transitorio.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 5 del artículo segundo de la presente ley, el Consejo de Ahorro Colectivo podrá, durante los primeros seis años de funcionamiento, descontar un máximo anual de 0,5% del saldo del o los Fondos de Ahorro Personal.

Artículo décimo tercero.- En tanto no se determinen las dietas para las o los consejeros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del artículo segundo de la presente ley, éstos percibirán las dietas que se establecen a continuación:

- a) Una dieta mensual bruta equivalente a 26 unidades tributarias mensuales, cuyo pago procederá en la medida que la o el consejero haya asistido como mínimo a una sesión de Comité Directivo durante el mes respectivo.

Tratándose de la o el Presidente, la dieta mensual bruta será de 52 unidades tributarias mensuales, la que será incompatible con la señalada en el párrafo anterior.
- b) Las y los consejeros que deban integrar un subcomité, sea que se trate de aquéllos establecidos en el párrafo 6° del Título II del artículo segundo de la presente ley o de cualquier otro que se constituya por acuerdo del Comité Directivo, percibirán una dieta mensual bruta adicional equivalente a 8 unidades tributarias mensuales por su participación en cada uno de éstos.

Para que proceda el pago de la dieta indicada en el párrafo anterior se requerirá, como mínimo, la asistencia de la o el consejero a una reunión de subcomité durante el mes respectivo. La dieta antedicha no se incrementará por la asistencia a más de una sesión del subcomité en el mes.

Artículo décimo cuarto.- Dentro del primer mes de publicada la presente ley, la o el Ministro de Hacienda encomendará a una o un funcionario de dicha cartera las funciones de la pre instalación del Consejo de Ahorro Colectivo. Para el cumplimiento de dicho cometido podrá contar con el soporte técnico y administrativo del Ministerio de Hacienda.

La o el funcionario a que se refiere el inciso anterior deberá las siguientes tareas:

1. Comparecer ante el Servicio de Impuestos Internos para solicitar la inscripción del Consejo de Ahorro Colectivo en el Rol Único Tributario y realizar los trámites de iniciación de actividades de dicho Consejo.
2. Abrir las cuentas corrientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del artículo segundo de la presente ley.
3. Fijar el domicilio del Consejo de Ahorro Colectivo para todos los efectos de la pre instalación.
4. Elaborar borradores de los contratos pertinentes con bancos, empresas de depósitos de valores, empresas recaudadoras, proveedores de servicios computacionales, o con cualquier otro proveedor de servicios y que sean necesarios para el normal desarrollo de las actividades del Consejo de Ahorro Colectivo.
5. Elaborar alternativas de esquemas organizacionales del Consejo de Ahorro Colectivo que incluyan organigrama, definición de funciones y cargos, estimación del número de personal requerido por área y remuneraciones asociadas a cada uno de los cargos.
6. perfiles de los cargos a que se refiere el inciso segundo del artículo 8 del artículo segundo de la presente ley.

7. Identificar inmuebles disponibles para la instalación de las dependencias del Consejo del Ahorro Colectivo. Con todo, hasta que dichas dependencias se encuentren habilitadas y por un plazo que no podrá exceder de seis meses contado desde la fecha a que se refiere el inciso final del artículo décimo transitorio, el Comité Directivo podrá funcionar en dependencias que el Ministerio de Hacienda le facilite a tal efecto.
8. Proponer cronograma de instalación, identificando los principales hitos asociados a dicho proceso.
9. Todas aquellas otras funciones que la o el Ministro de Hacienda le encomiende para el proceso de pre instalación.

A partir de la fecha a que se refiere el inciso primero y sólo para efectos de las tareas indicadas en los numerales 1, 2 y 3 del inciso segundo, se presumirá la existencia legal del Consejo de Ahorro Colectivo.

La o el funcionario a que se refiere el presente artículo rendirá cuenta de su gestión y pondrá a disposición de las o los consejeros una vez que éstos asuman, los antecedentes precitados.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del presente artículo se financiará con cargo a los recursos de la partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

Párrafo 2°

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL TÍTULO II SOBRE AUMENTO DE COBERTURA AL SISTEMA DE PENSIONES

Artículo décimo quinto.- Durante los primeros años contados desde la publicación de la presente ley, el límite máximo imponible previsto en el artículo 16 del decreto ley N° 3.500, de 1980, modificado por el número 1 del artículo tercero de la presente ley, se regirá por lo siguiente:

- a. A partir del 1 de enero del año siguiente al de publicación de la presente ley, el límite máximo imponible corresponderá a 88 Unidades de Fomento.
- b. Transcurridos 12 meses desde la vigencia del límite máximo imponible a que se refiere la letra anterior, éste se incrementará a 98 Unidades de Fomento.
- c. Transcurridos 12 meses desde la vigencia del límite máximo imponible a que se refiere la letra anterior, éste se incrementará a 108 Unidades de Fomento.
- d. Transcurridos 12 meses desde la vigencia del límite máximo imponible a que se refiere la letra anterior, éste se incrementará a 118 Unidades de Fomento.
- e. Finalmente, transcurridos 12 meses desde la vigencia del límite máximo imponible a que se refiere la letra anterior, éste se igualará al que se encuentre vigente para el Seguro de Cesantía.

La modificación que el número 2 del artículo tercero de la presente ley introduce al artículo 17 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación.

Artículo décimo sexto.- Las modificaciones que los números 3 y 4 del artículo tercero de la presente ley introducen a los artículos 62 y 62 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, respectivamente, entrarán en vigencia el primer día del duodécimo mes siguiente al de su publicación.

Artículo décimo séptimo.- La modificación que el número 5 del artículo tercero de la presente ley introduce al artículo 65 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación.

Artículo décimo octavo.- A partir del día 1 de enero del año siguiente al de publicación de la presente ley, las y los trabajadores a que se refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán efectuar las cotizaciones del título III del mencionado decreto ley, por el cien por ciento de la renta imponible establecida en el inciso primero del artículo 90 del citado decreto ley, salvo que en forma expresa manifiesten su voluntad de cotizar por los montos a que se refiere el inciso siguiente. La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el ejercicio de este derecho.

Las y los trabajadores que ejerzan el derecho a que se refiere el inciso anterior, deberán efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N° 3.500, de 1980, por la renta imponible establecida en el inciso primero del artículo 90 del citado decreto ley, multiplicada por 20%, 35%, 50%, 65%, 80% y 100%, para el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año de entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero de este artículo, respectivamente.

A partir del primer día del duodécimo mes siguiente contado desde la publicación de la presente ley, las y los trabajadores a que se refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán efectuar la cotización del Título XVIII del mencionado decreto ley, por el cien por ciento de la renta imponible establecida en el inciso primero del artículo 90 del citado decreto ley. La cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo será de un 1% de la renta imponible de la o el afiliado independiente durante un periodo de doce meses. En adelante, la tasa de cotización se incrementará en 0,8% de su renta imponible, cada doce meses, hasta completar un 5% de aquélla. El reglamento del decreto ley N° 3.500, de 1980, establecerá la forma de cálculo de la tasa anual, en el caso que durante un año calendario las rentas imponibles de la o el trabajador independiente estén afectas a dos tasas distintas de cotización para el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo.

Con todo, no regirán las obligaciones de efectuar las cotizaciones de los Títulos III y XVIII del decreto ley N° 3.500, de 1980, para aquellos trabajadores o trabajadoras independientes que tengan 55 años o más, en el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las mujeres, a la fecha de publicación de la presente ley.

La obligación de cotizar el siete por ciento para financiar prestaciones de salud y la obligación de cotizar para el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la ley N° 16.744, regirá para las y los trabajadores independientes a contar del 1 de enero del séptimo año posterior a la publicación de la presente ley.

Artículo décimo noveno.- La modificación contemplada en el artículo cuarto de la presente ley, entrará en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación.

Párrafo 3°

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL TÍTULO III SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL PILAR SOLIDARIO

Artículo vigésimo.- Las modificaciones introducidas a la ley N° 20.255 por el Título III de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primer día del duodécimo mes siguiente al de su publicación.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las modificaciones previstas en los números 3 y 4 del artículo quinto de esta ley sólo serán aplicables a las y los afiliados que soliciten el aporte previsional solidario de vejez a contar de la fecha señalada en dicho inciso, siempre que anteriormente no hayan sido beneficiarias o beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias.

Las personas que a la fecha señalada en el inciso precedente sean beneficiarias de aporte previsional solidario de vejez, quedarán sujetas a la regla de cálculo que les rija a esa fecha, la que no será modificada ante alguna variación en el monto de la pensión base o de la pensión básica solidaria de vejez, sin perjuicio de que dichas variaciones modificarán el monto resultante del aporte previsional solidario de vejez de acuerdo a la regla de cálculo correspondiente.

ANEXO I

Artículo 65 del decreto ley 3.500, de 1980:

Artículo 65.- Retiro Programado es aquella modalidad de pensión que obtiene el afiliado con cargo al saldo que mantiene en su cuenta de capitalización individual, como resultado de retirar anualmente la cantidad expresada en Unidades de Fomento que resulte de dividir cada año el saldo efectivo de su cuenta de capitalización individual por el capital necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado y, fallecido éste, a sus beneficiarios, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el artículo 58.

El capital necesario se calculará utilizando las bases técnicas y la tasa de interés a que se refiere el inciso cuarto del artículo 64, en la forma que señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, conjuntamente con la Superintendencia de Valores y Seguros, según lo establezca el reglamento. En todo caso, para el cálculo del capital necesario se utilizarán las tablas de mortalidad y expectativas de vida que para estos efectos establecerá la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones conjuntamente con la Superintendencia de Valores y Seguros. Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y renta vitalicia, según corresponda.

La anualidad que resulte de aplicar lo dispuesto en el inciso primero se pagará en doce mensualidades y se corregirá por un factor de ajuste, determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en norma de carácter general, siempre que la pensión autofinanciada de referencia del afiliado sea superior a la pensión máxima con aporte solidario o que el afiliado no cumpla con los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias. El citado factor deberá ser tal que permita suavizar los cambios en el monto de la pensión producto del recálculo del retiro programado.

En todo caso, el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior, como también podrá optar porque el retiro mensual que efectúe sea ajustado al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias.

El afiliado que haga uso de la opción de retiro programado, para quien el saldo de su cuenta de capitalización individual, a la fecha en que se determine el retiro a que se refiere el inciso primero, fuere superior al saldo mínimo requerido, podrá disponer libremente del excedente.

Se entenderá por saldo mínimo requerido el capital necesario para pagar, al afiliado y a sus beneficiarios, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el artículo 58, una pensión equivalente al setenta por ciento del promedio de remuneraciones a que se refiere el artículo 63 o al setenta por ciento del ingreso base, cuando se trate de afiliados declarados inválidos.

No obstante, el saldo mínimo requerido deberá ser mayor o igual que el capital necesario para pagar al afiliado el equivalente al cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario y la proporción de ésta que corresponda a cada beneficiario, vigente al momento del cálculo.

Con todo, el saldo mínimo no podrá ser inferior al requerido para financiar una pensión que cumpla los requisitos antes definidos, en la modalidad de renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura, la que se determinará sobre la base del costo por unidad de pensión promedio de las ofertas seleccionables por el afiliado, recibidas a través del sistema de consultas.

El capital necesario a que se refieren los dos incisos anteriores se calculará de la forma que señala el inciso segundo de este artículo.

ANEXO II

Artículo 61 bis del decreto ley 3.500 de 1980:

Artículo 61 bis.- Para optar por una modalidad de pensión, los afiliados o sus beneficiarios, en su caso, deberán previamente recibir la información que entregue el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, que se define en este artículo. Igual procedimiento deberán seguir tanto los afiliados que cambian su modalidad de pensión como los beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

Los afiliados o beneficiarios de pensión de sobrevivencia deberán seleccionar personalmente su modalidad de pensión. No obstante, podrán ejercer la opción a través de un representante especialmente facultado para ello mediante un poder notarial especial, que deberá señalar la opción elegida por el afiliado.

Si el afiliado opta por la modalidad de renta vitalicia podrá aceptar, alternatively, cualquier oferta efectuada en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión; una efectuada fuera de él por alguna Compañía de Seguros que hubiera participado en el Sistema, siempre que el monto de la pensión sea superior al ofertado en dicho Sistema por la misma Compañía, de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso decimotercero de este artículo; o solicitar la realización de un remate a través del referido Sistema de Consultas.

Si el afiliado no optare por alguna de las alternativas antes señaladas, podrá postergar su decisión de pensionarse, a menos que la consulta al Sistema definido en este artículo, se hubiese ocasionado por una solicitud de pensión de invalidez cuyo dictamen se encuentre ejecutoriado.

Para que el remate a que se refiere este artículo tenga lugar, los afiliados deberán seleccionar el tipo de renta vitalicia, indicando al menos tres Compañías de Seguros de Vida que podrán participar en él. En todo caso sólo podrán participar en el remate aquellas Compañías que haya indicado el afiliado. A su vez, los afiliados deberán fijar la postura mínima, que no podrá ser inferior al monto de la mayor de las ofertas efectuadas en el Sistema de Consultas por dichas Compañías.

Finalizado el proceso de remate, se adjudicará al mayor postor. En caso de igualdad de los montos de las ofertas, se adjudicará el remate a aquella oferta que seleccione el afiliado. En este último caso, si el afiliado no eligiera, la adjudicación se efectuará a la oferta de la Compañía de Seguros que presente la mejor clasificación de riesgo; a igual clasificación de riesgo, se estará a lo señalado en la norma de carácter general a que se refiere el inciso decimotercero de este artículo. Para efectos de lo señalado en este inciso, las Administradoras deberán suscribir a nombre de los afiliados o beneficiarios, los contratos de rentas vitalicias a que haya lugar, en caso de que éstos no los suscriban por sí mismos.

Con todo, el remate sólo tendrá el carácter de vinculante, cuando al menos dos de las Compañías

seleccionadas por el afiliado presenten ofertas de montos de pensión. En caso que sólo una Compañía de Seguros de Vida presente oferta de montos de pensión, los afiliados podrán optar por aceptarla; solicitar un nuevo remate; solicitar una oferta externa de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero de este artículo; volver a realizar una consulta en el Sistema o desistir de pensionarse.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Compañías de Seguros de Vida deberán contar con sistemas propios de información electrónico interconectados entre todas ellas, denominado Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, a través del cual deberán:

- a) Recibir y transmitirse las solicitudes de montos de pensión requeridas por los afiliados, indicando, en su caso, los tipos de renta vitalicia previamente definidos por aquéllos;
- b) Recibir y transmitirse las ofertas de rentas vitalicias de las Compañías de Seguros de Vida y los montos de retiro programado calculados por las Administradoras.

Las ofertas de rentas vitalicias deberán referirse, a lo menos, a los tipos de renta vitalicia indicados por el afiliado. En caso que éste no hubiese manifestado su preferencia, las ofertas deberán referirse, al menos, a una renta vitalicia inmediata simple, sin perjuicio de una solicitud posterior en que el afiliado indique otro u otros tipos de renta vitalicia.

Las ofertas de rentas vitalicias deberán presentarse en unidades de fomento, con excepción de aquellas con componente variable, el cual podrá expresarse en otras unidades o monedas que para estos efectos autorice la Superintendencia de Valores y Seguros. La oferta que se efectúe en el Sistema se emitirá explicitando la pensión e indicando el porcentaje de comisión o retribución de referencia, que se utilizará sólo para los efectos de la cotización a través del Sistema. En el evento que la comisión o retribución que pague la Compañía sea inferior a la de referencia antes indicada o bien no exista comisión o retribución, la pensión será incrementada en la forma que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso decimotercero de este artículo. Con todo, la pensión que efectivamente se pague no podrá ser inferior a la pensión ofertada en el Sistema, por la misma Compañía, en base a la comisión o retribución de referencia. Esta comisión o retribución de referencia será fijada por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, y regirá por veinticuatro meses a contar del día primero del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Expirado dicho plazo y mientras no lo establezca un nuevo decreto supremo, el guarismo que se encuentre en aplicación mantendrá su vigencia.

Por su parte, bajo la modalidad de retiro programado y renta temporal se deberán informar al afiliado los montos de pensión, en unidades de fomento, y sus respectivas comisiones. En el caso del retiro programado, deberá informarse el monto de pensión y comisión mensual para el primer año, una estimación del monto de la pensión mensual, una estimación del monto de comisión mensual, para cada uno de los años siguientes, por el período equivalente a la esperanza de vida del afiliado más tres años, y el monto promedio de dichas pensiones y comisiones. La mencionada estimación se efectuará utilizando las tablas de mortalidad y tasa de interés vigentes para el cálculo del retiro programado;

y

- c) Informar al afiliado que realiza la consulta, los montos mensuales de pensión ofrecidos, de acuerdo a lo señalado en la letra b) anterior.

Podrán también participar del Sistema a que alude este artículo, en las mismas condiciones requeridas a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a las Compañías de Seguros de Vida, las sociedades filiales bancarias a que se refiere la letra a) del artículo 70, del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que efectúen asesorías previsionales y los asesores previsionales, previamente autorizados por las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Compañías de Seguros de Vida y los asesores previsionales que participen en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, deberán garantizar la prestación ininterrumpida e integrada del servicio que presta dicho Sistema, de forma que permita a cada uno de ellos recibir y transmitir las consultas y ofertas señaladas en este artículo. Para la incorporación de los partícipes al Sistema, sólo se podrá exigir una retribución eficiente, no discriminatoria y de acuerdo a la estructura de costos del servicio.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Compañías de Seguros de Vida y los asesores previsionales que participen en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, serán responsables de la transmisión íntegra de la información de dicho Sistema. Asimismo, deberán resguardar la privacidad de la información que manejen de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, y quedarán sujetas a las responsabilidades que en dicha ley se establecen.

El que obtenga beneficio patrimonial ilícito mediante fraude al afiliado o a sus beneficiarios o el que haga uso no autorizado de los datos de éstos, que en virtud de este artículo deban proporcionarse al Sistema o de aquellos contenidos en el listado a que se refiere el artículo 72 bis, será sancionado con las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal, sin perjuicio de las demás sanciones legales o administrativas que correspondan.

Una norma de carácter general que dictarán conjuntamente las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Valores y Seguros, regulará las materias relacionadas con el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión. Dicha norma establecerá, a lo menos, la información que deberá transmitirse, los plazos a que deberá sujetarse aquella, los estándares que los partícipes deberán cumplir en la interconexión entre ellos, incluidos los niveles de seguridad concordantes con los principios de transferencia electrónica de datos y la información que deberá proporcionarse al afiliado.

Respecto de los fondos efectivamente traspasados desde la cuenta de capitalización individual del afiliado, con exclusión de aquellos que eran susceptibles de ser retirados como excedente de libre disposición, las Compañías de Seguros de Vida sólo podrán pagar, directa o indirectamente, a los intermediarios o agentes de ventas que intervengan en la comercialización de rentas vitalicias, una comisión o retribución que no podrá ser superior a aquella tasa máxima fijada como un porcentaje de dichos fondos. Dicho guarismo tendrá una duración de veinticuatro meses a partir de la vigencia de esta ley. Expirado dicho plazo, este guarismo podrá ser fijado nuevamente mediante decreto supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, previo requerimiento contenido en resolución fundada de las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Valores y Seguros. Dicha resolución considerará antecedentes técnicos relevantes solicitados, entre otras, a las entidades fiscalizadas. En todo caso, con al menos quince días de anterioridad a la emisión de la referida resolución, el nuevo guarismo propuesto y sus fundamentos serán de conocimiento público. Cada vez que se efectúe una modificación a la mencionada comisión, el nuevo guarismo tendrá una vigencia de veinticuatro meses.

Las Compañías de Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios y agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la comercialización de éstas, ninguna otra remuneración variable, honorarios, bonos, premios o pagos por concepto de la intermediación o venta de rentas vitalicias, sean ellos en dinero o especies que excedan el monto de la comisión por intermediación o retribución por venta a que se refiere el inciso anterior, como tampoco financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido. Se exceptúan de esta disposición las remuneraciones fijas y permanentes y otros beneficios laborales de carácter general, permanentes, uniformes y universales, que emanen de un contrato de trabajo como dependiente con la respectiva Compañía.

ANEXO III

Artículo 19 del decreto ley 3.500, de 1980:

Artículo 19°.- Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX o la entidad pagadora de subsidios, según corresponda, en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y oportunidad que establece el artículo 92 F.

Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo. Ambas cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo.

Cuando un empleador realice la declaración y el pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.

Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX, en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.

El empleador o la entidad pagadora de subsidios que no pague oportunamente, y cuando le correspondiere, según el caso, las cotizaciones de los trabajadores o subsidiados, deberá declararlas en la Administradora correspondiente, dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo.

La declaración deberá contener, a lo menos, el nombre, rol único tributario y domicilio de la persona natural o jurídica que efectúa la declaración, con indicación del representante legal de ella cuando proceda, nombre y rol único tributario de los trabajadores o subsidiados y el monto de las respectivas remuneraciones imponibles. En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Para estos efectos, si la Administradora no tuviere constancia del término de la relación laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio de las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo noveno de este artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.

Si el empleador o la entidad pagadora de subsidios no efectúa oportunamente la declaración a que se refiere el inciso anterior, o si ésta es incompleta o errónea, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 0,75 unidades de fomento por cada trabajador o subsidiado cuyas cotizaciones no se declaren o cuyas declaraciones sean incompletas o erróneas. Si la

declaración fuere incompleta o errónea y no existen antecedentes que permitan presumir que es maliciosa, quedará exento de esa multa el empleador o la entidad pagadora de subsidios que pague las cotizaciones dentro del mes calendario siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones respectivas. Tratándose de empleadores de trabajadores de casa particular, la multa será de 0,2 unidades de fomento para el caso que las cotizaciones se paguen el mes subsiguiente a aquél en que se retuvieron de las remuneraciones de estos trabajadores, y de 0,5 unidades de fomento si se pagan después de esta fecha, aun cuando no hubieren sido declaradas.

Corresponderá a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, estando investidos sus Inspectores de la facultad de aplicar las multas a que se refiere el inciso precedente, las que serán reclamables de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 474 del Código del Trabajo.

Si la declaración fuere incompleta o falsa y existiere un hecho que permita presumir que es maliciosa, el Director del Trabajo, quien sólo podrá delegar estas facultades en los Directores Regionales, podrá efectuar la denuncia ante el juez del crimen correspondiente.

Las cotizaciones que no se paguen oportunamente por el empleador o la entidad pagadora de subsidios, se reajustarán entre el último día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que efectivamente se realice. Para estos efectos, se aumentarán considerando la variación diaria del Índice de Precios al Consumidor mensual del período comprendido entre el mes que antecede al mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquel en que efectivamente se realice.

Para cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 18.010, aumentado en un cincuenta por ciento.

Si en un mes determinado el reajuste e interés penal aumentado en la forma señalada en el inciso anterior, resultare de un monto total inferior al interés para operaciones no reajustables que fije la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o a la rentabilidad nominal de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos de Pensiones, todas ellas aumentadas en un cincuenta por ciento, se aplicará la mayor de estas dos tasas, caso en el cual no corresponderá aplicación de reajuste. La rentabilidad nominal de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos, se determinará calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de todos ellos, de acuerdo a la proporción que represente el valor total de las cuotas de cada uno, en relación con el valor de las cuotas de todos los Fondos, al último día del mes anterior. La rentabilidad mencionada corresponderá a la del mes anteprecedente a aquél en que se devenguen los intereses, y será considerada una tasa para los efectos de determinar los intereses que procedan.

En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente al día primero del mes inmediatamente anterior a aquél en que se devengue. El interés que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones estarán obligadas a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, aun cuando el afiliado se hubiere cambiado de ella. La Administradora, a la cual el afiliado hubiere traspasado sus fondos podrá intervenir en el juicio en calidad de coadyuvante. Con todo, las Administradoras no podrán perseguir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.322, el cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas por los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, por las rentas a que se refiere el inciso primero del artículo 90.

En los juicios de cobranza de cotizaciones previsionales se aplicarán las normas sobre acumulación de autos contenidas en el Título X del Libro I del Código de Procedimiento Civil y se decretará exclusivamente a petición de cualquiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones involucradas.

Procederá la acumulación de autos cuando se trate del cobro de cotizaciones previsionales adeudadas a un trabajador por un mismo empleador, aun cuando las acciones judiciales se inicien por distintas Administradoras, correspondiendo acumular el o los juicios más nuevos al más antiguo.

Del mismo modo, procederá la acumulación de causas respecto de un empleador moroso que tuviere trabajadores bajo su dependencia afiliados a distintas Administradoras, correspondiendo acumular el o los juicios más nuevos al más antiguo.

Los representantes legales de las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán las facultades establecidas en el artículo 2° de la ley N° 17.322, con excepción de la que se señala en el número tercero de dicha disposición.

Serán aplicables todas las normas contenidas en los artículos 1°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 5° bis, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 bis, 11, 12, 14, 18, 19, 20 y 25 bis, de la ley N° 17.322 al cobro de las cotizaciones, reajustes e intereses adeudados a una Administradora de Fondos de Pensiones, incluso las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para los empleadores que no consignen las cotizaciones que hubieren retenido o debido retener, las que podrán hacerse extensivas, en su caso, a las entidades pagadoras de subsidios.

Los reajustes e intereses, incluidos los recargos a que se refieren los incisos undécimo y duodécimo, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Serán de beneficio de la Administradora sólo las costas de cobranza.

La prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios.

Las cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses que las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen la obligación de cobrar, gozarán del privilegio establecido en el N° 5 del artículo 2.472 del Código Civil, conservando este privilegio por sobre los derechos de prenda y otras garantías establecidas en leyes especiales.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322, se aplicarán las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.

Los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.

Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado requisito.

ANEXO IV

Artículos 10 a 22:

TÍTULO IV

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.

Artículo 11.- El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:

- a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.
- b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.
- c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.
- d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.
- e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.
- f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
- g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.

- h) Principio de la oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.
- i) Principio del control, de acuerdo al que el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo.
- j) Principio de la responsabilidad, conforme al cual el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone a los órganos de la Administración del Estado, origina responsabilidades y da lugar a las sanciones que establece esta ley.
- k) Principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley.

Artículo 12.- La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener:

- a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
- b) Identificación clara de la información que se requiere.
- c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
- d) Órgano administrativo al que se dirige.

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Artículo 13.- En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante.

Artículo 14.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12.

Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos.

Artículo 15.- Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar.

Artículo 16.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley.

En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos.

Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.

La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final del artículo 12 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en los artículos 24 y siguientes.

Artículo 17.- La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles.

Se deberá contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante, que contemple las previsiones técnicas correspondientes.

Artículo 18.- Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada.

La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente.

Artículo 19.- La entrega de copia de los actos y documentos se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley.

Artículo 20.- Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.

Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa.

Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley.

En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información.

Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
 - a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
 - b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.
 - c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

Artículo 22.- Los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación.

Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la calificación, el servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una sola vez, podrá prorrogarla por otros cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que pueda irrogar su terminación.

Sin embargo, el carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar:

- a) La integridad territorial de Chile;
- b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites;
- c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y
- d) La política exterior del país de manera grave.

Los documentos en que consten los actos cuya reserva o secreto fue declarada por una ley de quórum calificado, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano o servicio.

Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un órgano o servicio, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano o servicio, durante el plazo de diez años, sin perjuicio de las normas que regulen su entrega al Archivo Nacional.

Los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración del Estado facultados para ello serán reservados hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron efectuados, en resguardo del debido cumplimiento de las funciones de aquéllas.

ANEXO V

Artículo 45 del decreto ley 3.500, de 1980

Artículo 45.- Las inversiones que se efectúen con recursos de un Fondo de Pensiones tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones se considerará contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de las Administradoras.

Los recursos del Fondo de Pensiones, sin perjuicio de los depósitos en cuenta corriente a que se refiere el artículo 46, deberán ser invertidos en:

- a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
- b) Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
- c) Títulos garantizados por instituciones financieras;
- d) Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
- e) Bonos de empresas públicas y privadas;
- f) Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
- g) Acciones de sociedades anónimas abiertas;
- h) Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el decreto ley N° 1.328, de 1976;
- i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
- j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
- k) Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;

- l) Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;
- m) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por instrumento garantizado, aquel en que el garante deba responder, al menos en forma subsidiaria, a la respectiva obligación en los mismos términos que el principal obligado.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de este artículo.

Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los requisitos a que se refiere el inciso siguiente.

Asimismo, podrán adquirir cuotas emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la Comisión Clasificadora de Riesgo.

Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor cumpla con los requisitos mínimos que serán determinados en el Régimen de Inversión. Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de riesgo a las que se refiere la ley N° 18.045.

El Régimen de Inversión regulará la especificación conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los requisitos mínimos, a que se refiere el inciso anterior. La Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de emisores de acciones de la letra g) de este artículo que cumplan con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos emisores que no cumplan los requisitos antes señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar los días diez de los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.

Cuando se trate de instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N° 18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.

Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso, cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045.

Para efectos de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los clasificadores privados.

Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045 presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y Seguros.

Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda.

Las operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. El Régimen de Inversión señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de políticas, procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos suficientes para su uso.

Las instituciones financieras a que se refieren las letras b), c) y d) deberán estar constituidas legalmente en Chile o autorizadas para funcionar en el país; las empresas referidas en las letras e), f), g), e i), como también los fondos de inversión y fondos mutuos referidos en la letra h) deberán estar constituidos legalmente en Chile.

Los instrumentos de las letras b) y c) que sean seriados y los señalados en las letras e), f), g), h), i), j), cuando corresponda y k) deberán estar inscritos, de acuerdo con la ley N° 18.045, en el Registro que para el efecto lleven la Superintendencia de Valores y seguros o la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda.

Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.

En caso que un afiliado se pensione anticipadamente optando por la modalidad de pensión de retiro programado o renta temporal con renta vitalicia diferida, la Administradora no podrá adquirir con los recursos de los Fondos de Pensiones que administra el Bono de Reconocimiento que pertenezca a ese afiliado. Tampoco podrá en tales casos, adquirir Bonos de Reconocimiento que pertenezcan a afiliados a una Administradora que sea persona relacionada a la Administradora adquirente.

Si el afiliado opta por la modalidad de pensión de renta vitalicia o renta temporal con renta vitalicia diferida, la Administradora no podrá adquirir Bonos de Reconocimiento de afiliados que hayan contratado dichas modalidades de pensión con una Compañía de Seguros de vida que sea persona relacionada a la Administradora adquirente.

Las restricciones antes mencionadas se aplicarán para la primera transacción del Bono de Reconocimiento y la calidad de afiliado se medirá al momento de efectuarse la adquisición en el mercado secundario formal.

Las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 3 siguientes, deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:

- 1) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C; 40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.
- 2) El límite máximo para la inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, corresponderá al límite establecido para la suma de los Fondos de Pensiones Tipos A,B,C,D y E, o bien a los límites máximos de inversión establecidos para cada Tipo de Fondo.

El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un 80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.

Por inversión en el extranjero se entenderá la inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley N° 18.815, que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo 13 del decreto ley N° 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del inciso segundo, se considerará en los límites señalados.

- 3) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo primero, no podrá ser inferior al diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada Tipo de Fondo A, B, C y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este número a los instrumentos, operaciones y contratos de cada tipo señalados en la letra k) podrá incluir otros instrumentos, operaciones y contratos de carácter financiero que aquella autorice, aludidos en la letra j) del inciso segundo de este artículo.

El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y 5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán los títulos representativos de índices autorizados en virtud de la letra k) de este artículo, ni las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j), cuando sus carteras de inversiones se encuentren constituidas preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la cartera de los títulos representativos de índices, los fondos de inversión y fondos mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.

El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso segundo. Asimismo, deberá establecer límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras respecto de cada Tipo de Fondo, así como la definición de cobertura cambiaria, debiendo contar con informe previo favorable del Banco Central de Chile. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.

En todo caso, el Régimen de Inversión deberá establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan en los números 1 al 9 siguientes:

- 1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda, clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
- 2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda, que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;
- 3) Acciones a que se refiere la letra g), que no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
- 4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja liquidez;
- 5) Aportes comprometidos mediante los contratos de promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;
- 6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;
- 7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que se refiere la letra k);
- 8) Operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l). En este caso, el Régimen podrá establecer límites en función de parámetros tales como los activos objetos involucrados, el valor de las operaciones, la inversión por contraparte, las primas cuando corresponda y la entrega en garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34. De igual forma, el Régimen podrá incluir las operaciones con instrumentos derivados en los límites establecidos en esta ley y en dicho Régimen, y
- 9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).

A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los instrumentos señalados en este artículo.

El Régimen de Inversión establecerá también los criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo, en la mencionada resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo. Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Hacienda.

La suma de las inversiones en instrumentos específicos de cada tipo de aquellos señalados en la letra k), podrán incorporarse a los límites globales por instrumento establecidos por la ley o el Régimen de Inversión. Esta incorporación será determinada por la Superintendencia.

